

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES



Implicancias de la identificación social agrícola en la dinámica de los conflictos socioambientales en el Perú: Rechazo al proyecto Tía María por parte de los dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo

Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Ciencia Política y Gobierno presentado por:

Sánchez Curioso, Isaura Yamilé

Asesor:

Tanaka Gondo, Ricardo Martin

Lima, 2022


Informe de Similitud

Yo, Tanaka Gondo, Ricardo Martin, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor(a) de la tesis/el trabajo de investigación titulado Implicancias de la identificación social agrícola en la dinámica de los conflictos socioambientales en el Perú: Rechazo al proyecto Tía María por parte de los dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo del/de la autor (a)/ de los(as) autores(as) Sánchez Curioso, Isaura Yamilé

dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 18%. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 20/11/2023.
- He revisado con detalle dicho reporte y la Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 24 de noviembre del 2023

Apellidos y nombres del asesor / de la asesora: <u>Tanaka Gondo, Ricardo Martin</u>	
DNI: 06408442	Firma 
ORCID: 0000-0001-6640-1518	

DEDICATORIA

Para los pobladores del Valle del Tambo y su persistencia en la defensa de sus tierras.



AGRADECIMIENTOS

A mis padres, quienes me han apoyado incondicionalmente y me han motivado a seguir adelante con mis estudios, sueños e ideales.

A mis hermanas y hermanos, quienes con su amor me han brindado soporte en los momentos más difíciles.

A mi familia, quienes han sido pilar fundamental en el proceso de mi formación académica y me han demostrado su apoyo en todo momento.

A mis amigas y amigos, quienes han confiado y confían en mí, alentándome a seguir adelante y no rendirme.

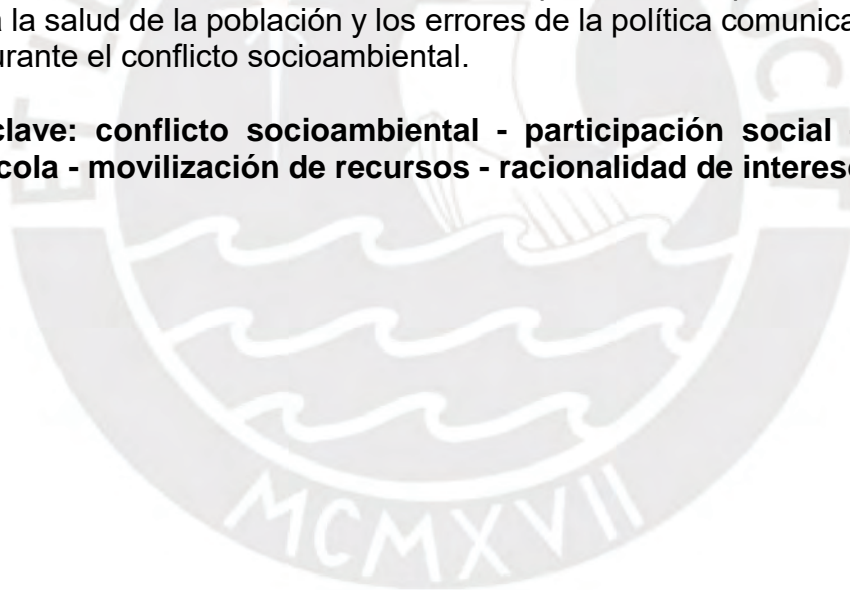
A mi asesor, Martín Tanaka, por aceptar ser mi guía en este proceso.



RESUMEN

El país enfrenta una problemática social centrada en los conflictos socioambientales, donde hay disputas por los impactos generados, por proyectos extractivos en comunidades o poblaciones donde sus actividades económicas giran en torno a la agricultura o ganadería. La presente tesis estudia la postura en contra de los dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo respecto a la ejecución del proyecto Tía María. La tesis basa su análisis en el estudio de material bibliográfico y de entrevistas realizadas a actores involucrados, entre ellos agricultores, dirigentes sociales del Valle del Tambo, representantes y trabajadores de la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC), instituciones estatales, periodistas y miembros de colectivos de la ciudad de Arequipa. Esta tesis evidencia una lógica de influencia centrada en motivaciones, intereses, apoyo y soporte que generan en la postura de los dirigentes y agricultores del Valle del Tambo una consolidación de su participación e incidencia en el espacio público. En ese sentido, la investigación plantea que la postura en contra de los agricultores y dirigentes sociales parte de una identificación social agrícola, la cual motiva a dichos actores a la búsqueda de recursos tanto económicos como intelectuales que les permite participar e incidir en la dinámica del conflicto. Estas motivaciones recaen en factores tales como los antecedentes de la empresa, los impactos negativos al ambiente, a la salud de la población y los errores de la política comunicacional de la empresa durante el conflicto socioambiental.

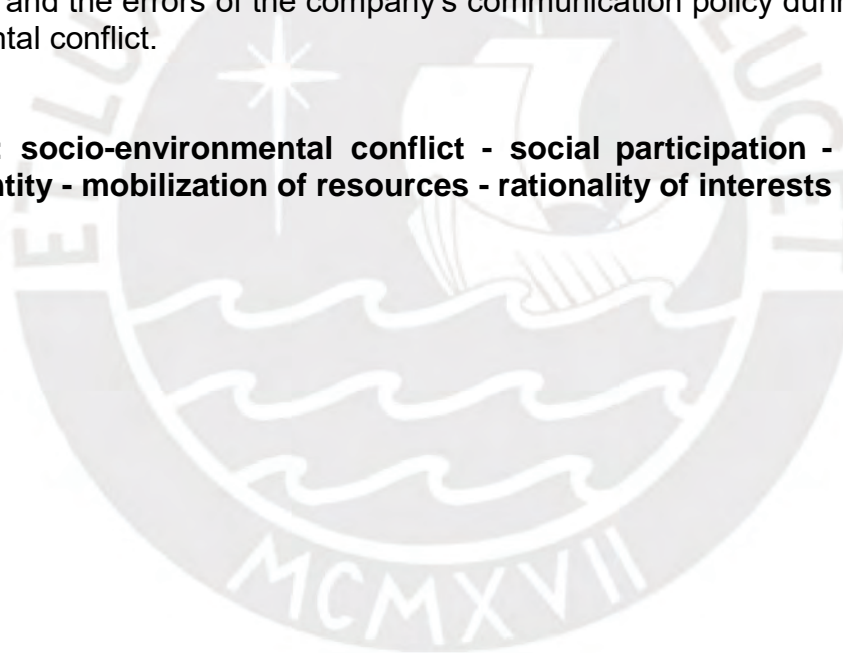
Palabras clave: conflicto socioambiental - participación social - identidad social agrícola - movilización de recursos - racionalidad de intereses



ABSTRACT

The country faces a social problem centered on socio-environmental conflicts, where there are disputes over the impacts generated by extractive projects in communities or populations where their economic activities revolve around agriculture or livestock. This thesis studies the position against the social leaders and farmers of Valle del Tambo regarding the execution of the Tía María project. The thesis bases its analysis on the study of bibliographic material and interviews conducted with stakeholders, including farmers, social leaders of Valle del Tambo, representatives and workers of the Southern Peru Copper Corporation (SPCC), state institutions, journalists and members of unions in the city of Arequipa. This thesis evidences a logic of influence centered on motivations, interests, support and support that generate in the position of the leaders and farmers of Valle del Tambo a consolidation of their participation and incidence in the public space. In this sense, the research suggests that the position against farmers and social leaders stems from an agricultural social identification, which motivates said actors to search for both economic and intellectual resources to participate and influence the dynamics of the conflict. These motivations fall on factors such as the company's background, the negative impacts on the environment, on the health of the population, and the errors of the company's communication policy during the socio-environmental conflict.

Keywords: socio-environmental conflict - social participation - agricultural social identity - mobilization of resources - rationality of interests



Índice

Introducción	1
Capítulo 1: Revisión de literatura	5
1.1. Conflictos socioambientales en el Perú	5
1.2. Actores sociales en conflictos socioambientales	9
1.3. Conflicto socioambiental Tía María	11
Capítulo 2: Marco Teórico.....	14
2.1. Teoría de los movimientos sociales.....	14
2.2. Teoría de la identidad social.....	16
2.3. Teoría de la movilización de recursos	18
Capítulo 3: Justificación y metodología.....	20
3.1. Justificación	20
3.2 Marco metodológico.....	21
Capítulo 4: Antecedentes y características socioeconómicas y políticas del Valle del Tambo.....	27
4.1. Historia de la agricultura en el Valle del Tambo.....	27
4.2. Características de la agricultura en el Valle del Tambo	30
4.3. Características socioeconómicas en el Valle del Tambo	37
4.4. Instituciones sociales y económicas en el Valle del Tambo.....	47
Capítulo 5: Conflicto Tía María : Análisis de la participación social	49
5.1 Cronología de la participación social	49
5.2 Actores sociales involucrados	57
5.3. Narrativas del conflicto socio ambiental.....	61
Capítulo 6: Análisis de la orientación social de los agricultores y dirigentes del Valle del Tambo	63
6.1 Identificación social agrícola de los agricultores y dirigentes sociales	63
6.2. Papel de los dirigentes en la dinámica del conflicto socioambiental.....	72
6.3. Política de la empresa en la dinámica del conflicto socioambiental	74
6.4. Involucramiento y apoyo de actores externos a los dirigentes sociales y agricultores	82
Conclusiones	86
Referencias bibliográficas.....	94

Índice de tablas

Tabla 1. División urbana-rural en el Valle del Tambo (según distritos) 2017	38
Tabla 2: PEA ocupada por actividad económica 2017.....	42
Tabla 3: Empleo en riesgo por actividad minera.....	44
Tabla 4: Valor bruto de la producción agrícola 2010 y 2019	45
Tabla 5: Principales productos agrícolas en la producción provincial y nacional 2019(en toneladas).....	46
Tabla 6: Juntas de Usuario de Riego y Comisiones de Regantes en el valle del Tambo.....	48
Tabla 7. Diferencias entre los estudios de impacto ambiental.....	69



Índice de gráficos

Gráfico 1. Tipología de agricultores.....32



Introducción

En el Perú, en la década de los noventa existieron cambios institucionales que conllevaron a la implementación de un nuevo modelo económico centrado en proyecciones de crecimiento. Así pues, desde dicha época, debido a los marcos regulatorios del país, se promulgaron normativas que han favorecido la promoción privada y la inversión extranjera. En ese sentido, la lógica del mercado se ha centrado en la asignación de recursos¹, y el papel del Estado ha quedado abocado a la función regulatoria. Cabe mencionar que bajo dicho escenario se ha generado un crecimiento sostenido a lo largo de los años en diferentes sectores económicos del país. Uno de estos sectores productivos favorecidos ha sido el de la minería e hidrocarburos. Como lo señala Kuramoto y Glave (2007), la actividad minera entre los años 1995 al 2004 creció en un 7.2%, generando el incremento de un 3.5% en la economía peruana y consolidándose la actividad minera como un importante motor del desarrollo económico del país por la generación de divisas.

Sin embargo, de manera paralela al crecimiento del sector minero, las actividades extractivas han generado un alto nivel de conflictividad social en el país, sobre todo el incremento de los denominados conflictos socioambientales. Estos conflictos han acrecentado su intensidad a través de los años, colocando en relieve enfrentamientos entre tres actores principales: comunidades, empresas extractivas y el Estado peruano. Dichas disputas se han enmarcado en los impactos perjudiciales que ocasionan los proyectos extractivos, tanto al ambiente como a la salud de los habitantes de las zonas aledañas donde se ejecutan dichos proyectos.

Ante tales impactos negativos producidos por los proyectos mineros, ha sido evidente, a través de los años, el proceso de consolidación de resistencia social hacia las ejecuciones de estos. Cabe mencionar que, en los 2000s frente a los problemas y tensiones con los proyectos extractivos, el movimiento social alrededor de la industria minera se vio representado en un inicio por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas Por la Minería (CONACAMI)². En los siguientes años, dicho accionar se vio complementado por una larga tradición de luchas de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por los proyectos mineros. Asimismo, la resistencia social abordó movimientos ambientalistas, regionalistas

¹ Proceso de distribución de recursos disponibles en un momento determinado con el fin de maximizar los resultados.

² Organización civil que abarca comunidades y organizaciones sociales afectadas por las actividades extractivas.

y sindicales. Dichos movimientos sociales están caracterizados por una identificación comunitaria, perspectivas similares, racionalización de intereses, entre otros aspectos. Sin embargo, pese a la fortaleza del movimiento social, los conflictos socioambientales no han disminuido, algunos se han reactivado y otros se han iniciado. En ese sentido, bajo el escenario anteriormente explicado, deviene la interrogante: ¿es posible la incidencia directa o indirecta de los pobladores, dirigentes sociales y/o comunidades en las decisiones de las autoridades para la paralización o cancelación de dichos proyectos mineros? La respuesta común a ello, basándonos en la literatura, y en la experiencia propia como país, es que existen dificultades y barreras que limitan a las comunidades, dirigentes y otros actores sociales a influir o llegar a acuerdos con las autoridades respecto al futuro y/o desarrollo de dichos proyectos. Una de dichas dificultades recae en la incapacidad estatal para establecer mecanismos de diálogo con dichos actores. Así pues, ante la discrepancia - no solucionada - en torno a la realización de proyectos o a los impactos ya generados, resulta previsible la existencia de múltiples conflictos socioambientales en diferentes partes de nuestro país.

No obstante, en el departamento de Arequipa, provincia de Islay, los pobladores, dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo, han demostrado una particular capacidad organizativa y articulación en torno a sus demandas, intereses y necesidades respecto al proyecto Tía María que busca ejecutarse en dicho lugar. Para el año 2019, el Consejo Nacional de Minería³ decidió suspender la licencia de construcción de la obra a la empresa minera SPCC. Todo ello bajo la argumentación de procesos de revisión del proyecto que podrían generar daños irreparables al Valle del Tambo y a la población. Pero de ahí deviene una paradoja: si dicho proyecto minero significa para el Estado peruano una gran inversión que desear cancelada y/o paralizada afectaría económicamente al país, ¿por qué, en este caso, las presiones y/o demandas por parte de los pobladores del Valle del Tambo sí lograron la verificación del proyecto y su paralización?

³ Órgano jurisdiccional administrativo en materia de minería encargado de resolver asuntos o problemáticas relacionadas con el sector minero.

Ante dicho planteamiento, la presente investigación se pregunta ¿qué explica la postura en contra de los agricultores y dirigentes sociales del Valle del Tambo respecto al proyecto Tía María? Para responder dicha interrogante se revisaron los informes de conflictos sociales en el Perú de la Defensoría del Pueblo, artículos de investigaciones que abordan las razones, consecuencias y los puntos claves en controversia, así como documentos, notas de prensa y comunicados por parte de los Frentes de Defensa, la empresa Southern y otras autoridades. De la misma manera, se analizaron teorías que permiten comprender la lógica de intervención, incidencia e involucramiento de los agricultores y dirigentes sociales en la dinámica del conflicto Tía María.

La tesis refleja que la dinámica del conflicto se ha caracterizado por cuatro etapas principales: latencia, manifiesto, crisis y violencia, donde una serie de acciones tales como marchas, protestas, enfrentamientos, huelgas evidencian el aumento de la conflictividad social. Asimismo, demuestra la participación de una serie de actores caracterizados por sus funciones, intereses e intervenciones realizadas en el desenvolvimiento del conflicto. De la misma manera, la tesis demuestra la fortaleza de un movimiento social en dicha comunidad, que gracias a ciertos factores tanto políticos, sociales, culturales y económicos logran incidir en las instituciones públicas y las autoridades locales, regionales y nacionales al llevar su consigna y lograr que dichos actores desistan en la continuación del proyecto.

Además, la tesis demuestra que la lógica explicativa a la postura en contra de los dirigentes sociales y agricultores recae en una identificación social agrícola que se manifiesta en la búsqueda de recursos para lograr incidencia en la dinámica del conflicto y por ende la defensa del valle del Tambo. Esto último, pues dicho valle les proporciona no solo un sustento económico, sino también representa un lazo emocional con el espacio y sus tierras que los conecta con sus antepasados y refleja el futuro de sus nuevas generaciones. En medio de esta lógica, la tesis también apunta al mal manejo comunicacional por parte de Southern que fortalece dicha identificación social. De igual manera, demuestra el papel de liderazgo de los dirigentes sociales en el movimiento social de dicha comunidad; así como la participación de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación local como las radios que brindan apoyo en la resistencia y sostenimiento en el tiempo de acciones en contra al proyecto minero.

Ante ello, la investigación demuestra la necesidad de un análisis macro en torno al conflicto Tía María, en específico la descomposición de un análisis respecto a cada actor y la explicación de factores, hechos que sustenten sus posturas y las respuestas en medio de la dinámica del conflicto. Tal es el caso de la indagación de la respuesta de la empresa Southern y la relación con los actores sociales en contra al proyecto minero. Pues si dicha empresa busca la aceptación por parte de los pobladores del Valle del Tambo, es necesario que tenga una política y por ende una respuesta articulada con sus intereses. De igual manera, la profundización de la participación de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. En ese sentido, la presente investigación aporta ideas para próximas investigaciones que busquen analizar las relaciones de poder y de interacción entre la comunidad afectada y actores externos, tales como los mencionados anteriormente.



Capítulo 1: Revisión de literatura

Las investigaciones alrededor de los conflictos socioambientales se han centrado en el análisis de las controversias de los proyectos en torno a las actividades mineras e hidrocarburíferas. La mayoría de las discusiones se encuentran abordadas desde las ciencias sociales, aunque en algunos casos se han visto aproximaciones desde la rama de ingeniería y derecho. Desde la ciencia política⁴, la literatura se ha centrado en análisis sociales y políticos, brindando conclusiones acerca de las causas, consecuencias, repercusiones, representaciones y participación social.

En la presente revisión de literatura se presentan una serie de textos analizados y abocados al tema de investigación que explican la postura en contra de los dirigentes sociales y/o agricultores del Valle del Tambo. Así pues, se realiza una recopilación de literatura enfocada en la comprensión de definiciones, características y causas de los conflictos socioambientales en el Perú. Asimismo, se presentan las características de los actores sociales en conflicto socioambientales, cómo estos inciden y se movilizan en dichos conflictos. Y, por último, se presentan estudios sobre las causas, consecuencias y actores en la dinámica de conflicto socioambiental Tía María.

1.1. Conflictos socioambientales en el Perú

En el Perú, el alto nivel de conflictividad social es uno de los fenómenos con más relevancia, debido a las consecuencias en los ámbitos ambiental, político, social y económico (De Echave, 2018) en el país. En medio de esta realidad, la literatura enfocada en los conflictos socioambientales ha dado cuenta que, desde la década de 1980, debido a los diferentes procesos de modernización, los gobiernos de turno del país se enfocaron en las limitaciones del sistema que impedían la expansión de las actividades de extracción de recursos naturales (Bridge, 2004). Así pues, se desarrollaron modelos de explotación que apostaron por una política minera (Damonte, 2012).

⁴ Ciencia social que estudia tanto teórica como práctica las relaciones de poder, comportamientos políticos y sociales en la sociedad.

Como resultado de dichas medidas, las instituciones estatales sufrieron cambios que instauraron una configuración particular de patrones que lograron que la economía peruana girará en torno al sector extractivo⁵ (Bebbington, 2007).

De manera general, los conflictos socioambientales han sido señalados como situaciones donde las poblaciones ven afectados sus intereses y exigen un cambio o reparación de los efectos causados por las empresas extractivas (Defensoría del Pueblo, 2012). En medio de este contexto, para la Defensoría del Pueblo⁶ (2022), hacia el mes de agosto del 2022, se han registrado 209 conflictos con caracterización de conflictos activos y/o latentes. De este número, el 63.6% son de tipo socioambiental, estando el 66.9% relacionados con la minería.

Desde las ciencias sociales, el fenómeno como tal ha sido abordado en torno a las teorías de la naturaleza de dichos conflictos. Así pues, los conflictos socioambientales han sido caracterizados como aquellos procesos donde intervienen diferentes sectores de la sociedad, los cuales, al tener un conjunto de creencias, percepciones, intereses y necesidades respecto a temas ambientales, configuran situaciones que podrían culminar en hechos violentos (Soria, 2006). Esto se puede complementar con lo mencionado por Castro (2013) que define a un conflicto socioambiental como la controversia entre dos o más actores que aluden a un “interés por el uso de uno o más recursos naturales” (p.51) que generan manifestaciones discordantes.

A partir de ello, las investigaciones presentan alcances sobre las características particulares de los conflictos socioambientales que han conllevado a la realización de tipologías en torno a ellos. Así pues, para Arellano (2011) existen conflictos que rechazan la minería, los que se encuentran en negociación y los conflictos por el control de transferencias fiscales. Por otro lado, de Echave, Diez, Huber, Revesz, Lanata y Tanaka (2009), articulan la clasificación en torno a dos ejes: la capacidad de movilización de los actores y la percepción de los intereses, que establecen así zonas con escasa conflictividad, zonas con permanente, pero baja intensidad, zonas con permanentes conflictos, pero con negociaciones de por medio y zonas con alta intensidad de conflictividad. Mientras que, autores como Paredes y De la Puente (2014) establecen la tipología en torno al rechazo total de los proyectos mineros y otros donde existe convivencia, pero con una permanente

situación de conflictividad. Además, Arce (2015) establece conflictos antimineros y conflictos redistributivos. Por su parte, Arellano (2011) plantea una subdivisión entre conflictos de derechos y conflictos de servicios.

Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo (2012), en torno a los conflictos socioambientales, no establece una subdivisión, pero sí señala que este tipo de conflictos abarca la dinámica de los recursos naturales, espacio ambiental y comunidades locales. Para dicha institución, este tipo de conflictos engloban aspectos macro como los factores políticos y económicos, los cuales permiten la configuración de una determinada situación.

Por otro lado, desde un enfoque de la literatura local se ha abordado una gama diversa en torno a las causas de los conflictos socioambientales. Para la Defensoría del Pueblo (2007), las causas de este tipo de conflictos son múltiples y complejas, y en muchos de estos casos convergen entre sí, dando lugar a conflictos violentos que son difíciles de controlar y manejar estatalmente. Así pues, se destaca la idea que dichos conflictos se producen por la insatisfacción de demandas, intereses afectados o percepciones de amenazas hacia sus recursos naturales, espacios de vivienda, entre otros (Tanaka, 2012). Esto se relaciona con lo mencionado por Castro (2013) que señala que una de las causas es el miedo de los pobladores por la tierra, recurso al cual ellos le otorgan valor y que perciben pueda ser contaminado por las actividades mineras.

De igual manera, Leff (2003) asocia estos conflictos con la denominada ecología política,⁷ la cual aborda la afectación de los espacios de desarrollo social de las poblaciones por las implicancias que trae el mercado. Asimismo, los posibles impactos tales como la degradación de la tierra, contaminación del agua y pérdida de la biodiversidad engloban causas de dichos conflictos (Defensoría del Pueblo, 2007) puesto que podrían alterar los patrones sociales y culturales de una comunidad. Autores como De Echave et al. (2009) y Arellano (2008) dan cuenta que la percepción de incompatibilidad entre la agricultura y minería es una causa previsible en el estallido de dichos conflictos.

⁵Actividades relacionadas en la obtención de recursos naturales localizados en el suelo, subsuelo o aguas marinas.

⁶ Institución autónoma encargada de actuar en defensa del bien común y de los derechos de los ciudadanos peruanos.

⁷Según Calderón (2013) la ecología política es un campo académico que critica y caracteriza los fundamentos de la justicia ambiental y la sobreexplotación de recursos.

Desde otra perspectiva, esto es asociado con la poca capacidad estatal, la falta de confianza hacia el Estado o autoridades en temas vinculados a la prevención de la contaminación.

En línea con las causas de los conflictos socioambientales, investigaciones dan cuenta de factores multicausales, entre las cuales destacan las variables económicas, sociales y políticas (Brown y Stewart, 2015). Por un lado, el estudio encabezado por Paredes y Escobar (2018) establece que los conflictos socioambientales se generan debido a la desigualdad económica y a la creciente tasa de la pobreza en los lugares donde se desarrollan dichos proyectos extractivos. Aquello es explicado por la distribución inequitativa de ingresos y riqueza del país (Calderón, 2012). Sumado a ello, Wolf (1972) argumenta que la raíz de los conflictos socioambientales también reside en la distribución de los recursos y cómo estos inciden en la apropiación de los ecosistemas y sus respectivos usos. Complementado ello, en torno a causas de corte social, Castellares y Fouché (2017) evidencian que la exclusión social de ciertas comunidades y/o pobladores - a lo largo de los años en el país - son causa que derivan en la no aceptación a las actividades extractivas y que se relacionan con la afectación de derechos fundamentales.

Otro aspecto de la literatura recopilada con base en conflictos socioambientales se centra en las consecuencias de estos. Según la Defensoría del Pueblo (2007) estas son de tipo económico, social y político. En relación con los costos financieros o económicos, se señala que “ante un retraso temporal o paro en las actividades de una empresa, esta podría no tener la capacidad suficiente para cumplir con sus compromisos de deuda, lo que implicaría un riesgo financiero de consideración” (Saade, 2013, p.48) afectando los calendarios de inversión, el trabajo en la región y el ingreso por el canon minero.

Respecto a las consecuencias sociales, estas se encuentran relacionadas con la salud e integridad de las personas (Castillo et al., 2020). Así pues, se genera el “debilitamiento de una cultura de diálogo entre los ciudadanos, las empresas y el Estado para resolver sus conflictos” (Defensoría del Pueblo, 2007, p.73) que se ven enmarcados en encuentros hostiles, faltas de respeto, comentarios estereotipados, adjetivación y tensiones. En el pico más álgido de estas disputas, las consecuencias más lamentables son las pérdidas humanas. En esa misma línea, se señalan las

consecuencias de tipo ambiental, tales como las afectaciones al ambiente y a los recursos naturales (Castillo et al., 2020).

Por otra parte, los impactos políticos, para la Defensoría del Pueblo (2017) se concentran en la debilidad de autoridades locales, regionales y nacionales que se traduce en el resquebraje de la institucionalidad, conllevando afectaciones para la calidad de la democracia del país. Aquello pues socava el derecho de la participación ciudadana y repercute en los derechos de comunidades campesinas y nativas.

1.2. Actores sociales en conflictos socioambientales

Respecto a los actores sociales involucrados en conflictos socioambientales, la literatura no es amplia, faltan investigaciones específicas que se centren en los diversos aspectos de intervención y representación de los mismos. No obstante, la recopilación de las fuentes aborda aspectos generales de caracterización de dichos actores sociales.

En la literatura sobre el mapeo de actores involucrados, para autores como Bebbington (2009), la participación de estos se resume en el involucramiento del Estado, población y empresa. Por otra parte, para la Defensoría del Pueblo (2017), los actores involucrados pueden dividirse en tres grupos: actores primarios, secundarios y terciarios. Sumado a ello, investigaciones como la De Echave (2018) se centran en el Estado y la división de acuerdo con el ámbito de incidencia nacional, regional o local.

Desde otra perspectiva, De Echave (2018) en sus investigaciones señala que uno de los actores más importantes en los conflictos socioambientales son las comunidades locales. Aquellas son las que se encuentran afectadas directamente por los proyectos o actividades extractivas (Arce, 2015). Para De Echave (2018), dentro de estas comunidades se encuentran las rondas campesinas⁸ y frentes de defensa⁹. Complementando ello, Tanaka, Zárate, Huber y Morel (2011) argumentan la incursión de nuevos actores sociales como los comités de luchas¹⁰, los cuales hanreemplazado a las federaciones agrarias y sindicatos.

⁸ Para la Defensoría del Pueblo (2013), las rondas campesinas son organizaciones que ejercen funciones de seguridad, justicia e interlocución entre el Estado y comunidades.

⁹ Organizaciones políticas que representan algún movimiento social.

Por otro lado, investigaciones como la de Castro (2013), evidencian a las organizaciones no gubernamentales como actores inmersos en dichos conflictos de manera externa, que se centran en el apoyo particular a los pobladores y suelen posicionarse como puntos de apoyo a dichas comunidades para hacer frente a las empresas mineras.

Por otro lado, la literatura también ha analizado las percepciones y sentimientos que conllevan la participación de los actores (Alvarado, 2014), sus trayectorias, dinámicas (De Echave et al., 2009) y cosmovisiones (Bravo, 2009). Asimismo, sobre los procesos de formación de las coaliciones y redes de gobernanza¹¹ (Augusto, Dargent y Rousseau, 2017). De este punto, Bebbington (2009) señala los debates existentes sobre la dinámica interna en la movilización social, alianzas, participación de actores y relaciones locales. Tandioy (2001), se ha centrado en las relaciones empresa - comunidad y ha evidenciado una serie de estrategias entre dichos actores que pugnan por acciones dinámicas a los cambios que proponen.

Con relación a la movilización social de dichos actores, algunas investigaciones como las de Ferreira y Tincopa (2019) han evidenciado la importancia de las dinámicas de los involucrados y el choque de sus narrativas. En la misma línea, Arce (2015) da cuenta que la demanda de derechos y servicios impulsan dichas movilizaciones. Dentro del desarrollo de la movilización, otro tema abordado por la literatura es la ejecución de la protesta. Según Arce (2010), se encuentra relacionada con los costos y beneficios que implica la pérdida de fuentes de ingresos, trabajo infantil, desempleo, entre otros.

Con base en ello, el proceder de los actores sociales es explicado por dos razones; por un lado, la dimensión cultural identitaria, que explica la defensa de intereses sobre la base del estilo de vida particular caracterizado por aspectos propios de la comunidad. Por otro lado, el paradigma de la autonomía explica como la participación de los actores sociales se consolida o no dependiendo de las relaciones internas colectivas.

Otros temas abordados en artículos se encuentran relacionados con la fragmentación en los espacios de interacción, diálogo entre los actores claves como

lo son el Estado, comunidad y empresa (Gouley, 2005).

Asimismo, se han abordado mecanismos de participación e intervención utilizados por dichos actores para concertar acuerdos, posicionar sus demandas o promover el respeto de sus consignas (Castro, 2021). De igual manera, temas tales como la participación local ligada a aspectos tales como el individualismo y cooperación. Por otro lado, el papel de los medios de comunicación en los conflictos ha sido abordado en casos específicos tales como Bagua, Conga, Tambogrande, entre otros; todos con las similitudes de buscar, difundir e informar los sucesos desde sus propias posibilidades y relaciones con medios de comunicación nacionales (Huamaní et al., 2012)

1.3. Conflicto socioambiental Tía María

Investigaciones como la de Cáceres (2012) y Camino (2015) se han centrado en la evolución del conflicto. Asimismo, investigaciones colaborativas entre de RED MUQUI, Cooperación y Frente de defensa del Valle del Tambo (2011) han enfocado sus estudios en el trabajo de campo donde se describen los eventos como las acciones emprendidas tanto por parte del Estado, empresa y población. Adicionalmente, investigaciones como la de Quintanilla y Scott (2013) han tomado el caso de Tía María para el análisis de las tensiones estructurales en el país o visiones comparadas (Flores, 2019) centradas en aspectos macro como la Ley de Recursos Hídricos.

En torno a otro punto, el tema que entra en discusión es el relacionado con las causas de dicho conflicto. Ferreira y Tincopa (2019) han hallado factores relacionados con la contaminación del agua y aire. Por su parte, Pinto (2016) establece factores como el peligro de los efectos negativos al ambiente y a la salud de la población. De manera específica, el artículo de Pinto aborda subtemas como la afectación a la agricultura, la dirección de vientos, irregularidades en los estudios de impacto ambiental, problemas en torno a talleres y audiencias públicas entabladas por la empresa Southern.

¹⁰ Órganos representativos bajo una consigna para la defensa de intereses de un grupo social.

¹¹ Para Ledesma (2021), "las redes de gobernanza han surgido como respuesta al aumento de la complejidad de las políticas públicas y como consecuencia de las deficiencias de los modelos de gestión pública tradicionales". Recuperado de : <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v60i2.15619>

En la misma línea, pero desde otra perspectiva, Ugarte (2018) señala factores relacionados con la capacidad del Estado en la resolución y transformación de conflictos. Sumado a esto, investigaciones como las de Tanaka y Huber (2007) dan cuenta de aspectos relacionados con el centralismo, la falta de articulación y de políticas públicas ambientales para controlar las actividades extractivas.

Por otro lado, desde aspectos comunicacionales, Bances (2020) se concentra en la gestión de la comunicación en el conflicto de Tía María y de las repercusiones en la economía de la provincia de Ilay. Mientras que investigaciones como la de Montoya (2019), y Mamani y Nuñez (2016) enfatizan el papel de los distintos periódicos nacionales como locales en dicho conflicto minero.

En lo que se refiere a los actores involucrados, estos se centran en los pobladores del Valle del Tambo - dedicados en su gran parte a la agricultura de la zona, la empresa y el Estado. Respecto a los pobladores del Valle del Tambo, su representación social y política se concentra en torno a los dirigentes sociales o las asociaciones como las Juntas de Usuarios de Riego (RED MUQUI et al., 2011). Asimismo, investigaciones como la de Ibarra y Morales (2016) dan cuenta de la participación de los pobladores en torno a tres subgrupos: jornaleros, agricultores y dirigentes. Sumado a ello, Martínez (2017) enfatiza una tipología en torno a las características de los agricultores.

En torno a la empresa, las investigaciones de Martínez (2017), Ibarra y Morales (2016), Ferreira y Tincopa (2019) se centran en la caracterización, antecedentes y acciones de la misma emprendidas durante la dinámica del conflicto social. Y, por último, en lo que se refiere al Estado, dichas investigaciones se enfocan en las particularidades de este, su participación en los diferentes niveles de gobierno y el involucramiento de sus autoridades centrales como presidentes y ministros. Por otro lado, Castillo (2018) se centra en el análisis de los actores primarios y en el proceso de diálogo entre los mismos para la gestión del conflicto socioambiental. De la misma manera, Bedoya y Torres (2015) analiza el desenvolvimiento de los actores tanto primarios como secundarios y se enfoca en temas como la “conspiración minera”.

Se evidencia que la literatura en relación con el conflicto Tía María gira en torno a aspectos concretos, pero muy centrados en las causas y consecuencias; si

bien aborda ideas, conclusiones respecto a los actores sociales y su involucramiento, aquello es debido a que son ideas que sirven de explicaciones para los temas mencionados anteriormente que podrían explicar el inicio y desarrollo del conflicto.



Capítulo 2: Marco Teórico

2.1. Teoría de los movimientos sociales

El estudio de los movimientos sociales se ha constituido en los últimos años como un tema de interés en la investigación social. Desde las ciencias sociales, este es un tema que se ha abordado desde las diferentes ramas, entre ellas la ciencia política y la sociología; desde dichas ciencias se ha buscado entender la complejidad de los movimientos sociales, sus respectivas variaciones en el tiempo y espacio, así como aspectos relacionados con sus intereses, motivaciones, actores, entre otros.

Como marco de referencia en el estudio de los movimientos sociales, para comprender aristas de los mismos, hemos de establecer algunos enfoques. Para Diani (2015) se destacan los siguientes: el comportamiento colectivo, la teoría de la movilización de recursos, el proceso o comunicación política, nuevos movimientos sociales, el enfoque psicosocial, entre otros. Dichas propuestas abordan aspectos claves de los movimientos sociales que permiten caracterizarlos. En una primera instancia, estudios realizados por Davies (1962) y Gurr (1970) dan luces sobre características de este nuevo fenómeno social. Para dichos autores, el movimiento social tiene origen en la motivación individual de participación en la colectividad; en otras palabras, dichos movimientos son manifestaciones de motivaciones personales y sentimientos frustrados por una cierta realidad.

Desde otra perspectiva, autores como Della Porta y Diani (1999), en relación con los movimientos sociales de la década del sesenta, ponen en manifiesto la caracterización de los mismos. Sus aportes se centran en cómo las tensiones estructurales influyen en el comportamiento colectivo y por ende en la acción colectiva.

Por otra parte, para Candón (2010), profesor de la Universidad Complutense de Madrid, plantea en su propuesta tres enfoques clásicos de los movimientos sociales: la psicología de masas, la sociedad de masas y el comportamiento colectivo. En relación con el último, para dicho autor, este enfoque recae en el cambio social y la organización social. En la misma línea, Turner y Killian (1987), bajo el enfoque señalado, definen a los movimientos sociales como la acción organizada e institucionalizada que “actúa con cierta continuidad para promover o

resistirse a un cambio en la sociedad o en la organización de que forma parte” (p. 223) estableciendo así liderazgos determinados más por la respuesta normal de sus participantes que por aspectos formales. Mientras que, para Berrío (2006), la propuesta de la teoría del comportamiento social permite entender a los movimientos como aquellos fenómenos cargados de comportamientos, estrategias intencionales que buscan enfocarse en algún aspecto de la realidad.

Por su parte, Tilly (1978), plantea una propuesta sobre movimientos sociales vinculada al análisis histórico de las fases de conflicto en la historia contemporánea, asociando la emergencia de dichos movimientos a un proceso político. En análisis de su perspectiva teórica, los movimientos son una serie de interacciones de poder, en la que ciertos individuos con consignas estipuladas por su sector demandan atención y distribución del poder para que estas sean cumplidas. Asimismo, los movimientos sociales son portadores de identidades compartidas y creadores de actores coherentes que lidian con sus autoridades y/o antagonistas.

Autores como Touraine (1981), Melucci (1989), y Laraña (1994) llegan a presentar un nuevo enfoque, ya no ligado a aspectos tradicionales, con o sobre la clase social, si no con enfoque en otros aspectos tales como culturales y/o estructurales. Por un lado, desde la perspectiva de Touraine (1981), los movimientos sociales son comportamientos colectivos que buscan el control social del sistema de reglas dominantes en una sociedad. En ese sentido, los movimientos sociales se enfrentan a su adversario por dicho control; pero dicha acción es emanada por la combinación de identidad, oposición y totalidad, que les brinda a dichos individuos un sentido de identidad con base en sus creencias y orientaciones para hacer frente a decisiones ligadas a la historicidad.

Mientras que, la distinción de Melucci (1989) se centra en definir a los movimientos sociales como un fenómeno caracterizado por tres dimensiones: acción colectiva basada en la solidaridad, que confluye al enfrentamiento de un adversario por bienes y servicios, y no aborda límites de compatibilidad del sistema. En otras palabras, los nuevos movimientos sociales abordan cambios culturales que abordan temas como género, cultura, ambiente, entre otros. Además, se compone de actores e individuos que se identifican no por la ideología de clase social a la que pertenecen, si no, por otras características que les otorga una identidad

colectiva y por ende tener acción colectiva para enfrentar a un enemigo común (Candón, 2010).

Por su parte, Laraña (1994), caracteriza a los movimientos sociales en siete aspectos: no existe una definición sobre el papel de los participantes, pero se sabe que no solo se enmarca dentro de la estructura de clase, existencia de una pluralidad de ideas, tendencias y valores, existencia de nuevas identidades, inclusión de aspectos privados de los individuos, renovación en temas como la organización y participación intensas, y organización segmentada y fragmentada.

2.2. Teoría de la identidad social

Para brindar explicaciones respecto a la postura en contra de los productores agrarios y dirigentes sociales, se considera relevante explorar la teoría de la identidad social, pues los estudios, investigaciones que se han realizado en base a esta perspectiva teórica han abordado principalmente las relaciones interpersonales e intergrupales de los individuos de una sociedad. Así pues, se considera una teoría crucial para entender la acción social, colectiva de ciertos individuos.

Las raíces de la teoría de la identidad social se ubican en la década de los cincuenta con los estudios de percepción categorial elaborados por Henry Tajfel, así como investigaciones posteriores en relación con el paradigma del grupo mínimo (Tajfel, Billig, Bundy y Flament, 1971) que aborda el favoritismo de los individuos por un grupo, y que se caracteriza por un comportamiento intergrupar para conseguir ciertos objetivos (Peris y Agut, 2007). Dicho paradigma, en la época, evidenció las conductas separacionistas que realizan los individuos y con ello despertó el interés de diferentes estudios. Así pues, para los años noventa existió un apogeo sobre temas y/o explicaciones en base a la teoría de la identidad social. De esta manera, se encuentran estudios sobre la cohesión social (Hogg, 1992), influencia grupal (Turner, 1991), estereotipos (Oakes, Haslam y Turner, 1994), prejuicio (Brown, 2006), conflictos sociales (Ashmore, Jussim, Wilder, 2001) y comportamiento colectivo (Reicher et al, 1987).

Para el año 1978, Turner y Brown, en base a las ideas de Tajfel, acuñan el término de la teoría de la identidad social (Scandroglio y López, 2008). Las investigaciones señalan que dicha perspectiva teórica surge con el objetivo de

brindar explicaciones sobre las relaciones sociales que se daban entre los individuos y cómo éstos lograban mantenerse en el tiempo (Etchezahar, Ungaretti y Brussino, 2018). En los primeros estudios de Tajfel (1974), dichos autores definen la identidad social como “aspectos de la propia imagen del individuo que se derivan de las categorías sociales a la que percibe pertenecer “(p. 16) y que por ende causan impactos en los grupos sociales. De esta manera, se puede deducir que el individuo está conformado por un conjunto de conocimientos sobre determinados grupos que al asociarlos con sus emociones difieren en grados de pertenencia a ciertos grupos. Complementando ello, desde la perspectiva de Cantor, Pérez y Carillo (2018) la identidad social de un individuo se concibe desde espacios comunitarios, donde dichos individuos pertenecen por sus preferencias a determinados grupos y se mantienen en estos por la obtención de la satisfacción que les pueden generar.

Por otro lado, Etchezahar, Ungaretti y Brussino (2018) señalan que la identidad social son procesos constructivos de interacciones que se enmarcan en un contexto particular que a su vez se explican por procesos afectivos y cognitivos., Spears, Oakes, Ellemers y Haslam (1997), en relación con el contexto, señalan dos características: brinda información sobre la posición social y facilita o restringe la información en base a la legitimidad o validez que permite que recepciones los individuos. En ese sentido, hay un proceso de socialización donde el individuo toma conciencia sobre los demás miembros que lo rodean. Dentro de este proceso, el concepto de categorización es relevante, debido a que simplifica y ordena la realidad social de los individuos. Aquello conlleva una organización en los estímulos que impactan en las percepciones (Gaertner et al, 1993) y por ende un comportamiento intergrupar que divide el mundo en categorías como nosotros y ellos (Canto y Morla, 2005).

En líneas generales, la identidad social es el resultado de procesos cognitivos, evaluativos y emocionales, y la dependencia de que sea positiva o negativa se enmarcará en la valoración que el individuo haga de su grupo en comparación con otros grupos. Además, en el supuesto de que los individuos no se encuentren satisfechos con su identidad social, tienen tres posibles alternativas para lograr una valoración más positiva: la movilidad individual, la creatividad social o la competición social.

2.3. Teoría de la movilización de recursos

El enfoque en esta teoría deriva de las características particulares de los movimientos sociales, resulta pertinente abordarla, pues se enfoca en los medios que los individuos, grupo humano, utilizan en el desarrollo de su acción colectiva para lograr ciertos objetivos vinculados a sus intereses colectivos. Vinculando ello con el caso Tía María, se considera que dicha teoría se vincula con las acciones emprendidas por los agricultores y/o dirigentes para hacer frente a la ejecución del proyecto minero. En ese sentido, permitirá un análisis centrado en la postura de dichos actores sociales con enfoque en los medios empleados, ya sean obtenidos por su cuenta, por apoyo de otros actores. De esta manera, se concluirá si hay un tipo de racionalidad de intereses y autonomía por parte de los agricultores y/o dirigentes sociales.

Como se abordó de manera general en los párrafos anteriores, la teoría de la movilización se centra en la configuración de una serie de condiciones que permiten a los individuos hacer uso de una variedad de recursos en la movilización de su acción colectiva y las diferentes dimensiones de esta. En las investigaciones de Laraña (1999), Brunet y Pizzi (2010), la teoría de la movilización de recursos se basa en conductas racionales de los individuos que extrapolan a la colectividad con el objetivo de que por medio de recursos ya sean formales o informales logren de manera eficaz sus objetivos trazados. Complementado ello, Puricelli (2005) señala que la teoría de movilización de recursos aborda dinámicas y tácticas que se generan de manera externa para el éxito de ciertos fines.

Un aspecto de esta teoría es que engloba enfoques centrados en diferentes factores de dicha movilización de recursos; entre estas se encuentra la movilización, estructura de oportunidades y proceso colectivos de interpretación (Laraña, 1999). Respecto a dichas sub-escuelas, la de la movilización, se centra en las formas de organización. Para dicha sub-escuela, esto engloba la estructuración de la acción colectiva y la respuesta a los antagonistas de dicho grupo social por medio de conexiones de parentesco, amistad o redes informales. En relación con las redes informales, estas son definidas como espacios de individuos politizados que cuentan con liderazgos flexibles. Por otro lado, la sub escuela de las oportunidades políticas, define dichas oportunidades como la coyuntura para que aparezcan los

movimientos, tales como aperturas institucionales, élites vulnerables, e incentivos externos (Tarrow, 1997); en otras palabras, esta escuela aborda aspectos sociales y políticos que les permiten a los grupos influir sobre el sistema político (McAdam et.al,2001). Por último, los procesos colectivos de integración, hacen énfasis en las acciones que se transmiten de forma cultural en una sociedad. Esto engloba la memoria colectiva y rasgos de la sociedad que influyen en la acción colectiva. Así pues, esto se traduce en la vinculación de agravios, injusticias que los movimientos o grupos sociales realizan y argumentan soluciones para la construcción futura en pro de la sociedad que garantiza la justicia social.

Como señalan McCarthy y Zald (1977), la perspectiva teórica de la movilización de recursos analiza los métodos que los grupos sociales adoptan para adquirir recursos y cómo desde ellos generan un soporte que les permite incidencia interna como externa del grupo social. Desde esta perspectiva, los movimientos sociales son considerados como agentes de cambio ante el funcionamiento de un sistema social. Cabe mencionar que el surgimiento de la teoría de movilización se basó en lineamientos propuestos por la teoría del comportamiento colectivo que caracterizaban a los movimientos como no institucionalizados (Melucci,1989). En otras palabras, el análisis ya no se centra en considerar el individuo como alguien egoísta, sino como uno que forma de cierto grupo, pero que gestiona la disponibilidad de recursos humanos, económicos, y/o deconocimiento para alcanzar sus objetivos.

Capítulo 3: Justificación y metodología

3.1. Justificación

En la presente investigación, la elección del caso de estudio se debe a que este es un “*caso representativo*” que busca o está destinado a representar una población más amplia de casos relevantes (Gerring y Cojocarú, 2015) para así explicar características propias de un fenómeno. En ese sentido, la tesis busca encontrar explicaciones, y si es posible aplicarlas en otros casos, sobre qué explica la orientación y posturas de los dirigentes sociales y/o agricultores en el conflicto socioambiental Tía María.

Enfocarse en el estudio del conflicto socioambiental Tía María con el objetivo de comprender la participación, capacidad e influencia de los dirigentes sociales y agricultores en la paralización del proyecto minero es importante por diversas razones. Primero, a nivel teórico, dicho caso dentro del contexto de conflictos sociales resulta ser uno con características particulares, entre las cuales destaca el hecho de que la población se encuentra en desacuerdo tanto a corto como largo plazo en la ejecución del proyecto minero, a comparación de otros conflictos sociales como Conga¹². Asimismo, teniendo en cuenta que la paralización del proyecto Tía María representa una acción peculiar en el rumbo de las situaciones de los conflictos sociales, el estudio de la orientación de los dirigentes sociales y/o agricultores, la predominancia de ciertos factores permite centrarnos de manera específica en los roles que desempeñan los diferentes actores que intervienen en la dinámica del conflicto, y de los cuales la literatura recopilada no profundiza su participación. Así pues, la tesis contribuirá a la literatura sobre la dinámica de los conflictos socioambientales, sobre todo en la indagación de factores que posiblemente no se han abordado o que no se han considerado en la explicación del desencadenamiento de dichos conflictos, tales como la influencia de actores sociales.

¹² Conflicto socioambiental ligado al proyecto Conga, ubicado en la provincia de Cajamarca

Segundo, en un plano práctico, el estudio del conflicto socioambiental Tía María, centrado en la postura de los dirigentes sociales y/o agricultores, permite abocar respuestas a su influencia en la gestión de dicho conflicto socioambiental, que es importante a nivel social, pues abarca características particulares que repercuten económica, social, ambiental y políticamente en el Estado, comunidades y empresa. El nivel de conflictividad en nuestro país es alto, la pugna de intereses, la diversidad de perspectivas, las discrepancias entre actores, y los debates sobre la licencia social para la ejecución de los proyectos mineros generan grandes preocupaciones para el Estado. Aquello por el desarrollo de movilizaciones, protestas que de incurrir en la violencia conllevan a hechos fatídicos y lamentables. En ese sentido, las conclusiones del presente trabajo de investigación aportarán a reconocer el rol de dichos actores, la configuración de ciertos factores particulares dentro del conflicto, que contribuirán a encontrar mecanismos eficientes alineados a la necesidad de resolución del mismo.

En líneas generales, se justifica el interés de la investigación en el caso Tía María, ya que es un caso sugerente de analizar considerando tres aspectos claves: el rol de los dirigentes sociales, agricultores, sus interrelaciones e influencia en el conflicto Tía María, los hallazgos que podrían obtenerse respecto a la participación de los actores, y la existencia de un patrón de rechazo a los proyectos en los conflictos socioambientales. De esta forma, dicho caso puede ilustrar la influencia del rol de los dirigentes sociales y/o agricultores en un conflicto socioambiental en base a narrativas que giran en torno al arraigo de una economía agrícola¹³ y el rechazo a la minería. En ese sentido, los resultados de la tesis podrían dar luces respecto a otros conflictos con características similares.

3.2 Marco metodológico

La presente investigación recae en un tipo de diseño explicativo cualitativo. Respecto al carácter explicativo, este tiene el objetivo de analizar las causas de un determinado fenómeno (Goertz y Mahoney, 2012). Así pues, esta investigación busca dar cuenta de aspectos que predominan en la postura tomada por parte de los dirigentes sociales y/o agricultores del Valle del Tambo respecto al proyecto Tía María y que, por lo tanto, han influido en la paralización de dicho proyecto minero.

Asimismo, desde el enfoque cualitativo que se le brinda a la investigación, se tiene como propósito estudiar aspectos particulares del caso para una mejor comprensión del fenómeno ocurrido (Aragón y Guibert, 2016); en ese sentido, el análisis de la postura de los dirigentes sociales y/o productores agrícolas. La investigación expresa a su vez un diseño no experimental transversal, puesto que se hace la observación del fenómeno sin intervención alguna. Esto debido a que la explicación o el recojo de información sobre la postura en contra de dichos actores sociales gira en torno a material bibliográfico y entrevistas.

Por otro lado, respecto a la recolección de datos e información, el rastreo de procesos¹⁴, será de vital importancia, pues permitirá identificar de forma detallada los mecanismos causales que operan en la orientación de los agricultores y dirigentes sociales del Valle del Tambo. Asimismo, proporcionará mayores herramientas para la evaluación de las hipótesis, así como el testeado de las mismas.

La reconstrucción de procesos se basó en la creación de una línea de tiempo desde el 2003 hasta la actualidad, todo ello en base a los informes de la Defensoría del Pueblo, información de prensa y bibliografía. Con dicha información la reconstrucción se realizó de manera específica, abarcando los acontecimientos y hechos ocurridos en el conflicto Tía María, ubicando así actores intervinientes. La línea de tiempo también evidenció las acciones emprendidas por parte de dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo; así como las respuestas por parte de las autoridades estatales. En un primer recojo de información, la reconstrucción fue muy amplia; sin embargo, debido a comentarios, consejos, un segundo filtro de dicho proceso y línea de tiempo se enfoca netamente en abordar aspectos de la participación social y de elementos claves para comprender la postura de los dirigentes y pobladores del Valle del Tambo.

En esa línea, dado que la investigación busca hacer la reconstrucción del proceso del conflicto socioambiental Tía María, la metodología utilizada se basó en entrevistas semiestructuradas a los actores involucrados que permitieron dar cuenta de la percepción y de las propias narrativas de dichos actores.

¹³ Situación de fijación y dependencia a la actividad económica agrícola

Las entrevistas estuvieron orientadas para dirigentes, autoridades regionales y locales, pobladores, frentes de defensa, autoridades de la empresa, periodistas y especialistas. De manera detallada, se realizaron 21 entrevistas: 12 agricultores, entre ellos 6 dirigentes sociales, 4 agricultores, 2 periodistas, 2 autoridades de la empresa, 1 miembro de un colectivo, 2 profesores y 2 estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa. Para poder obtener estas entrevistas, el proceso se basó en primera instancia en un mapeo general de actores con la identificación de variables, intereses y posturas; todo ello enmarcado de manera cronológica. Esta síntesis de información se llevó a cabo en torno a una serie de informes e investigaciones que abordaron la reconstrucción del conflicto desde diferentes perspectivas y clasificación de actores claves.

Teniendo este mapeo general de actores involucrados en la dinámica del conflicto, sea de manera directa como indirecta- haciendo referencia a autoridades que asumen roles y responsabilidades- se procedió al contacto de los mismos por medio de redes sociales como Facebook. El objetivo de este primer acercamiento fue informar a dichas personas sobre el proyecto de tesis que se estaba realizando, de qué trataría dicha investigación y si se podría contar con su participación. Entotal, el contacto fue con más de 50 actores involucrados, de los cuales solo diez respondieron el mensaje por dicha red social. No obstante, por medio de una serie de contactos se tuvo acercamiento con el ingeniero Juan Aste, quien en ocasiones anteriores había colaborado para el tema de entrevistas relacionadas con la temática de conflictos socioambientales. Por medio del ingeniero en mención, se pudo obtener el contacto de Dilvia Gálvez, la cual brindó información y el contacto de otros actores inmersos y participantes en la dinámica del conflicto.

¹⁴ Método de investigación que se enfoca en el análisis de los hechos y contexto social.

Cabe mencionar que, si bien los actores involucrados en torno a este conflicto son muchos, la presente tesis ha abarcado que el número de entrevistas sea homogéneo entre las posturas marcadas respecto al proyecto minero. Por un lado, estas cubren una porción considerable de la postura de los dirigentes y agricultores del Valle del Tambo. Mientras que, en torno a la postura de las autoridades de la empresa, las entrevistas no cubren la proporcionalidad considerada. Sin embargo, para llenar dicho vacío en información, el recojo de información se centró en las declaraciones brindadas por las autoridades a medios de comunicación, que, si bien no eran muchas, eran puntuales respecto al proyecto Tía María. Asimismo, con informes proporcionados por la misma empresa en su página institucional, donde se encuentran informes de seguimiento sobre sus proyectos. Esto sin duda contribuyó a que la visión no se encuentre sesgada en relación con la postura en contra de los dirigentes sociales y pobladores del valle, si no que permitió abordar de manera amplia y general las diversas posturas y lógicas inmersas en la dinámica del conflicto.

En torno a la confiabilidad de las entrevistas, esta se encuentra dentro de los márgenes de la veracidad, pues se han basado en actores involucrados, los cuales han contado con posicionamiento y visibilización política como mediática en medios sociales; algunos de los entrevistados son autoridades que cuentan con reconocimiento en el Valle del Tambo por su labor en toda la dinámica del conflicto.

Con el mapeo cubierto, la fase de la realización de entrevistas se centró en pactar tres entrevistas como mínimo y cinco como máximo con los actores antes mencionados; así pues, se coordinó, con previa anticipación, los horarios y fechas para llevarlas a cabo. De manera general, una primera entrevista se enfocó en el informar al entrevistado sobre la tesis, de que trataba y el propósito de la misma; la segunda entrevista abordó los puntos relevantes en torno al conflicto, todo ello en base a preguntas semiestructuradas que permitieron dar pie a un recuento de los acontecimientos y acciones. Por último, la tercera entrevista tuvo como objetivo aclarar algunas declaraciones difusas o en las que se buscaba obtener mayor información. Cabe mencionar, que la presente tesis se desarrolló en el contexto de la pandemia, la opción de traslado no era viable por el tema de las restricciones impuestas por el gobierno. A esto se sumaron los límites para realizar las entrevistas de Zoom, pues la gran mayoría de entrevistados no contaba con red para

conectarse. De 21 entrevistas, ocho de ellas se realizaron por la aplicación Meet y en 13 casos se realizaron por llamadas de WhatsApp; la duración de cada una de las entrevistas fue de mínimo 30 minutos, la segunda mínima de 45 a 60 minutos y la tercera de 20 minutos.

Por otra parte, en las entrevistas realizadas, la mayoría de los entrevistados solicitó que en la información no se incluyeran sus nombres en los fragmentos de sus declaraciones. Aquello por un tema de temor en torno al contexto del conflicto y las suspicacias que estas podrían generar. En ese sentido, por un tema de mantener el anonimato a dichos entrevistados es que se consigna en sus declaraciones las iniciales de sus nombres y apellidos, y lo mismo con los demás entrevistados.

Cabe mencionar la importancia de la recolección de datos en torno a entrevistas, pero se debe señalar que, en medio del desarrollo de esta investigación desde sus inicios, la pandemia del covid-19 y las medidas adoptadas por el gobierno generaron limitaciones en el recojo presencial de información en la zona de Arequipa. Sin embargo, no ha sido una dificultad, pues las entrevistas se han realizado de manera virtual por medios como Zoom, WhatsApp y Meet, y se han llevado de manera óptima, en los márgenes del respeto, cordialidad y bajo la información correspondiente por parte de la tesista.

Aquellas entrevistas han sido complementadas con literatura primaria y secundaria, entre las cuales destacan tesis centradas en el análisis del conflicto Tía María en el 2016, análisis de la participación social y política de los actores involucrados, y gestión del conflicto desde una perspectiva estatal. Asimismo, investigaciones enfocadas en las razones, causas, consecuencias, perspectivas y narrativas del conflicto Tía María. De igual manera, reportes de la Defensoría del Pueblo brindan alcances de primera mano por parte de especialistas en los años en que se ha desarrollado el conflicto socioambiental.

Dentro de las limitaciones para el desarrollo de la investigación, principalmente orientada a la cantidad homogénea de entrevistas sobre las diferentes posturas controversiales en el conflicto Tía María, una limitación fue el limitado contacto con la empresa Southern. Esta situación se evidenció en la falta de respuestas por correo electrónico y redes sociales de la empresa. No obstante, para compensar la información se contactó a especialistas vinculados y orientados

a la especialización en minería; así como en la recopilación de entrevistas en medios de comunicación realizadas por parte de dichas autoridades, reportes de la empresa y comunidades en su página institucional



Capítulo 4: Antecedentes y características socioeconómicas y políticas del Valle del Tambo

Para comprender la postura, en contra del proyecto Tía María, de los dirigentes sociales y agricultores del Valle del Tambo, resulta ineludible analizar la historia y características de la agricultura, así como la situación socioeconómica y política de la zona que permite sustentar las posiciones de dichos actores.

4.1. Historia de la agricultura en el Valle del Tambo

En la época incaica, para el siglo XVI, según Arenas (2018), los incas descubrieron el valle del Tambo bajo el nombre de Tampupailla. Según los especialistas, los primeros incas se dedicaron en dicho espacio territorial al cultivo de ají y coca, que con el pasar de los años los conllevó a iniciar con el cultivo del azúcar y el arroz. Dichos productos agrícolas se constituyeron como alimentos banderas en toda la zona sur agrícola. Posteriormente, para 1540, cuando la información del Valle del Tambo llegó a oídos de los españoles, estos últimos emprendieron viajes (Arenas, 1999), los cuales fueron registrados en la crónica de Cieza de León. Para dicho cronista, los españoles denominaron a la zona Tambopalla, pero por una cuestión de simpleza usaban la palabra Tambo.

Para el siglo XVII, en el Valle del Tambo, la agricultura, aún era incipiente, los productos agrícolas que se sembraban, no todos en su totalidad, llegaban a culminar su proceso. Durante dicha época, la agricultura se vio obstaculizada por desbordes del río Tambo, que llegaron a afectar gran parte de la zona agrícola; en ese lapso de tiempo, los agricultores dejaron de sembrar. La agricultura se comenzó a reiniciar para el año 1630; según Arenas (1999) porque en dichos años se comenzó a cobrar los diezmos. Gracias a la readaptación del terreno para el cultivo se logró que la zona nuevamente pueda ser utilizada para la agricultura. Así pues, reaparecen en escena agricultores sembrando los primeros cañaverales y cultivos de papas, maíz y olivos.

La agricultura en el Valle del Tambo continuó con sus procesos de adaptación; para el siglo XIX, como señala Martínez:

“se reportaron las primeras haciendas de caña y otras tierras de cultivo donde se sembraron ají, algodón, maíz y papas. En este siglo aumentaron las tierras

de cultivo, se ganaron terrenos a los bosques y al río. Existían grandes extensiones de terreno, pero sin las condiciones de producción agrícola necesarias, entregándolas a personas que la necesitaban trabajar a cambio de la preparación de un suelo apto para la siembra” (2017, pp. 56).

Como se señala, en dicho período, las tierras comenzaron a ser prestadas para personas de pocos recursos o alquiladas a pobladores para que puedan trabajar por un determinado tiempo, y de esta manera también se favorezca la condición del suelo para el cultivo futuro. Para uno de nuestros entrevistados, sus antepasados, sus bisabuelos y abuelos llegaron a trabajar al Valle del Tambo, cuando la tierra aún no era de calidad como lo es actualmente (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.). Asimismo, menciona que existieron disputas por la propiedad de las tierras, lo cual generó que muchas personas busquen volverse independientes.

Cabe mencionar que, en dicho período, las haciendas de caña que se convirtieron -gracias a la producción agrícola - importantes en el sector fueron Pampa Blanca y Chucarapi. Como menciona Ibarra y Morales (2016), la hacienda decaña Chucarapi, propiedad de la familia López de Romaña obtuvo liderazgo en la venta de su producción gracias a los agricultores que trabajaban las tierras. Así pues, resulta evidente como la familia López Romaña logró construir su propia planta industrial extractora para producir su propia azúcar. En ese sentido, cabe destacar que, pese a que fue una empresa patronal, su base central de producción se encontraba en la labor realizada por los agricultores.

Resulta relevante señalar que a mediados del siglo XX e inicios del XXI, la zona del Valle del Tambo se vio caracterizada por el recibimiento de migrantes sureños¹⁵. El punto central es que dichos migrantes también eran agricultores, lo cual favoreció al fortalecimiento de la agricultura de la zona. Aquello pues, los migrantes arribaban con otros y nuevos conocimientos, y siendo más en cantidad aprovecharon las oportunidades de trabajo en las tierras, logrando así que la economía de la zona se consolide. Este proceso de desplazamiento a largo plazo también se ha visto caracterizado por ser uno de corto plazo, pues algunos agricultores de las zonas del Sur llegan al Valle del Tambo en busca de trabajo en temporada alta.

¹⁵ Residentes de un departamento que se trasladaron a la ciudad de Arequipa, la gran mayoría del departamento de Puno.

Para el dirigente social del Valle del Tambo con iniciales M.I., este proceso migratorio ha generado cambios en la relación de uso de la tierra de los agricultores propietarios; antes, la agricultura en dicha zona estaba consignada como un medio de subsistencia y de apoyo entre los agricultores, pues existían cambios recíprocos de ciertos productos agrícolas con otros agricultores vecinos. Sin embargo, esto ha cambiado, pues ya no se ve a las tierras como medio de subsistencia, sino también bajo un criterio de monetizar lo que se obtenga de ella y poder vender los productos al mercado nacional. Según el dirigente social, la articulación del Valle del Tambo se debe a estos cambios recíprocos e identificación del uno con el otro, pero también con la relación de los agricultores con las tierras, pues se evidencia que estos deciden qué alimentos cultivar, alimentos que no ocasionen daños o que no degraden el suelo.

En la actualidad, la agricultura en el valle sigue reposando sus características en la producción de alimentos, bajo las mismas metodologías y con un avance respecto al tema de la composición, articulación de los dueños, agricultores, tierras y con avances tecnológicos. Asimismo, es evidente el control que se menciona en líneas anteriores respecto a la conservación del suelo; los agricultores velan por la tierra, y lo hacen mediante ciclos transitorios de cultivos donde recogen datos o información respecto a la disposición del agua. Ello con el objetivo de que la tierra no se vea afectada.

“En ese sentido, se alternan productos que tengan un rendimiento óptimo en el mercado –que son los que más perjudican la capacidad- El cultivo de arroz, por ejemplo, forma parte de una de las campañas agrícolas anuales de muchos agricultores en el valle para revitalizar el suelo” (Martínez, 2017, pp.36)

Bajo dicho control es posible hablar de la sostenibilidad de la agricultura¹⁶ en el Valle del Tambo. Los agricultores han aprendido a lidiar con las diferentes lógicas de mercado que se han presentado a lo largo de los años.

¹⁶ Sistema de prácticas agrícolas ecológicas basadas en la producción de alimentos que se encuentren al margen del cuidado del suelo, agua y aire.

Por una parte, buscan aprovechar la rentabilidad que las tierras les brindan en relación con los cultivos. Pero pese a ello, no descuidan la conservación de las tierras en las que cultivan y/o cosechan.

Cabe mencionar que el comienzo del siglo XXI estuvo caracterizado por reclamos y protestas por parte de pobladores del Valle del Tambo, en su gran mayoría por agricultores. Los desencadenantes de dichas protestas fueron la escasez del agua en la zona y la propuesta de cambio por parte de algunas empresas, entre ellas Chucarapi, que propuso el cambio de siembra¹⁷ de algunos productos por otros más rentables. A estos motivos, también se sumaron los relacionados con el uso de las aguas del río de Tambo que algunas empresas mineras como Gold Fields y Buenaventura¹⁸(Arenas,1999) vienen realizando. Y aello el posible ingreso o ejecución del proyecto minero por parte de la empresa Southern.

4.2. Características de la agricultura en el Valle del Tambo

La actividad agrícola, al constituirse como una de las principales actividades económicas dentro del Valle, ha implicado que la misma desde sus inicios también constituya cierta estructura y tipología. Para abordar la estructura agraria, según Martínez (2017), la ocupación del territorio desde 1970 brinda los rasgos característicos de la misma; en sus inicios, con la expansión poblacional que conllevó a que decenas de agricultores sureños migren hacia el valle, se generó una ampliación económica en la agricultura.

Así pues, para período de 1980, en el Valle del Tambo, con el proceso migratorio, el régimen de haciendas,¹⁹ se procedió a una transformación de las confederaciones cooperativas hacia un proceso de pequeñas propiedades agrarias, que es lo que en la actualidad caracteriza a la zona. (Condori, 2018). Según el CENSO Agropecuario Nacional del 2012, hay 3.463 unidades agropecuarias, de las cuales, la superficie para el cultivo se ubica entre el 17%, siendo así 2.69 hectáreas de un total de 15.079.

¹⁷ Rotación del modo de siembra de cultivos

¹⁸ Compañía minera de Innovación Minera del Perú

¹⁹ Toda unidad de producción agrícola que usa mano de obra dependiente y que explota la tierra y el trabajo de manera tradicional.

Un aspecto relevante de la estructura agraria en el Valle, es que el minifundio²⁰ “no es de subsistencia, como ocurre normalmente en el sector rural, por el contrario, genera una economía rentable porque se encuentra dentro de una dinámica de mercado.

En ese sentido, la pequeña producción agrícola en el valle no sólo viabiliza mejoras en el proceso económico” (Martínez, 2017, p.45), sino también permite que las familias campesinas puedan reparar, construir sus casas y lograr confort hogareño que permita mejoras en la calidad de vida de las familias del Valle del Tambo. En otras palabras, permite la subsistencia por las ventas generadas.

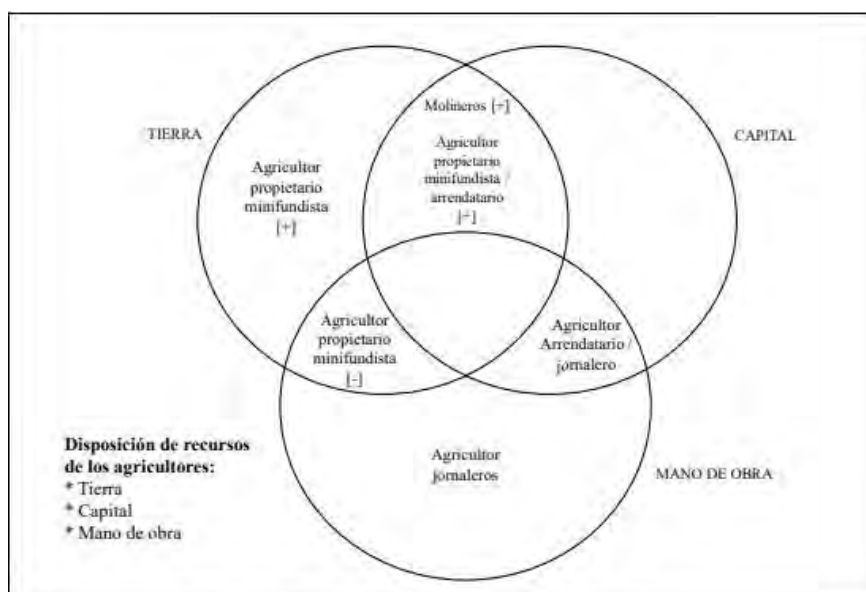
De manera específica, alrededor de 5 mil pobladores se dedican a las actividades agrícolas, configurándose de la siguiente manera:

“en Cocachaca unos 2.000 propietarios, 7.000 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios), 8 000 jornaleros; en Deán Valdivia 1 500 propietarios, 2 500 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) y 4 000 jornaleros; y la Punta de Bombón 1 500 propietarios, 2 500 conductores de chacras (propietarios y arrendatarios) y 3 000 jornaleros. Así pues, el 90% de los agricultores se concentran en los distritos de Cocachaca, Deán Valdivia y Punta de Bombón. Es decir, la gran masa de agricultores se ubica en los distritos directamente involucrados por una posible afectación minera” (Ibarra y Morales, 2016, pp. 25)

Por otro lado, la agricultura, al ser la actividad económica principal de la zona, ha conllevado que las familias se organicen y se establezca de manera tácita una tipología (Gráfico 1); así pues, podemos encontrar en el valle a agricultores propietarios, arrendatarios y mixtos. Los agricultores que son empresarios agrícolas son en su gran mayoría nacidos en el valle y quienes han heredado las tierras de sus familias, logrando así posicionarse en el sector del comercio. Mientras que, los minifundistas, aquellos que también nacieron en el valle, pero que obtuvieron las tierras gracias a la reforma agraria.

²⁰ Porción de tierra, larga y estrecha. Real Academia Española

Gráfico 1. Tipología de agricultores



Fuente: Martínez (2017)

La mayoría de los empresarios agrícolas son los dueños de los molineros, pero su posición respecto a la ejecución del proyecto Tía María depende de la afectación o no a sus intereses económicos. Tal es el caso de Juan Colquemarca y Helber Samalvide, el primero es un migrante puneño que llegó al valle en 1961, y empezó a trabajar como jornalero; mientras que, el segundo es un empresario foráneo con inversiones en el lugar. Para el primero en cuestión, que el proyecto Tía María no se ejecute es la opción más viable, él no pretende dejar sus actividades agrícolas, quiere conservarlas y continuar con legado familiar. Por otra parte, Helber, si considera la opción de poder vender sus tierras si es que la empresa minera le otorga un buen precio por ellas. En ese sentido, se evidencia, que en contraposición hay distintos lenguajes de valoración respecto a las tierras que recaen en la identificación agrícola.

Con respecto a los minifundistas, estos nacieron en el Valle del Tambo y en la actualidad son dueños de alrededor de 10 topos de tierras como mínimo, lo cual es considerado dentro del rango estándar para ser considerado como pequeña y mediana propiedad de agricultores propietarios. Para este grupo la agricultura es parte fundamental de sus vidas, tanto de manera económica como simbólica. Sin embargo, enfrentan problemas y riesgos agrícolas, tales como las deudas en torno

a las campañas agrícolas, que pueden verse afectados por los costos de producción. Dicha situación ha conllevado a que muchos de ellos alquilen sus predios para que puedan sustentar sus gastos corrientes; la idea de vender no les ronda por la mente, ellos prefieren conservar sus tierras, pues consideran que las tierras son parte de sus vidas y les permite una producción económica que sirve de garantía para sus familias (Síntesis de las entrevistas realizadas a tres agricultores de Valle del Tambode iniciales J.G.Z., C.A.H. y N.S.).

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que los propietarios minifundistas prefieren el alquiler antes que la venta de sus terrenos. Es decir, prefieren conservar sus tierras. Esto se origina principalmente por tres motivos. Primero, debido a que la renta de la tierra representa un ingreso económico seguro frente a las deudas y para sobrellevar los gastos cotidianos. Segundo, porque la tierra constituye una garantía; un retén económico para la familia en un futuro. En ese sentido, la familia constituye una institución social esencial, un marco orientador para la reproducción económica colectiva. Tercero, porque la tierra encarna el arraigo para muchas personas que han pasado su vida dedicada a la agricultura.

“¿Por qué no vendo mi propiedad en vez de alquilarla? Acá viene la respuesta. Porque esa propiedad que yo tengo se la pienso delegar a mis hijos para que tengan un patrimonio de confianza, y el día que pierdan su trabajo o no tengan, ya tienen una tierra que su padre le dejó, y ese es el pensamiento de la mayoría, de un 80%, un 10% lo vende, del otro 10% no sé, pero aquí somos conservantes, a quien le cuesta tener una propiedad no la vende así no más [...]” (como se citó en Martínez, 2016, p.71)

Asimismo, en palabras del vocal de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, hay personas que son adultas mayores y que debido a su cultura, valores son “bien arraigados a su tierra”, ya que es lo único que tienen y para ellos representa mucho más que un medio de subsistencia es parte de su identidad. (Martínez, 2017).

No obstante, hay posiciones de este grupo que apuesta por una minería responsable, tal es el caso de Sara, minifundista de Cocachacra que señala:

“Nosotros tenemos chacra, nosotros también vivimos de la chacra, yo pienso que puedo hablar porque también tengo negocios, que venga la mina y que haya negocio para mí, pero también tengo chacra, entonces también no me gustaría que hagan algo porque también vivo de eso [...] a mí me gustaría una minería responsable que se haga cargo si hay daños, que no nos cambie la vida que tenemos, siempre digo lo mismo, yo no voy a querer que desaparezca mi chacra porque también vivo de eso (como se citó en Martínez, 2016, p.72)

Por otro lado, en otro segundo gran grupo están los agricultores arrendatarios, quienes desde los inicios de la historia agrícola del valle se han dedicado al alquiler de parcelas; para dicho grupo de agricultores, la ejecución del proyecto minero Tía María es perjudicial porque afectará las tierras acostumbradas a trabajar.

“La agricultura es rentable, hay sus riesgos, pero si es rentable. Solo falta apoyo del Estado, a veces ellos nos perjudican con el ingreso de productos más baratos, no hay comunicación y eso también nos afecta; si no hay comunicación, imagínese con la ejecución del proyecto” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de C.A.H.)

“soy agricultor, desde que tengo memoria me he dedicado a la agricultura con mi familia. Mis hermanos son agricultores, nosotros nos enfocamos en que por medio del alquiler obtener ganancias. Nuestra historia familiar es peculiar, mi padre es migrante de Puno, pero se casó acá en el valle y formó su familia. Creo que esta historia se repite en varias familias que conozco. Pero sin duda, el valle nos ofreció la oportunidad de trabajo” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.)

“Nos van a dañar la agricultura, no queremos saber si nos darán trabajo, acá ya estamos acostumbrados a algo, la agricultura es sostén de las familias, muchos de ellos ya mayores, no van a poder ir todos a trabajar a la mina, y más con los efectos que hay. La empresa no entiende lo que buscamos, tampoco entiende que tenemos una forma particular de vida, buscar imponernos algo y así no son las cosas” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales H.C.)

En las tierras que los agricultores arrendatarios ofrecen encontramos a los agricultores jornaleros, grupo humano que solo cuenta con su mano de obra para su reproducción socioeconómica, ellos no son propietarios de tierras y pocos son los que arriendan.

“siempre hay oferta en el valle, en la temporada alta es beneficioso para todos; yo estoy en contra del proyecto, no creo que los beneficios que ofrece la empresa sean ciertos, no creo que brinden trabajo a todos y más a gente tan joven como yo que no tiene experiencia” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.M.C.)

“Gano aproximadamente alrededor de 60 soles diarios, a veces hasta más, nome quejo, me permite satisfacer mis necesidades” (Entrevista realizada a dirigente social del Valle del Tambo de iniciales M.I.)

“Soy madre soltera y ser jornalera me ha permitido llevar comida a mi hogar, no estoy segura si me den trabajo en la minera, si se instala, si incluso es difícil conseguir trabajo afuera. El trabajo no es difícil, puede ser un poco arduo, pero llegas a acostumbrarte. Incluso mi hijo mayor me ayuda, compartimos momentos juntos, y como digo no es difícil” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.)

En el valle también se puede apreciar agricultores mixtos, este grupo de agricultores puede ser minifundistas- arrendatarios que alquilan sus pequeñas parcelas para solventar sus gastos y obtener mayores ingresos. Uno de los casos de este tipo de agricultores es Jaime De La Cruz, actor que será uno de los principales dirigentes en la acción colectiva en el conflicto Tía María. Su historia gira en torno a que él heredó tierras de su padre, quien las obtuvo de la reforma agraria. Sus padre eran emigrantes, que en el valle encontraron oportunidades de trabajo que en Puno no. Asimismo, él tiene su familia, y señala que la agricultura le ha brindado las posibilidades de sacar adelante a sus hijos y brindarles futuro profesional. En sus propias palabras:

“Yo vivo de la agricultura, yo tengo una propiedad gracias a mi padre que heredó algo, y tengo que defender eso, porque de eso mantengo a mis hijos, y aquí la gente vive de la agricultura y por eso la gente la defiende. Aquí si te das cuenta en el valle de Tambo, una gran mayoría que cultiva la tierra son

gente humilde que alquila la tierra a los dueños, porque ya la mayoría de los miembros no la siembra, porque están viejos o porque sus hijos se han ido a otras localidades y se han quedado con sus propiedades que no la pueden trabajar, entonces sus peones, camayos, se lo alquilan, entonces es esa gente la que está saliendo adelante con la agricultura, por eso es que esa gente también la defiende (como se citó en Martínez, 2016, p.78)

Por otro lado, se encuentran los arrendatarios -jornaleros, quienes rentan sus parcelas, pero que también alquilan su mano de obra en otras parcelas. Tal como Rosa, su historia de cómo llegó al valle es similar a la de Jaime; sus padres provenientes de Puno que la sacaron adelante a ella y sus cinco hermanos. Ahora ella se dedica a la agricultura igual que los hermanos, rentando predios para cosechas de arroz. Como enfatiza:

“Yo no sé hacer otra cosa que trabajar en la agricultura [...] a dónde más podría ir, pienso que me voy a quedar, acá a seguir como sigo, seguir trabajando, seguir sembrando más, hacer estudiar a mi hija, de repente mi hija va a tener su profesión, pero gracias a la agricultura porque de eso vivimos (como se citó en Martínez, 2016, p.79)

Mientras que, los agricultores asalariados -arrendatarios son aquellos que trabajan en las azucareras, pero de igual manera alquilan sus predios para que otros agricultores puedan trabajarlos, este tipo de agricultores no es muy común en el Valle del Tambo. Sin embargo, los trabajadores de la azucarera Chucarapi ilustran bien esta división. La gran mayoría vive en el valle del tambo. Como señalan, durante la reforma agraria, a los trabajadores de la hacienda les dieron una porción de tierra, que son topes. En la actualidad, ellas las alquilan, mientras trabajaban en la empresa recibiendo un sueldo, dijo que sumado a las fianzas por el alquiler de sustopos les permite sostener a sus familias. Algunas mencionan que el ingreso es poco, pero tanto con alquiler como su mano de obra se suma a la canasta familiar.

“Chucarapi tiene una ventaja [...] muy diferente a los agricultores de otras zonas que solamente viven de la agricultura, por ejemplo, Cocachacra, El Arenal, La Curva, La Punta, es diferente la situación porque nosotros somos asalariados, pero también tenemos los topes que es una ayuda para nosotros [...] en el caso de los toperos que son de Chucarapi, te voy a decir con toda franqueza, la mayoría está en contra, tampoco quieren” (como se citó en

Martínez, 2016, p.80).

4.3. Características socioeconómicas en el Valle del Tambo

El valle del Tambo es una zona costera ubicada geográficamente al sur del Perú, específicamente en el departamento de Arequipa. Dicho valle se encuentra ubicado en la provincia de Islay, la cual está conformada por seis distritos: Cocachacra, Punta de Bombón, Mejía, Mollendo, Islay y Deán Valdivia. Todo ello bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa. Espacialmente, la zona del Valle del Tambo abarca una expansión de alrededor de 350.225 hectáreas, ubicadas y divididas en la zona baja de la cuenca y las intercuencas del Río Tambo (RED MUQUI et al., 2011). Asimismo, como se señala:

“El Valle de Tambo se localiza en la zona natural de deyección del río Tambo, y en la zona de ampliación de frontera agrícola abastecida por el canal de irrigación Ensenada Mejía Mollendo (EMM) que toma las aguas del río Tambo. Su extensión actual es aproximadamente de 16 mil has (cerca del 5% de la extensión del Macro espacio), de las cuales casi 12 mil corresponden al área física cultivable. El caudal del río disponible para el Valledepende de las precipitaciones en la parte alta y húmeda de la cuenca – por escorrentía y alimentación del acuífero - en la época de avenida y, totalmente, del agua subterránea en la época de estiaje” (RED MUQUI et al., 2011)

Lo anteriormente expuesto muestra la importancia del río Tambo, y la importancia de la preservación de sus aguas para la agricultura, actividad económica predominante en la zona. Según declaraciones, los agricultores consideran que la ejecución del proyecto minero continuará afectando el caudal del río, que se ha visto perjudicado por factores climáticos. En ese sentido, la preocupación resulta evidente y más aún si a lo largo de los años “han existido promesas de construcción de represas para poder alivianar el impacto de los problemas que solo han quedado en acuerdos en papel con el Estado” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.)

En relación con el aspecto demográfico, para entender la condición de vida de los pobladores del Valle del Tambo, resulta necesario comprender la situación social de los mismos. El número de población censada, según el CENSO del 2017²¹,

establece, 52034 habitantes, siendo 26.226 hombres y 25.808 mujeres. También se establece que la población urbana es de 49.575 habitantes; mientras la población rural de 2,459 habitantes. El distrito de Mollendo cuenta con 24.073 habitantes, Cocachacra con 8.347 habitantes, Dean Valdivia con 6.854, Islay con 5.132, Mejía 1.172 habitantes y Punta de Bombón con 6.456. Asimismo, la división urbana-rural en dichos distritos en la siguiente (Tabla 1):

Tabla 1. División urbana-rural en el Valle del Tambo (según distritos) 2017

Distritos	Urbana	Rural
Mollendo	23 886	187
Cocachacra	7 519	828
Dean Valdivia	6 637	217
Islay	5 132	-
Mejía	-	1 172
Punta de Bombón	6 401	55

Fuente: INEI (2017). Elaboración propia

Podemos señalar que los distritos con mayor población rural son Mejía y Cocachacra, seguidos de Mollendo, Dean Valdivia y Punta de Bombón; la división urbana y rural es engañosa, pues según investigaciones y declaraciones propias de los agricultores, si bien el 90% de su población se ubica en el área urbana, los agricultores o trabajadores viven en la capital, pero trabajan en la zona rural. En palabras de dichos entrevistados, “somos un bloque, y las encuestas vecinales reflejan nuestra posición, no estamos de acuerdo con el proyecto, y como gran parte de la población del valle, los que vivimos en la zona urbana y rural. En lo que sí hay diferencia es con Arequipa, ahí hay personas que están a favor del proyecto minero, pero acá en todo el valle, yo creo que todos compartimos la misma idea, no debe haber diferencia” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.).

²¹ XII Censo de Población y VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas

Otro aspecto que brinda datos importantes de analizar es el nivel de educación con el que cuenta la población. Según el censo de 2017 efectuado a la población de 3 a más años de edad, según su nivel educativo alcanzado, se concluye que 240 habitantes cuentan con maestría y doctorado, 3.456 con educación superior universitaria completa, 1.651 con educación superior universitaria incompleta, 5.685 con superior no universitaria completa, 2.956 con superior no universitario incompleto, 19.488 con nivel secundario, 11.638 con nivel primario, 2.442 nivel inicial, 107 con educación básica especial y sin nivel educativo 2.197 habitantes.

Se puede evidenciar que, si bien las tasas de analfabetismo son bajas en la zona, el 4.40 % de los habitantes no cuenta con algún nivel educativo. Asimismo, que los niveles de instrucción alcanzados por la población en su mayoría son el nivel primario y secundario, siendo ambos más del 50% de la población censada. De igual manera, en lo referido a los grupos de edad, las cifras se acentúan más a partir de los 15 a 19 años, lo cual guarda relación con los niveles de educación alcanzados en los distritos.

“Somos conscientes de nuestra realidad, pero deben comprender que para nosotros el enfoque de nuestra vida es distinto; acá prima lo de generación engeneración y eso es lo que sucede con la agricultura. En muchas familias, el legado son sus tierras, pero también el trabajo en ellas ha permitido que saquen adelante a su familia. Tenemos profesionales, jóvenes que quieren salir adelante y se van a estudiar, pero eso depende ya de cada familia. Aunque también de otros factores vinculados con el Estado” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales A.G.)

En temas de la salud, la población del Valle del Tambo, en la provincia de Islay, de su población total, solo 36.506 habitantes se encuentran afiliados a algún tipo de seguro de salud. Según declaraciones de los entrevistados, hay limitantes en el acceso de salud, vinculados a las propias familias:

“Eso es un problema grave que debemos atender, pero también es complicado cuando se refiere a las barreras que hay para tener acceso a la salud. Algunos no están afiliados porque simplemente no quieren” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales A.G.).

Asimismo, limitantes asociadas al papel del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, los cuales se vinculan con el abastecimiento de equipos, recursos humanos para la dotación de medicamentos y atención.

“Es prioritario, creo que debemos tener todos porque estamos expuestos a varios peligros como la intoxicación de metales pesados, en el pasado ha sucedido y nadie se ha hecho responsable, pero también cuando vamos a realizarnos consultas no hay los equipos necesarios para dicho problema de salud” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.)

Desde algunas posiciones, los problemas en la salud de la población se pueden agravar con los proyectos mineros ejecutados en las zonas aledañas de los diferentes distritos.

“La contaminación del río Tambo nos ha perjudicado, hemos tenido altas concentraciones de arsénico que ha impactado en los cultivos y por ende en nuestro consumo” (Entrevista realizada a una agricultora del Valle del Tambo de iniciales A.C.).

“No contamos todos con seguro y si tenemos no cubre, hay falencias en nuestro sistema, las campañas de salud no abastecen las necesidades. Si el proyecto minero se ejecuta, estamos seguros de que habrá más problemas de salud, debemos prevenir esto” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales A.G.).

Por otra parte, en relación con las actividades económicas del Valle del Tambo, debido a su localización, la cual se encuentra ubicada en la deyección del río Tambo, una de las principales actividades es la agricultura. La zona del Valle del Tambo es abastecida por el agua del río Tambo, específicamente por el canal de irrigación de la Ensenada Mejía Mollendo. Dicho caudal es importante y fundamental, pues abastece a todo el valle. Sin embargo, al depender de las precipitaciones de la parte alta y húmeda de la cuenca, resulta relevante que no se vea afectado por contaminantes, pues afectaría la pureza del agua y por ende la agricultura de la zona.

“Sí, definitivamente, el proyecto minero que busca ejecutarse, Tía María, será perjudicial, sus estudios de impacto ambiental lo demuestran, los

antecedentes de la empresa también. Ya tenemos experiencia con otras mineras. Siempre aluden a que no ocasionarán daños, o que tienen planes de contingencia por si pasa algo, pero en nuestra experiencia no ha sucedido ello. Ya han contaminado nuestro río, los cultivos se han visto afectados, con ello nuestro consumo y actividades a realizar como la venta de los productos. Es una cadena, los proyectos mineros afectan, no se puede convivir con la minería, la agricultura no puede” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.).

“La agricultura es un medio importante para la economía de Islay, las cifras nomienten, es una de las principales actividades económicas, medio de subsistencia para varias familias. Aparte de eso, representa toda una historia, hay legado, de padres a hijos y a nietos. Cuidar el río, es cuidar nuestra agricultura y viceversa” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales H.A.C.).

No obstante, hay otras actividades efectuadas por los pobladores del Valle del Tambo; entre estas la ganadería, pesca y comercio. Con respecto a la primera actividad, según CENAGRO (2012), los habitantes de los diferentes distritos que conforman el Valle del Tambo crían y comercializan ganado vacuno, porcinos, cabras, burros, conejos y cuyes, los cuales son vendidos al público en general y también para autoconsumo²². Por otro lado, la pesca artesanal se desarrolla en los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, ya que son estos los que colindan con el Océano Pacífico. Si bien no es una actividad que agrupa gran cantidad de pobladores como lo hace la agricultura, si es una que permite el autoconsumo y que en la actualidad se ha convertido en una que genera grandes porcentajes de ingresos económicos tanto a la provincia como al Valle del Tambo. En dicha actividad económica se extraen pescados como el jurel, caballa, liza, bonito, pejerrey, mariscos y algunos camarones. Mientras que, en el comercio, la actividad está ligada a comercializar los productos “que son vendidos a la ciudad de Arequipa, otras regiones del país” (Callata y Yupanqui, 2017, p. 43)

En informes recientes, por parte de la RED MUQUI,²³ apoyados en datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se especifican actividades de comercio al por menor, tales como la construcción, transporte, almacenamiento,

alojamiento y servicios de comida. Así como actividades ligadas a la industria manufacturera, minera y actividades como servicios públicos y privados.

Para el 2017, las actividades económicas que generaron más empleo directo en la provincia de Islay fueron la actividad agrícola, ganadera y pesca; específicamente generando 6.378 empleos directos, un 26% de la PEA ocupada. Cabe mencionar que dicha población enfocada en el Valle del Tambo es distinta.

En torno a esto, se considera que la zona del valle del Tambo abarca territorialmente partes de los distritos de Islay. Así pues, se evidencia que, de la población general, solo el 22.829 de los habitantes trabaja en actividades en el Valle del Tambo. Y dentro de esto, de la población económica activa ocupada (11.072), 5.140 personas trabajan en la actividad agropecuaria²⁴ (Tabla 2).

Tabla 2: PEA ocupada por actividad económica 2017

	Provincia Islay	Mollendo	Islay	Cocachacra	Dean Valdivia	Mejía	Punta Bombón	Valle de Tambo
Población	52,034	24,073	5,132	8,347	6,854	1,172	6,456	22,829
PEA	26,135	11,837	2,534	4,148	3,569	686	3,361	11,764
PEA desocupada	1,634	736	206	244	234	31	183	692
PEA ocupada	24,501	11,101	2,328	3,904	3,335	655	3,178	11,072
Agrop. y pesca	6,378	839	399	1,503	1,849	203	1,585	5,140
Comercio y Rep. Vehic.	4,359	2,393	441	632	399	51	443	1,525
-Rep. Vehic	387	207	45	57	36	3	39	135
-Com x mayor	282	154	35	21	37	1	34	93
-Com x menor	3,690	2,032	361	554	326	47	370	1,297
Construcción	2,171	1,091	221	290	230	125	214	859
Transp y Almacenamiento	2,506	1,527	392	284	108	23	172	587
Alojamiento y Serv. de Comida	1,695	945	188	260	125	43	134	562
Industria Manuf.	1,440	781	152	208	141	25	133	507
Minería	190	100	29	36	10	2	13	61
Otras	5,762	3,425	506	691	473	183	484	1,831

Fuente: RED MUQUI 2020

De igual manera, los informes elaborados por la organización RED MUQUI enfatizan que hay riesgo en la actividad agrícola, ganadera, pesquera y otros en el Valle del Tambo que se encuentran en riesgo por la actividad minera. Como bien señalamos en párrafos sobre la historia de la agricultura del Valle del Tambo, este se ha visto caracterizado por migrantes temporales²⁵ que se enfocan en actividades económicas en el valle.

Las cifras señalan que 7.555 empleados - 4.237 pobladores del valle del Tambo y 3.318 migrantes- se verían afectados por las actividades mineras. Sumado a ello 8.458 empleados dedicados al sector agropecuario. Asimismo, cabe mencionar que existen otras actividades económicas en el valle que también se verían afectadas (Tabla 3).

Complementado ello, en palabras de algunos entrevistados, entre ellos dirigentes sociales y agricultores, se enfatiza:

“Si bien la agricultura es la principal actividad económica, no nos olvidamos de que hay otras que son el sustento de varias familias, por eso aquellos trabajadores también se suman para estar en contra de los proyectos mineros. La sociedad de pescadores artesanales es consciente del daño de las actividades mineras” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.)

“Como repito todo es una cadena, la afectación del río, afecta la agricultura y otras actividades; somos varias familias que nos veríamos perjudicadas, se hadebido buscar soluciones y creo que debemos porque esto aún no ha acabado” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales G.M.)

“Mi tío es pescador artesanal, yo soy agricultor, pero ambos nos veríamos perjudicados; por eso la defensa del todo el valle, no es solo para algunos, es para todos, defendemos algo macro, si bien el lema es agro sí, minería no, esto es referencial, luchamos por algo que beneficia a Islay, hasta Arequipa, porque el valle es un patrimonio nuestro” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales M.I.)

²² “El autoconsumo se refiere a la circunstancia en la que una persona utiliza los bienes o servicios que ella misma desarrolla para satisfacer sus propias necesidades. Esto, en lugar de vender dichos productos en el mercado”. Recuperado de: <https://economipedia.com/definiciones/autoconsumo.html>

²³ Red de instituciones peruanas ubicadas alrededor de 11 regiones que asesora a comunidades y poblaciones donde se realizan actividades extractivas.

²⁴ Actividad orientada al cultivo de plantas y cuidado de animales

Tabla 3: Empleo en riesgo por actividad minera

	Empleo del Valle	Migrantes Temporales	Total
Agrícola	4,237	3,318	7,555
Pesca Artesanal	700		700
Pecuario	203		203
Agropecuario y Pesca	5,140	3,318	8,458
Actividades que prestan servicios	1,316		1,316
Subtotal	6,456	3,318	9,774
Actividades vinculadas al consumo en el valle	3,305		3,305
Total	9,761	3,318	13,079
PEA Ocupada en valle	11,072		

Fuente: RED MUQUI 2020

Continuando con la actividad agrícola, centrándonos en la producción, se evidencia que para el 2019 la producción de varios productos agrícolas como la papa, arroz, maíz, alfalfa y caña aumentaron respecto a la producción del 2010. (Tabla 4) De esto se puede establecer cierta relación de dependencia con el valle y sobre todo el vínculo de la producción con los ingresos que se generan a los pobladores. Como bien señala:

“El valle es fructífero, no son pocos, los ingresos que se generan por la producción agrícola se deben evaluar, lo que debe hacer el Estado, en vez de apoyar proyectos mineros debe enfocarse en apoyar a la agricultura, pesca artesanal, brindarnos las herramientas. Con ayuda podremos exportar en cantidades” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales G.M.)

²⁵ Habitantes que se retiran del Valle del Tambo cuando la temporada alta de agricultura termina.

Tabla 4: Valor bruto de la producción agrícola 2010 y 2019

Principales distritos productores 2010	Principales Cultivos	Producción 2010 (TM)	Producción 2019 (TM)	Var. %	Valor Bruto Producción 2010 (estructura %)	Valor Bruto Producción 2019 (estructura %)
COC/DV/PB	Papa	62,716	79,586	26.9	10.96	34.32
COC/DV/PB	Arroz	53,952	65,366	21.1	20.65	25.00
DV/PB/COC	Ajo	23,275	21,153	- 9.1	37.49	16.70
DV/PB/MO/ME	Maíz Chala	51,567	84,932	64.7	2.02	3.84
s.i.	Aji	s.i.	1,369	s.i.	s.i.	3.71
PB/DV/ME/MO	Alfalfa	73,315	92,332	25.9	2.83	3.21
COC	Caña de azúcar	52,947	64,634	22.1	5.65	2.70
DV/MO/ME/PB/COC	Cebolla	28,330	10,053	- 65.5	3.86	2.66
PB/DV	Páprika	956	148	- 84.5	1.93	0.41
COC/PB	Alcachofa	5,987	S.I.	s.i.	3.28	s.i.
	Sub total	353,045	419,573	18.8	62.25 % 207.85 Mill soles	92.65 % 266.12 Mill soles
	Total	378,990	437,556	15.4	100.00 % 234.40 Mil soles	100.00 % 287.55 Mill soles

Fuente: RED MUQUI 2020

Asimismo, la RED MUQUI señala que respecto a la producción agrícola en el 2019 se produjo:

“437,556 toneladas entre alimentos (papa, ajo, cebolla y otros) para las personas, materia prima para la agroindustria (caña de azúcar y arroz, cáscara, alcachofa y pprika) y alimentos (alfalfa y maz, chala) para la produccin pecuaria... Se asume, al igual que en el 2008, un 83% de la produccin agrcola se comercializ a nivel regional y nacional y el 17% fue para el consumo local....De la misma manera, al asumirse que la distribucin del mercado es la misma que la del 2008, un 39% de la produccin agrcola del valle de Tambo, principalmente de papa, arroz, ajo y cebolla, va con destino a Lima, 170,647 toneladas, un 38% a Arequipa, 166,271 toneladas, 12% a Moquegua y Tacna 8% a Puno y Cusco y 3% para el consumo local en los distritos de la provincia de Islay. Un 70% de la produccin pecuaria va a Arequipa, 11% a Puno, 12% a Cusco, 2% a Moquegua y Tacna y 5% al mercado local” (RED MUQUI, 2020, p.15)

En ese sentido, aquello evidencia un panorama alentador en trminos econmicos, como bien sealaba un agricultor lneas arribas, la actividad agrcola se convierte en las principales actividades econmicas que brinda beneficios a la

población del Valle del Tambo, Islay y sus distritos, pero también a Arequipa y otras regiones (Tabla 5).

Tabla 5: Principales productos agrícolas en la producción provincial y nacional 2019(en toneladas)

PRODUCTO	ISLAY	AREQUIPA	NACIONAL	Islay/ Arequipa (%)	Islay/ Nacional (%)	Arequipa/ Nacional (%)
Caña de Azúcar	64,633	64,633	10'929,341	100.00	0.59	0.59
Aji	1,369	2,622	43,155	52.21	3.17	6.08
Ajo	21,153	56,606	83,297	37.37	25.40	67.96
Papa	79,585	337,670	5'331,063	23.57	1.49	6.33
Arroz	65,366	278,894	3'188,306	23.44	2.05	8.75
Maíz Chala	84,932	861,502	1'819,833	9.86	4.67	47.34
Alfalfa	92,332	2'529,989	6'780,464	3.65	1.36	37.31
Cebolla	10,053	373,406	631,580	2.69	1.59	59.12
Páprika	149	7,335	23,312	2.03	0.64	31.46

Fuente: RED MUQUI 2020

Por otro lado, otro aspecto social de las condiciones de vida de dichos habitantes se encuentra ligado al nivel de pobreza; según el Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital del 2018, dicho indicador revela:

“que de 1,874 distritos que tiene el Perú, la provincia de Islay tiene a sus distritos entre los menos pobres, al ubicarse Mejía en el puesto 1823, Mollendo en el 1788, Punta de Bombón en el 1676, Islay en 1675, Cocachacra en el 1674 y Deán Valdivia en el 1513” (RED MUQUI, 2020, p.22).

Estos porcentajes se pueden relacionar con lo expuesto líneas arriba en torno a las actividades económicas. Los alcances dan cuenta de la importancia en materia económica del valle, las cifras revelan que los ingresos por la producción agrícola son relevantes tanto económicamente como socialmente.

“¿las cifras mencionan que estamos entre los distintos menos pobres?, quizá eso sea evidencia de que nuestra economía va bien, que no necesariamente se tienen que ejecutar proyectos grandes enfocados a la extracción de minerales que solo dañan el ambiente. Se debe apoyar más bien lo que sí está funcionando ahora y es algo que la población quiere. No sería tan difícil” (Entrevista realizada a dirigente social del Valle del Tambo de iniciales a R.H.)

4.4. Instituciones sociales y económicas en el Valle del Tambo

En el valle del Tambo, las instituciones formales, sociales y económicas que priman son la familia y las Juntas de Usuarios de Riego. Como se mencionó anteriormente, la agricultura es una actividad primordial en la economía de las familias campesinas, todo gira en torno a ella desde tiempos remotos. En ese sentido, al ser dicha actividad la principal fuente de ingresos económicos, los pobladores del valle han estipulado y mantenido con el pasar de los años conductas estandarizadas basadas en el trabajo colectivo familiar. En otras palabras, el principal activo económico familiar es la mano de obra.

“El trabajo colectivo es mejor en familia, hay una rentabilidad buena, soy arrendataria y yo hago que mi familia trabaje, porque es algo que nos pertenece, incluso apoyamos con mano de obra en otras chacras” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo con iniciales J.G.Z.)

“Todo es mejor en la cancha, ahí nosotros los padres transmitimos los conocimientos a nuestros hijos, el cómo sembrar, cosechar, cuál semilla es la mejor, etc.” (Entrevista realizada a agricultor del Valle del Tambo de iniciales H.C.).

“El apoyo familiar disminuye costos para generar producción agrícola y eso beneficia a las mismas familias” (Entrevista realizada a dirigente social del Valle del Tambo de iniciales R.H.).

“Mi papá me enseñó a trabajar la tierra, ahora yo he enseñado a mis hijos, y seguro que ellos a los suyos” (Entrevista realizada a dirigente social del Valle del Tambo de iniciales J.R.)

Por otro lado, las Juntas de Usuarios de Riego son las organizaciones conformadas por usuarios de agua organizados en comisiones que tienen una base sobre un sector hidráulico. Así pues, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo representa a nivel local una institución encargada de velar por el recurso hídrico del Río de Tambo y así asegurar que las condiciones para la producción agrícola sean óptimas en las temporadas altas y bajas.

Existen tres JUR en el valle: Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo-Cocachacra, Junta Usuarios de Riego de Punta de Bombón y Junta de

Usuarios de la Ensenada-Mejía-Mollendo Las tres JUR agrupan un total de 20 comisiones de regantes. Sin embargo, la Junta de Usuarios de Riego del Valle de Tambo-Cocachacra es la que más usuarios agrupa. Esta es la JUR que tendrá mayor activismo en la movilización de resistencia.

Tabla 6: Juntas de Usuario de Riego y Comisiones de Regantes en el valle del Tambo

Junta de Usuarios de Riego	Nº	Comisiones de Regantes	Área Total	Área Bajo Riego	Nº Predios	Nº Usuarios
Tambo	1	Quejga Carrizal Checa	393.2	317.8	126	84
	2	Buena Vista El Toro	177.6	165.7	63	54
	3	Acequia Alta La Pascana	184.1	171.9	64	39
	4	Santa Rosa Ventilata Ayanquera	1,015.9	982.1	232	181
	5	Hacendados	460.9	446.1	231	166
	6	Chacareros San José	470.3	463.6	353	282
	7	Ensenada	705.1	667.6	201	144
	8	Bustios	309.2	291.29	181	139
	9	Manantial La Palma	180.6	171.8	95	67
	10	Montegrande	107.3	95.48	55	37
	11	La Curva Buena Esperanza	262.9	246.9	153	100
	12	Boquerón	407.4	372.7	133	105
	13	Iberia	698.2	669.1	131	125
	13	Sub Total	5372.7	5062.07	2018	1523
Punta de Bombón	1	San Juan de Catas	1,140.00	1,107.80	816	532
	2	Santa Ana de Quitín	628.3	602.9	445	313
	3	Pampas nuevas	626.9	590.1	184	153
	4	Machones	57.4	49.2	38	35
	4	Sub Total	2,452.60	2,350.00	1483	1033
Ensenada-Mejía-Mollendo	1	Ensenada	1,039.50	950.3	481	402
	2	Mejía	721.1	617.5	121	90
	3	Mollendo	985.9	855.9	134	94
	3	Sub Total	2,746.50	2423.7	736	586
	20	TOTAL	10,571.80	9,835.77	4237	3142

Fuente: Martínez (2017)

Un aspecto clave a mencionar es que las CR, y, por tanto, las JUR del valle de Tambo, están conformadas única y exclusivamente por los agricultores propietarios, sin importar el tamaño de su propiedad de terreno. Es decir, es un requisito indispensable ser propietario para poder figurar en el padrón de cualquier JUR del valle.

En la actualidad, los agricultores siguen organizando bajo las Juntas de Usuarios de Riego y las Comisiones de Regantes; las JUR, se han mantenido muy firmes en lo que respecta a su consolidación; frente al conflicto Tía María, hay esbozado una posición muy centrada en la defensa del Valle y de la agricultura como medio de subsistencia. En ese sentido, podemos decir que entre ambas instituciones hay cierta complementariedad; asimismo, que ambas son fundamentales para la economía del Valle del Tambo, ya que, por una parte, los “miembros que la conforman son actores activos (y no receptores económicos) de los principales recursos que mantienen: tierra y mano de obra” (Martínez, 2017, p.5)

Capítulo 5: Conflicto Tía María: Análisis de la participación social

5.1 Cronología de la participación social

El inicio del conflicto socioambiental Tía María data hacia el mes de agosto del 2009, pero según investigaciones e informes existen antecedentes de impacto por parte de la empresa Southern en el Valle de Tambo que generaron una movilización menor en los pobladores de dicho lugar. En la década de los sesenta, la empresa, al realizar mejoras en la fundación Ilo con trabajos metalúrgicos, lanzaron toneladas de dióxido de azufre que contaminaron el valle de Ilo y Tambo.

Según una nota periodística de La República hecha en el 2019 por Juan Carlos Soto, para el año 1986 INGEMMET²⁶ manifestó que tanto en los distritos de Mejía, Mollendo, Pampas Nuevas y La Punta existían niveles de dióxido de azufre por encima de los niveles recomendables. Esto sin duda conllevó a los reclamos por parte de los pobladores; así pues, como respuesta a ello se creó una comisión para evaluar los impactos y brindar las indemnizaciones correspondientes. El resultado no fue favorable para los pobladores del Tambo, pues a ellos no se les brindó compensaciones. Pese a las pruebas mostradas que evidenciaban cómo el complejo metalúrgico llegaba a impactar en los cultivos del Tambo, la respuesta por parte de la empresa y el gobierno siempre fue negativa (Soto, 2019). Ante ello, se evidenció que la participación social se enfocó en la búsqueda de reparaciones de los impactos ocasionados por la empresa. Asimismo, desde dicha fecha, la población se mostraba en defensa a tierras y territorios.

Para el año 2009, las diligencias respecto a la ejecución del proyecto minero Tía María provinieron en una primera instancia de los gobiernos locales; ejemplo de ello, la acción de la Municipalidad de Cocachacra de realizar una consulta vecinal con relación a la opinión de los pobladores sobre la aceptación o no del proyecto minero. Dicha consulta fue supervisada por la Asociación civil Transparencia, y los resultados fueron: 348 pobladores a favor del proyecto y 11593 en contra (Defensoría del Pueblo, 2009). En palabras de Juan Guillén López, el alcalde en dicho año, la postura por parte de los pobladores era de negación a tal proyecto

²⁶ Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú

y ello se reflejaba en la actuación conjunta de los mismos para poder concertar acciones de organización.

En declaraciones de los agricultores del Valle del Tambo, para dicho año, la población desde ya se encontraba preparada, y era no sólo por los antecedentes conocidos de la empresa, sino también por el temor latente sobre los impactos en sueconomía, y sobre todo en la agricultura. Desde la perspectiva del agricultor C.A.H., un aspecto relevante en la base de la participación social es la presencia desde un inicio de la RED MUQUI, la cual influyó en la acción colectiva de los pobladores, pues en toda la dinámica los dotó de recursos intelectuales en base a información sobre el proyecto y sus impactos.

La participación social en el dicho año se establece de la siguiente manera; hay involucramiento de actores tales como el Frente Amplio de Desarrollo y Defensa de los Intereses de la Provincia Islay, la Coordinadora Provincial Contra la Agresión Minera, la Asociación de Pescadores Artesanales y Defensores de la fauna del Río del Tambo, las municipalidades de Deán Valdivia y Punta Bombón. De igual forma, el Gobierno Regional de Arequipa se ve inmerso en el conflicto como actor secundario. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los dirigentes sociales de iniciales M.I. y R.H., la incorporación de los actores anteriormente mencionados conllevó a tener mayor visibilidad con otros sectores de la población del Valle del Tambo. Asimismo, en los relatos de agricultores G.M., J.G. y R.H. sus acciones se basaron en lazos de confianza del uno con el otro, compartir el mismo temor, y apoyo de actores como los gobiernos locales, regionales y RED MUQUI.

En lo que respecta al año 2010, según Juan Aste, la empresa buscó por medio de reuniones lograr un diálogo con los agricultores y pobladores del valle; sin embargo, esto se veía entorpecido por acciones poco veraces. Para los agricultores con iniciales J.C., M.I. y J.G.Z. dichas reuniones eran “más de lo mismo” que no se centraban en explicaciones técnicas respecto al uso del agua, a la compensación por los daños, entre otras cosas. No obstante, desde otra perspectiva, declaraciones por parte de la empresa aluden a la existencia de conversaciones con los agricultores del valle que se enfocaban en la resolución de dichas interrogantes.

La gestión en torno a acciones para consolidar la negativa ante el proyecto minero se tradujo en la búsqueda de recursos de movilización a cargo de dirigentes sociales, los cuales fueron elegidos por los mismos pobladores. Esta búsqueda se fortaleció con la suscripción de un acuerdo entre las autoridades locales y regionales. Como enfatiza el periodista con iniciales D.N., los frentes de defensa cuentan con una base sólida de organización que, sumado al apoyo de autoridades locales y de los medios de comunicación a nivel local, fortalecieron sus acciones en toda la dinámica del conflicto. Respecto a la intervención de los medios de comunicación, se evidencia que las noticias transmitidas localmente apoyaban la consigna de defensa del valle ante la irrupción del proyecto minero. Así pues, desde sus posibilidades brindaron información, datos que les permitió al movimiento poder articular, coordinar y sobre todo estar atentos a otras acciones de otros sectores.

No obstante, en medio de esta participación, un punto de quiebre es la denuncia que realizó la empresa a veinte manifestantes - entre ellos agricultores y dirigentes sociales- por daños a sus propiedades en los diferentes enfrentamientos. Esto para los pobladores - en palabras de uno de ellos- significó una clara muestra de “hipocresía”, pues la empresa, por una parte, alegaba buena voluntad para emprender acuerdo y diálogos con la población, mientras que, por otra parte, acusaba o buscaba pruebas para desafiar el movimiento social o lograr que se debilitara. Para el dirigente social de iniciales R.H. las denuncias a los manifestantes, entre ellos dirigentes, los unía como grupo social; la indignación los llevaba a concretar acciones y a la continua manifestación.

Para abril del 2010, ante los resultados lamentables de pérdidas humanas en los enfrentamientos entre manifestantes y policías, los dirigentes sociales y autoridades locales se reunieron con el Ministerio de Energía y Minas; el resultado de ello fue la expedición de la Resolución Directoral N.º 105-2011- MEM-AAM que estableció y declaró inadmisibles el estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María y por ende la paralización de la ejecución del mismo. Con el acuerdo de por medio y como garantía la resolución ya mencionada, los dirigentes decidieron levantar las medidas de fuerza que aún persistían en la zona.

Sin embargo, un año después, en febrero del 2013, hubo un levantamiento por parte de la población, pues se movilizaron en apoyo a nueve pobladores

del Valle del Tambo, que fueron denunciados por la empresa SPCC por delitos de robo agravado, amotinamiento y daños a la propiedad ocurridos en el 2010 en las movilizaciones realizadas. (Defensoría del Pueblo, 2013). Aquello refleja lo mencionado párrafos anteriores sobre la participación social; resulta evidente que los pobladores del Valle del Tambo, pese a tener como garantía la resolución sobre paralización del proyecto, aún mantenían fuerzas de defensa no solo al valle, sino también a aquellos que los defendían.

Por otra parte, según la empresa, era de vital importancia lograr que los pobladores aceptasen la ejecución del proyecto minero. En palabras de sus representantes, se contrató servicios del Centro de Servicios Empresariales (CESEM) de la Cámara Del Comercio; la estrategia se basó en la difusión de vídeos sobre lo que sería el proceso minero. Ante ello, los pobladores señalan que existieron alianzas estratégicas por parte de la empresa con la Sociedad Agrícola de Arequipa; para ellos, la empresa buscaba por medio de los foros realizados lograr apoyo a favor del proyecto (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de iniciales M.I.).

Meses después, para octubre del 2013, la empresa SPCC ejecutó talleres informativos buscando un relanzamiento del proyecto. Los pobladores tomaron ello como una acción imprudente; así pues, muchos de ellos asistieron a dichos talleres informativos y tuvieron enfrentamientos con la policía. Un punto resaltante que avivó la movilización radicó en que dichos lugares se encontraban representantes del MINEM. Aquello significó para los pobladores una burla por parte del Estado central, pues ya se había llegado a un acuerdo en el 2011 (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales C.A.H.). Para el mes de noviembre, la empresa, con la consigna de continuar con el proyecto, presentó y solicitó al MINEM la aprobación de un nuevo estudio de impacto ambiental. Las municipalidades ante ello se hicieron presente y bajo oficios comunicaron su indignación a las acciones procedidas por la empresa, alegaban que la empresa SPCC estaba impulsando el proyecto sin respetar el procedimiento establecido ni los acuerdos ya tomados, y que todo parecía ser un acto de provocación (Defensoría del Pueblo, 2013) confabulado con el Estado.

Todo el año del 2014, el diálogo entre la población y el gobierno central fue estéril, no se llegaron a acuerdos concretos, pero las posiciones por los pobladores locales siguieron intactas: el rechazo al proyecto Tía María. De igual manera, las manifestaciones continuaron y las reuniones de articulación se enfocaron en el seguimiento de los casos de denuncias a manifestantes e información sobre el proceso de aceptación del estudio de impacto ambiental del proyecto Tía María. Para los agricultores A.G., H.C. y el dirigente social J.R. el amedrentamiento por parte de las autoridades a la acción colectiva no los detuvo en la defensa del valle. En sus declaraciones, señalan la importancia del bloque y la confianza de unos con otros.

Para agosto, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, con Resolución Directoral N.º 392-2014-MEM-DGAAM, aprobó el EIA del proyecto minero Tía María. Ante dicha situación, los pobladores, dirigentes, la junta de usuarios del valle del tambo, se movilizaron en rechazo de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Los paros continuaron, bloqueos, marchas y movilizaciones en todo Islay, y con ello también los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Un aspecto resaltante en medio de esta participación social fue la elección de ciertos agricultores, algunos de ellos dirigentes sociales, como alcaldes de sus distritos.

Aquello significó una “pequeña victoria” pues aquellos agricultores habían estado presentes en las manifestaciones en todo el proceso del conflicto; para los pobladores, la confianza en ellos se basaba en la elevación de su consigna en el gobierno local para así contar con medios y recursos. Esto no conllevó a que la medida de protesta se debilitara, por lo contrario, se evidencia consolidación en la misma; para los agricultores entrevistados, esto los acercaba mucho en el rango de otras autoridades, sobre todo para que estas últimas les hagan caso y puedan definitivamente decir sobre el rumbo del proyecto minero.

En el mes de marzo, según el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo (2015), las acciones de los agricultores y pobladores del Valle del Tambo estuvieron ligadas a movilizaciones, bloqueos, marchas, huelgas de hambre y enfrentamientos. Por parte de la empresa, el 27 de marzo, el Director de Relaciones Institucionales declaró que se cancelaba el proyecto minero por la arremetida

del “terrorismo antiminero” y por la falta de capacidad del Estado para promover inversiones y brindar garantías necesarias para la ejecución viable del proyecto. El mismo día, hubo declaraciones del gobierno por parte de la ministra de energía y minas que señalaba la no suspensión, brindado apoyo al proyecto minero.

En el mes de abril, toda la oleada de crisis y violencia continuó, dejando cuatro fallecidos. Ante ello, las acciones emprendidas por el gobierno central se enfocaron en la aprobación del ingreso de las Fuerzas Armadas. Como respuesta, los gremios de Arequipa anunciaron un paro regional por Tía María. En palabras de los dirigentes, aquello era inaudito y violencia hacia el desarrollo de sus derechos como ciudadanos. Para algunos especialistas, el ingreso de las Fuerzas Armadas agravó la situación, pues desde el gobierno existió un discurso de legitimación de la violencia, lo cual también generó una respuesta por parte de los pobladores, los cuales estaban dispuestos a entregar sus vidas por la defensa del valle.

En el 2016 la empresa SPCC informó a la Defensoría del Pueblo las acciones que habían realizado en torno a la socialización del proyecto Tía María. Señalaron la implementación de un “plan de reencuentro” en el que participaron seis mil quinientas familias. Asimismo, que contrataron mano de obra local para la instalación del campamento minero, la información sobre el proyecto, sus beneficios mediante charlas, la implementación de capacitación en informática, textiles para la población, así como atención en servicios de salud gratuitos, asistencia a ganaderos, obras de saneamiento, pintado y reparación de viviendas, entre otras acciones. Bajo ese contexto, un medio mexicano publicó en su portal web que la población de Islay había llegado a un acuerdo con la empresa al ver estas acciones. (Defensoría del Pueblo, 2016)

Como señala un agricultor de la zona, dicho plan fue todo un artilugio, puesto que en las reuniones planificadas los asistentes eran personas provenientes de la ciudad de Arequipa u otros lugares aledaños, menos pobladores del Valle del Tambo. Esto se complementa con lo manifestado por el agricultor J.C.M. que indica que los pobladores, ciudadanos asistentes a dichas reuniones, eran vistos llegando en buses particulares.

“Yo he participado en el taller informativo, pero si vi que un grupo de personas venía en buses de Transporte del Carpio, creo que eran pobladores de Arequipa que ya estaban registrados. Eso no fue legal” (Entrevista al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.C.M.).

Otras declaraciones apuntaron a manifestar que solo asistieron “algunos” pobladores del valle, con la intención de contra argumentar cualquier comentario brindado por la empresa. Aquello pues, tenían la sospecha de que exista una cortina de humo en la que los miembros de la empresa puedan usar a su favor. Así pues, argumentan que, en las reuniones, si bien no se tomaron acuerdos, las exposiciones realizadas no decían algo nuevo respecto al proyecto Tía María. Como indica J.G. el problema se enfocó en que la empresa no escuchaba o no quería escuchar lo que realmente los pobladores estaban demandando.

Por la parte de la empresa, declaraciones en medios de comunicación, apuntaron a desmentir las acusaciones y rumores sobre los talleres y audiencias. Si bien la comunicación no ha sido amplia, el representante Julio Morriberón señaló que las dudas en dichos talleres fueron absueltas, y que si existió un diálogo con la población. No obstante, se evidencia en las reacciones de los pobladores del Valle del Tambo la desacreditación social, pues retomaron las movilizaciones argumentando que no habían aceptado nada respecto a la realización del proyecto minero.

En medio de estas acusaciones, para el mes de febrero, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo denunció públicamente que los alcaldes distritales tenían intereses personales. Sin embargo, según los entrevistados se revela una falta de información verídica respecto a dicho tema en relación con las noticias que los medios de comunicación central transmitían.

“Sí, comenzamos a desconfiar, aunque los demás denunciados ahora están en procesos, no creo que ellos estén involucrados. La fuerza del valle es de todos, los dirigentes eran como la cabeza del frente general y las acusaciones respecto a los sobornos si afectó la confianza, pero no nuestra consigna” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo con iniciales A.G.)

Aparte de la acusación a Pepe por sobornos por parte de la empresa; también hubo denuncias por parte de la fiscalía que apuntaban a una priorización de intereses personales. Ante estas declaraciones, el grupo de dirigentes manifestó su posición.

“Si bien somos los que estamos al frente de la protesta, nosotros sí nos identificamos con la consigna, pero también debemos ser conscientes que habrá prejuicios que busquen desestabilizar el movimiento y nuestra confianza” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo con iniciales J.R.)

En agosto del 2019, en la Convención Mundial de Exploración Minera, se anunció la fase de construcción del proyecto Tía María. Por otro lado, durante el 6 de febrero se da una marcha de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Mollendo, rechazando el proyecto. Sumado a ello, los gobernadores dieron un comunicado recomendando la no ejecución de proyectos sin licencia social como es el caso de Tía María. Se hizo un llamado a discutir nuevas leyes mineras. Durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se mantuvieron las actividades en la zona de Arequipa en muestra del rechazo por parte de los pobladores de los distritos de Camaná, El Pedregal, La Joya, Valle de Tambo, Mollendo y Mataraní. Entre estas actividades se desarrollaron diferentes paros que incluyeron el cese de clases escolares, cierre de carreteras y movilizaciones de diferentes tipos.

Continuando con ello, para el año del 2020, el presidente de Southern Peru Copper Corporation expresó que no demandará al Estado peruano por el retraso del proyecto. Así mismo, las acciones emprendidas por parte de los dirigentes sociales y agricultores del valle continuaron siendo hechos de defensa, de irrupción en carreteras, entre otros. De igual manera, para el año 2021 y hasta la actualidad la participación social de los pobladores del Valle del Tambo fue de organización, movilización, concertación con autoridad y búsqueda de recursos dentro de sus miembros. Pero a la vez también se evidencian hechos que ponen en relieve o jaque las acciones de estos, tales como las denuncias por parte de fiscalía, las sentencias, las denuncias a los dirigentes, las declaraciones de autoridades de la empresa donde se les desacredita, entre otros.

5.2 Actores sociales involucrados

En la dinámica del conflicto se evidencia que tres actores primarios son los que intervienen: Estado peruano, empresa y pobladores del Valle del Tambo. Respecto al último bloque de personas, cabe señalar que se hace referencia al grupo humano que vive en el Valle del Tambo, pero en su totalidad de personas que habitan en los distritos en los que se encuentra el valle. Asimismo, resulta pertinente señalar que no todos en su totalidad rechazan el proyecto minero. Se señala aquello pues, los pobladores que no se encuentran en rechazo al proyecto, tampoco es que se encuentren a favor, sino que algunos de estos pobladores no están de acuerdo con las formas en las que se realiza las movilizaciones, paros, entre otros. Pero también existen miembros de este grupo humano que sí están conformes con la ejecución de dicho proyecto, gracias a las oportunidades de empleo que garantizan y al desarrollo económico para el valle.

Con base en la revisión bibliográfica, hemos agrupado dentro de este grupo humano a los agricultores y dirigentes. Hemos hecho esta distinción por características propias de ellos, claro está que la mayoría de los dirigentes sociales ocabezas de los frentes de defensa son agricultores. Asimismo, en relación con los agricultores, como se mencionó en capítulos anteriores, hay una tipología de los mismos que también permite comprender las posturas de los mismos. Esto se complementa con lo estipulado por Valcárcel (2015), que enfatiza actores como los jornaleros, ganaderos, pescadores y campesinos

Como subgrupo del grupo global de pobladores del Valle del Tambo, están los agricultores; según lo recopilado se evidencia que este grupo está representado por diversas organizaciones, en las que resalta el Frente de Defensa del Valle de Tambo, las Juntas de Usuarios de Riego, la Asociación de Productores de Papa, Comisión de regantes entre otros. Todos ellos de la mano de sus dirigentes sociales, los cuales, debido a su involucramiento, liderazgo se han posicionado como los voceros y representantes ante los demás actores sociales. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, si bien hay agricultores que se encuentran a favor del proyecto minero, estos no son considerados por la mayoría ni por las asociaciones como pobladores del valle del tambo. Esto debido a que son empresarios de otras provincias que vinieron con capital y lograron posicionarse, pero que no son nacidos en el valle y por ende se considera que no tienen el vínculo identitario. Dentro

de este grupo, encontramos a los jornaleros, los cuales se dedican a trabajar en las chacras a base de su mano de obra, algunos venden su fuerza de trabajo; asimismo, la gran mayoría solo llegan al valle por la temporada alta de trabajo y son en su mayoría migrante de la zona (Síntesis de las entrevistas realizadas al periodista con iniciales D.N. y al agricultor del Valle del Tambo con iniciales H.C.).

Por otra parte, respecto a las autoridades locales, como señala Martínez (2017), “aquellos agricultores que se harán con los cargos directivos, sea de alcalde o presidente de la Junta de Usuarios, son únicamente los agricultores propietarios. Por esa razón se había dicho antes que los agricultores propietarios son los que manejan políticamente al valle” (p.92). Así pues, se encuentran los casos de Augusto Paredes, ex regidor del municipio de Cocachacra; en declaraciones del mismo, señala que ha sido agricultor, pero por los problemas que se han suscitado respecto al proyecto Tía María, es que ha sido convocado por sus colegas y hermanos del campo para defender así la agricultura del valle. Enfatiza que, si bien es un pequeño agricultor, él ha trabajado en la empresa Chucarapi, tienen sus padres que han sido trabajadores en la siembra de topes. En ese sentido, se evidencia una convergencia de factores que aportan no solo al lazo identitario sino también a la responsabilidad de incidencia.

Otro caso es el de Helard Valencia, que en sus declaraciones enfatiza que la población lo persuadió para poder ocupar el cargo de alcalde y por ende lo respaldaron con su apoyo político y financiamiento para su campaña.

“Es un conocido agricultor por las extensas áreas de cultivo que posee gracias a la herencia de su padre. Se asentó en el sillón municipal empujado por la red de agricultores locales. Llegó al municipio de Cocachacra en octubre de 2014 sin tener experiencia política previa en cargos públicos. Antes de asumir la alcaldía se dedicaba a los negocios agrícolas, y gracias a su labor construyó relaciones con otros tipos de profesionales” (Martínez, 2017, pp.93).

En relación con la organización de los agricultores, estos tuvieron que organizarse para dos actividades simultáneas: laborar un tiempo mínimo para que los cultivos no se echen a perder, y hacer frente al ingreso de la minería. Así pues, establecieron horarios laborales y para la protesta, según previo acuerdo entre todos los agricultores, interviniendo la Junta de Usuarios para aquello. Por ejemplo,

en muchos casos la jornada laboral duraba hasta las once de la mañana, para luego poder reunirse y participar en la movilización. Otros agricultores manejaban otros horarios, sobre todo los arrendatarios para quienes la jornada laboral no era la misma (Síntesis de las entrevistas realizadas a los agricultores del Valle del Tambo con iniciales H.C, C.A.H. G.M. y A.G).

Este grupo humano desde un inicio no quiso aceptar este proyecto, más aún cuando fallecieron personas; vale decir que la población no cree en la validez de estos talleres, porque sabe que van a contaminar el valle y sienten que el Gobierno quiere imponer y someter a la población. En general, se puede apreciar que existe una enorme desconfianza hacia la empresa Southern, por las irregularidades cometidas en contra de la población, así como también hacia el Gobierno por acaparar y no verificar las irregularidades que venía cometiendo Southern, muy por el contrario, apoyaba las decisiones de dicha empresa; frente a ello, la población insiste en que la empresa se retire y que el proyecto Tía María se cancele definitivamente.

Por otra parte, un segundo grupo son los dirigentes sociales, quienes son aquellos representantes de las asociaciones sociales y económicas que defienden el Valle del Tambo. Son caracterizados por sus capacidades de liderazgo durante todo el conflicto de Tía María. Son ellos que como representantes han asistido a las reuniones con el Estado y sus representantes y medios de comunicación locales y nacionales. Asimismo, algunos han sido acusados de recibir coimas por parte de la empresa para lograr la aceptación a la ejecución del proyecto minero. De igual manera, sentenciados por la justicia por los hechos de violencia ocurridos durante el proceso del conflicto socio ambiental que ha dejado heridos y fallecidos.

En el conflicto socio ambiental de Tía María, el Estado ha sido un actor complejo con poca capacidad de negociación y de regulación. Por una parte, al ser quien incentiva las inversiones mineras para beneficio económico del país, ha generado que los diferentes presidentes, ministros en materias en cuestión de estos temas tengan algunas discrepancias. Mientras que, los discursos presidenciales albergaban posiciones de negociación con la población con base en una licencia social, los ministros de minas afirmaban la ejecución del proyecto, entre otros comentarios que invalidaban la opinión de los pobladores. Por otro lado, en cuanto

a su función de regulación, según informes de la Defensoría del Pueblo, el diálogo por periodos o momentos ha sido incipiente.

Cabe mencionar que hay una distinción entre el gobierno central, regional y local, los dos últimos se han encontrado a favor de la consigna en contra de la ejecución del proyecto minero. Entre las autoridades participantes se encuentran los alcaldes y ministros. Respecto a los ministros, los agricultores señalaron neutralidad antes las acciones emprendidas por los que se encontraban en contra del proyecto minero. Mientras que, con relación a las autoridades locales, a excepciones de un par de ellos, los agricultores y dirigentes enfatizan el apoyo, sacrificio y participación constante de la defensa del valle. A ello se suma, la voluntad y, sobre todo, la responsabilidad social con la población para mantener una convivencia sana.

De lo recopilado también se enfatiza el papel por parte de la Defensoría del Pueblo, quien como mediador ha actuado, pero no ha enfatizado ni ha logrado que las acciones de enfrentamientos puedan cesar. Su accionar ha generado reuniones y ha sido el nexo entre las autoridades locales con las nacionales.

Por último, en lo que se refiere al papel de la empresa, Martínez (2017) enfatiza que dicha SPCC:

“desde 1954 estableció una sucursal en nuestro país. Actualmente, es uno de los principales productores de cobre. Está constituida por el Grupo México en un 82% y el 18% pertenece a la Comunidad Internacional Inversionista. Sin embargo, cuenta con antecedentes negativos con respecto a responsabilidad ambiental en proyectos mineros que viene ejecutando en Moquegua y Tacna. Su principal interés es ejecutar el proyecto minero Tía María para extraer cobre a cambio de ello dará 90 millones de dólares anuales de regalías” (pp.67).

Según las investigaciones, la empresa ha tenido un accionar apático y no se ha involucrado en un diálogo directo y efectivo con la población, sus autoridades y representantes. Sus declaraciones han estado enfocadas en medios de comunicación y en notas de prensa publicadas en su página web. Asimismo, dichas manifestaciones en varias ocasiones han apuntado a desacreditar el papel de los pobladores del valle del Tambo, los han catalogado como terroristas y opuestos al

desarrollo económico de la zona.

5.3. Narrativas del conflicto socio ambiental

Las narrativas imperantes del conflicto socioambiental Tía María quedan enmarcadas en torno a aspectos tales como: los efectos ambientales del proyecto, las instituciones públicas encargadas de fiscalizar las actividades mineras, los efectos sobre el desarrollo económico de Tía María, y la caracterización ética tanto de Southern como de los opositores al proyecto minero.

Dos posiciones son claras en las narrativas; por un lado, la empresa busca la ejecución del proyecto minero, y ha desplegado herramientas discursivas en torno a los beneficios económicos del proyecto minero Tía María, y sobre los peligros de la incidencia de grupos antimineros, a estos últimos clasificándolos como corruptos y violentos. Esta narrativa por parte de la empresa ha sido tardía frente a la respuesta de los dirigentes sociales y agricultores; en ese sentido, no pudieron compensar el despliegue organizado y consolidado del grupo de pobladores del Valle del Tambo.

De manera específica, en sus discursos al público en general, la empresa se dedicó a señalar que cumplía con lo estipulado en las leyes, y que sus estudios realizados estaban bajo la normativa correspondiente y lineamientos especializados. Asimismo, realizaron talleres informativos para compartir y socializar todo lo referente a los impactos positivos que traería consigo el proyecto minero, y como algunos riesgos que podrían ocurrir, contaban con protocolos de seguridad. En esa línea, cuando el conflicto comienza a enmarcarse en hechos violentos, la empresa ejecutó campañas de reencuentros con la población, en la cual, al igual que los talleres informativos, brindaron propuestas de mejora para la calidad de vida de los pobladores del Valle del Tambo. Como señala Ibarra y Morales (2016):

“La misma incluye visitas casa por casa en las que jóvenes locales explican las virtudes del proyecto, la empresa contrata médicos y veterinarios que brindan servicios gratuitos itinerantes, clases gratuitas de reforzamiento para escolares de la zona, se incrementó los horarios de atención de los servicios de salud y otras acciones. En el plano comunicacional, Southern generó videos y spots publicitarios mostrando los beneficios del proyecto. Los

contenidos se difunden bajo la etiqueta de “Centro de Información Southern Perú”, donde se informa que el proyecto no afectará al medioambiente y los beneficios de la operación de la mina para con las comunidades involucradas en su entorno” (pp.107).

Por otra parte, la narrativa enfocada en aquellos en contra de la ejecución del proyecto minero - pobladores del Valle del Tambo, entre ellos dirigentes sociales y agricultores- gira en torno a lo perjudicial que es la implementación del proyecto minero por la cercanía al Valle de tambo que traería consigo efectos negativos a la agricultura, actividad económica principal de subsistencia para los pobladores del valle. Asimismo, para los opositores del sector minero, el Estado ha sido un ente confalta de decisión e inactivo para pactar negociación y regular las actividades mineras de la empresa.

Una de las grandes consignas y narrativas fundamentales de los opositores alproyecto minero gira en torno a los efectos negativos ambientales que la actividad minera ejercería sobre el Valle del Tambo y por ende generaría la desaparición de laagricultura. Todo ello es sustentado en base a la cercanía de los tajos a las zonas agrícolas y el río Tambo. Asimismo, refuerzan afirmando que las concesiones mineras incluyen áreas agrícolas y canales de irrigación, lo que sería la prueba del inicio de la conversión de la zona hacia un distrito minero. Razón al desarrollo económico, los agricultores y dirigentes sociales señalan que el impacto del proyectominero producirá un incremento en el costo de vida en relación con la mano de obra de los peones, aumento de los precios de los predios agrícolas en inquilinato y venta. Asimismo, argumenta que se generará inestabilidad ciudadana, conllevando así que en la población se resquebrajan las relaciones sociales, entre ellos los liderazgos e interlocutores locales legítimos. En líneas generales, la narrativa sostenida en medio del enfrentamiento es que el Estado está imponiendo el bosquejo minero a la urbe y que comete arbitrariedades técnicas y prácticas mediante la fuerza y contención hacia los manifestantes de la zona opuestos al proyecto.

Capítulo 6: Análisis de la orientación social de los agricultores y dirigentes del Valle del Tambo

En el presente capítulo se brinda una discusión en torno a explicaciones que apuntan a entender la orientación social en contra de los agricultores y los dirigentes del Valle del Tambo. Se determina como hallazgo principal que la identificación social agrícola influye en el accionar de los pobladores del valle, lo cual conlleva a que estos se encuentren en la búsqueda de recursos para incidir en la dinámica del conflicto.

6.1 Identificación social agrícola de los agricultores y dirigentes sociales

La postura del subgrupo social conformado por dirigentes sociales y de los agricultores se ha mantenido en el transcurso del tiempo, todo ello bajo una consigna que apunta a señalar factores que albergan daños perjudiciales al Valle del Tambo. Dentro de esta zona geográfica, la propuesta contraria a la ejecución del proyecto minero, en lo que respecta a dichos actores sociales, si bien ha sido uniforme a lo largo del tiempo, no ha sido exenta de acusaciones. En las entrevistas realizadas a los agricultores y dirigentes se enfatizan daños asociados al agua, suelo, tierra, aire y a la salud de los pobladores aledaños a la zona. En lo que respecta a su acción colectiva, esta se ha traducido en la movilización que busca la visibilización de su demanda al gobierno central para que este tome medidas que terminen en la cancelación del proyecto.

Por un lado, la postura de los dirigentes sociales y de los agricultores se encuentra en el espectro contrario a la ejecución debido a una serie de factores tales como los antecedentes de la empresa, irregularidades en las acciones durante el conflicto, “los impactos negativos al ambiente, a la actividad agrícola, y a la población en general” (Pinto, 2016) que apuntan para ellos a un evidente desastre. Como un factor determinante en la posición en contra se encuentran los impactos generados al ambiente, a la agricultura y a la salud de la población. Resulta previsible que los antecedentes de la empresa brindan una orientación o perspectiva del futuro del proyecto Tía María en base a la comparación con experiencias de la empresa en territorio nacional e internacional. La percepción de la población a los posibles impactos es unánime; en base a las entrevistas realizadas, tanto los agricultores, dirigentes, pobladores y especialistas consideran que el proyecto Tía

María traerá consecuencias negativas para todos en el valle.

Por una parte, hay quienes consideran que se contamina el ambiente debido a los relaves, a los residuos de contaminantes, a los polvos contaminantes, entre otros. Por otro lado, señalan que la minería no brindará puestos de trabajo a todos los pobladores que la necesiten cuando la mano de obra sobreviva. En declaraciones de los agricultores entrevistados de iniciales M.I. y J.M.C., la instalación de un proyecto minero solo beneficiaría a un pequeño grupo en comparación con lo que la agricultura brinda a las familias.

En ese sentido, la percepción de los dirigentes de la zona es que el proyecto, al tener impactos negativos tanto en la zona, y por ende la economía, no permitirá un avance fructífero para la población del valle. Asimismo, validan sus percepciones en lo fundamentado por el principio de diálogo y de vivir en una democracia; ellos señalan que el Estado, la empresa privada y otros actores - interesados en que el proyecto se ejecute por los beneficios económicos- buscan imponer el proyecto a como dé lugar, pero que no están tomando en cuenta las necesidades, costumbres y formas de vida de los pobladores del Valle del Tambo.

Desde el punto de vista, en torno a si el proyecto minero causara o impactará ambientalmente, se vincula también con la racionalidad de intereses, pues guarda relación con la maximización de intereses económicos generados por la economía. Por dicha razón es que algunas de las entrevistas apuntan a señalar que la agricultura es mejor que la minería, que esta última solo beneficiará a algunos cuantos. Y esto es complementado con las cifras de producción que se generaron el 2019 (Tabla 4).

Con base en la recopilación de información, los entrevistados -entre ellos dirigentes y agricultores- dan cuenta que el principal motor de movilización que les ha permitido conseguir que a lo largo del tiempo su red social no se derrumbe ha sido el "sentimiento agrícola". Para ellos, compartir una historia colectiva identitaria que gira en torno a la agricultura, pues sus abuelos eran agricultores, sus padres lo eran y esperan que sus hijos lo sean, los conlleva a luchar para defender algo que consideran parte de su vida, la cultura. Por otro lado, se da cuenta de que dicha identificación agraria no solo es por el sentimiento de generación en

generación que se inculca, sino también es complementada por una dependencia económica por parte de los agricultores, ya que lo generado en sus tierras, ya sea por los productos vendidos o el alquiler de sus predios les permite subsistir y tener sostenibilidad económica.

Todo ello queda enmarcado dentro de la teoría de la identidad social que sin duda aborda las relaciones interpersonales e intergrupales de los individuos. Como señala Tajfel y Turner (1986), los roles convergen en una determinada situación, y es lo que ha sucedido en el conflicto socioambiental Tía María; los agricultores, desde sus posiciones en base a sus características, han generado en ellos una categoría social más marcada. Asimismo, aquello ha generado un conjunto de conocimientos sobre otros grupos, en la gestión del conflicto.

Hasta esta parte del análisis se evidencia que el sentimiento de pertenencia a un grupo social caracterizado por una historia en común, por el compartir un medio de subsistencia - la tierra- genera en la población motivaciones y preferencias por defender el valle del Tambo. Esto pues, desde sus subjetividades perciben peligros -que claro está son evidenciados- tanto al ambiente como a la población. De esta relación, en la que se considera que la identidad afianza la racionalidad de ideas; se evidencia que los agricultores y dirigentes se afianzan de una serie de medios para poder lograr el objetivo central.

Como señala Laraña (1999), las conductas racionales -la defensa del valle- generan la masificación de recursos formales e informales para lograr los fines, estos pueden ser dinámicos y/o tácticas. Resulta evidente que, en aspecto de la movilización, la estructuración colectiva y respuesta a los antagonistas se enfocan en declaraciones grupales realizadas por los frentes de defensa o por los dirigentes sociales. Como indican “ellos son las cabezas del frente, su voz ha sido y es nuestra voz”. Otro aspecto de estos recursos es el tema de financiamiento o el aprovechamiento de oportunidades. En los informes de la Defensoría del Pueblo, el relato sobre la toma de las carreteras o vías de importante acceso reflejan estrategias que apuntan a una mayor visibilización en el medio político y público. Esto se asocia con los procesos colectivos de integración que engloba propuestas para la solución del problema. Si bien en el caso de Tía María, los pobladores han mantenido acuerdos o reuniones con representantes de la empresa y el gobierno,

esto ha estado enfocado a la explicación de que la economía del valle puede funcionar sin Tía María, y sobre los impactos del proyecto.

Para Zald (1992), un grupo social moviliza recursos en base a la adquisición de apoyo y alianzas, los cuales generan soporte; esto se vincula con el apoyo brindado por ONGs como RED MUQUI, la cual ha estado muy presente en todo el proceso del conflicto. Los reportes, informes que ha sacado esta organización ilustra el apoyo - indirecto- a la población. Pues de alguna manera les brinda recursos de conocimiento para alcanzar sus objetivos.

“El apoyo de RED MUQUI ha sido fundamental, nos han apoyado sin pedir nada cambios, estamos agradecidos” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo con iniciales H.C.).

“Yo he participado con RED MUQUI en recopilación de información para los informes y ha hecho una labor considerable; todo ha sido basado en sus valores como organización” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo con iniciales J.G.Z.).

“Sí, el apoyo de organizaciones como RED MUQUI, de jóvenes, de diferentes colectivos no ha permitido tener dinámica de cooperación e incluso competición con los opositores, nos ha hecho ver como un frente de defensa consolidado, porque lo somos” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo con iniciales J.C.).

En ese sentido, se evidencia que todos los factores anteriormente mencionados se asocian con una racionalidad de intereses que se estructura y enfoca en la acción humana individual de los pobladores del valle del Tambo. Extrapolando las ideas de la racionalidad de intereses, las acciones por parte de los dirigentes y agricultores se enmarcan en un individualismo metodológico que al centrarse en una serie de interacción de acciones genera ciertas subjetividades que a su vez desencadenan prácticas sociales diferenciadas (Abitbol y Botero, 2006).

Respecto a los antecedentes de la empresa SPPC que evidencian acciones en otros países como México, en el cual han desarrollado proyecto minero que han dejado daños perjudiciales al ambiente. De igual manera, la existencia de antecedentes nacionales ha generado esta suerte de desconfianza y resistencia

(Park, 1921). Investigaciones realizadas por autores tales como Soler (2013), Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2015), Cisneros (2015) y Bruce (2015) dan cuenta de impactos en la provincia de Candarave en Tacna. En dicho lugar, la empresa ha efectuado acciones desde 1960, y las malas prácticas abocadas al retiro del agua han generado que la Laguna Vizcachas, la laguna Suches, el río Cinto dejen de existir (Pinto, 2016). De igual forma, la autora Soler (2013) enfatiza la deuda ecológica con Moquegua, Tacna y otras zonas como la bahía de Ite.

Complementando ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2015) en su boletín da cuenta de seis razones que generan desconfianza; entre estas se encuentra la contaminación de la bahía Ite en Tacna, donde la empresa por 36 años ha vertido más de 785 millones de toneladas de relaves mineros. Asimismo, la emisión del dióxido de azufre por encima de los niveles permitidos en Ilo; la contaminación de “pampa citana”, donde los niveles de contaminación por metales pesados superan lo establecido por ley, así como esto conllevó a perjudicar la agricultura y ganadería de la provincia de Jorge Basadre. Sumado a esto, investigaciones de la República (2012) dan cuenta de que dicha empresa opera sin licencia de uso de agua hace más de 50 años; y que se ubica entre una de las empresas con más multas por la OEFA tanto por proceso administrativo, incumplimiento de normas ambientales, instrumentos de gestión ambiental, incumplimiento de mandatos y residuos sólidos. Desde la perspectiva de Bruce (2015)

“La Southern causó daños ecológicos tan graves e irreversibles que, a su lado, la corrupción del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, siendo grave, es poco más que un plato de lentejas. Dicho grupo acaba de ser gravemente cuestionado en Aznalcóllar, Andalucía, España, por sospechas en la adjudicación de la concesión. Y en Sonora, México, hay un Río envenenado por su descuido” (como se citó en Pinto, 2016, pp. 211).

Con base en este historial negativo de la empresa, la explicación de la postura en contra de los actores sociales se fundamenta en cómo las acciones de la empresa brindan indicios y orientaciones para la lógica de actuación. En otras palabras, la racionalidad tanto de los agricultores y dirigentes sociales se basa en la maximización de utilidades futuras; en este caso, buscan “priorizar sus tierras”, “no

dañar al ambiente”, “tener un lugar sano para vivir”, entre otras cosas. Como señala Elster (1989), la interpretación de los actores a ciertas acciones genera o motiva ciertas preferencias para la disposición de medidas para alcanzar fines. Es decir, los antecedentes de la empresa SCPP han generado en la población - sujetos racionales- cierto egoísmo vinculado a sus intereses personales, en el que busca proteger su forma de vida, sus medios de subsistencia y de relacionamiento social, que en gran parte se condensan en la actividad de la agricultura.

Otro aspecto relacionado con la empresa han sido las malas prácticas evidenciadas en los estudios de impacto ambiental del proyecto minero Tía María. En medio de la dinámica del conflicto, los EIA presentados por la empresa han englobado observaciones que suman a la desconfianza por parte de los pobladores del Valle del Tambo. Algunas de estas observaciones se han centrado en la falta de criterios técnicos para la separación correcta del área de influencia ambiental tanto directa como indirecta. Asimismo, la estimación del alcance territorial del pueblo contaminado. Como lo señala Pinto (2016) “Hay fallas críticas del modelamiento técnico de la dispersión de las partículas contaminantes” que incrementan los impactos negativos. De igual forma, el EIA no señala el drenaje de agua caída de roca que representa una continuación de la liberación de metales.

Esto ha sido complementado por el Observatorio de Conflictos Mineros, que enfatiza en “ausencias principales” del EIA centradas en la falta de un análisis de características hidrogeológicas de la zona, no hay estudios sobre la resistencia de las estructuras fenólicas ni información sobre los tajos abiertos, tampoco hay análisis sobre los daños generados por los desmontes (citado en Pinto Herrera, 2016). Asimismo, investigadores de CONVOCA, Castro y Salazar (2015), señalan irregularidades en el proceso de la aprobación del EIA. Una de estas irregularidades se concentra en las más de treinta reuniones por parte de los representantes de la empresa con funcionarios del MINEM, que consideran se tradujo posteriormente en aspectos que dejaron pasar en análisis del EIA.

En líneas generales, se evidencia una serie de irregularidades tanto en los estudios de impacto ambiental como en el proceso de aprobación de este. Para una mejor comprensión, el cuadro elaborado por Pinto Herrera (2016) brinda una serie de diferencias entre ambos impactos que permite la evaluación de desaciertos

quela empresa no analizó en el primer estudio.

Tabla 7. Diferencias entre los estudios de impacto ambiental

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: ALGUNAS DIFERENCIAS	
Primer EIA	Segundo EIA
1. La UNOPs hizo 138 observaciones.	1. La DGAAM hizo 73 observaciones.
2. Se consideró oro y cobre como minerales a explotar.	2. Se consideró solo cobre.
3. Mineral de óxido fijado a explotar: 638 millones de TM.	3. Mineral de óxido fijado a explotar: 650 millones; es decir, 12 millones de TM de incremento.
4. Desmonte: 367 millones de TM.	4. Desmonte: 532 millones de TM. 165 millones de TM de incremento.
5. La fuente de agua y las instalaciones para su uso en las actividades mineras se ubicaban en el Valle de Tambo y el acuífero del subsuelo, proveedor del 100% del caudal del río en época de estiaje. Es decir, el valle-río formaba parte del área de influencia directa.	5. Los territorios del impacto de la actividad minera excluyen al valle del área de influencia directa e indirecta.
6. En una primera fase se explotaba la reserva del tajo La Tapada (12 años), luego la segunda fase de explotación del tajo Tía María (6 años).	6. Las operaciones mineras se harán en tres etapas: la primera 9 años de explotación en La Tapada; la segunda 6 años de explotación en paralelo en ambos tajos; y la tercera etapa, 3 años de explotación de Tía María.

Fuente: Pinto (2016)

Al igual que el análisis en relación con el historial de la empresa, las acciones de esta a lo largo del conflicto “han dejado mucho que desear”. Tal y como menciona en párrafos anteriores, los fenómenos sociales se deben a interacciones individuales; en este caso, la negación a la ejecución del proyecto minero, que se ha traducido en un conflicto social, se ajusta a la interacción que ha tenido la empresa al momento de ejecutar sus análisis, presentarlos y socializarlos con la población. Así pues, los dirigentes sociales y agricultores han afianzado sus preferencias, valores en torno a los fines que desean lograr la cancelación del proyecto minero.

Sumado a ello, la desconfianza en el gobierno para resolver conflictos; gran parte de los jornaleros entrevistados, la actuación del gobierno ha sido de desinterés y de cambios variables respecto a sus posiciones respecto a la ejecución del proyecto minero. Muchos de estos agricultores se sintieron decepcionados y defraudados con el expresidente Ollanta Humala, que en campaña prometió que dicho proyecto no iría, pero ya en gestión fue todo lo contrario. Para los agricultores él es uno de los responsables de los hechos violentos ocurridos, de la represión a los manifestantes y de los juegos bajo la mesa.

Por otro lado, durante la gestión y dinámica del conflicto, si bien ha existido

intervención por parte de la Defensoría del Pueblo para el consenso de reuniones y para el cese de violencia; esto no ha sido suficiente para los pobladores, pues la existencia de mecanismos institucionales para atender la demanda ciudadana no se ha centrado en las prontas soluciones, sino en solo calmar las aguas en los momentos de algidez (Síntesis de entrevistas realizadas a los dirigentes sociales del Valle del Tambo con iniciales M.I. y J.R.). Asimismo, en declaraciones de autoridades del PCM y Ministerios como del Ambiente, Energía y Minas, el enfoque centrado se basaba en acciones para recuperar la gobernabilidad del Valle del Tambo, pero a su vez no afectar las inversiones ya establecidas con la empresa. Por tal motivo, han desarrollado la difusión de información sobre los EIA, conformación de mesas de diálogo, reuniones con autoridades locales, etc.

Todas las acciones emprendidas por el Estado central, según declaraciones, no ha conllevado a confiar en este; en palabras de un entrevistado con iniciales J.G.Z., “así como la empresa tiene su historial, el Estado también con los conflictos socioambientales, porque no los soluciona”. Por tal motivo es que se evidencia el apoyo entre los pobladores y prefieren ellos manejar su organización, acción colectiva sin depender de otros, salvo de redes de apoyo que se encuentren en la línea de sus intereses. Y es que aseguran que la identificación agrícola y su consigna de la defensa por el valle es genuina; consideran que hay un “ellos” que buscan imponer cierto modelo económico en la zona, pero sobre todo que, debido a sus antecedentes, están seguros de que si ocasionan algún daño no se harán responsables (Síntesis de entrevistas realizadas a los agricultores del Valle del Tambo con iniciales J.C. y J.G.).

No obstante, estas declaraciones son refutadas por acusaciones respecto al soborno a dirigentes sociales por parte de la empresa para que se encuentren a favor de la ejecución del proyecto minero. Y es que, en base a los audios de Pepe Gutiérrez, se evidencia la negociación con representantes de la empresa para la cancelación de protesta en contra de Tía María. Desde la publicación de dicha evidencia, se ha cuestionado la veracidad de lo propugnado por los dirigentes sociales y agricultores que en muchos casos han obtenido ocupar cargos políticos. De acuerdo con la información recopilada de fuentes secundarias, las declaraciones, respuestas, y tesis se enmarcan en aducir que los agricultores buscaban apoyo de la población y buscaban ser reconocidos por sus perfiles de

liderazgo para solo lograr ocupar los cargos políticos. De igual manera, los dirigentes, que buscan obtener beneficios económicos.

“No sabemos la verdadera intención, pero los audios están, es evidencia suficiente, él buscaba obtener beneficios personales sobre la consigna del valle” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de iniciales R.H.).

“Sí, se señala que los dirigentes estaban coludidos con organizaciones antimineras, las cuales como sabemos tienen intereses particulares, quizá eso sea cierto; por eso ahora no confío en los dirigentes, aunque no todos son iguales” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de iniciales J.R.).

Por otra parte, si bien hay relación o vinculación con otros intereses de la empresa ajenos a la consigna del valle del tambo; también se evidencia el apoyo de actores externos, tales como la RED MUQUI, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas Por la Minería (CONACAMI), Coordinadora Regional de Comunidades Quechuas y Aymaras de Puno, Juventud Socialista de Arequipa, miembro de CooperAcción, estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín, etc. Estos actores han apoyado por medio de una serie de recursos tales como tiempo, dinero, habilidades y conocimientos para este grupo humano que ha influido en su accionar. En ese sentido, los recursos brindados por estos actores externos e involucrados de cierta manera en el conflicto afianzaron la autonomía de la que los entrevistados hacen referencia.

“Nos han apoyado mucho, había jóvenes que se encargaban de la elaboración de afiches e iban casa por casa para la explicación de los impactos negativos de la ejecución del proyecto. Teníamos como decir mano de obra, apoyo logístico, no necesitábamos del Estado. Esta participación efectiva, la dotación de recursos permite que podamos organizarnos e incidir con nuestras diferentes manifestaciones” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.).

“Si ha sido vital el apoyo de actores externos, incluso lejanos, porque desde Lima y otras provincias se sumaron a nuestros paros en sus localidades,

eso nos motivaba y sabíamos que luchábamos por una causa no solo de Islay, sino de diferentes partes del Perú” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales C.A.H.).

Dentro de lo expuesto, se resalta el elemento de la organización, el cual permite que se dé una óptima articulación y se sostenga una narrativa en el tiempo. Si no tenemos este elemento de por medio, la movilización social no logrará sostenerse en el tiempo y sin un objetivo compartido. En el caso de Tía María esto ha sido evidente y como se dice en párrafos anteriores, la movilización de recursos ha permitido cierta autonomía del movimiento social basada en una diferencia de un “nosotros” y “ellos” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo con iniciales M.I.).

6.2. Papel de los dirigentes en la dinámica del conflicto socioambiental

En el conflicto socioambiental Tía María, un aspecto fundamental en el desarrollo del mismo ha sido el liderazgo imperante que han ejercido los dirigentes sociales. Este grupo de actores sociales han sintetizado y canalizado las perspectivas de un grupo humano más amplio, y han expresado su deseo de que la minería se retire de la zona. Asimismo, son los que han sido acusados por la población, medios de comunicación y Fiscalía de cometer delitos de soborno, corrupción, red criminal, entre otros.

Los dirigentes sociales desde el inicio han ejercido una labor de resistencia social, de organización de bases, de motivación a los agricultores y pobladores del valle del tambo, han demostrado preocupación para defender lo que consideran parte de su cultura, patrimonio simbólico de sus familias (Síntesis de entrevistas realizadas e informes de la Defensoría del Pueblo). El papel de estos ha sido crucial, pues como se evidencia a lo largo de los hechos de conflicto, el frente opositor a la minería ha ejecutado paros, movilizaciones y protestas que han calado en las autoridades nacionales para poder establecer negociaciones que han venido frenando la ejecución del proyecto minero Tía María.

“Nos motivaban, a veces era difícil, pues cuando uno sale a protestar y hay hechos de violencia puede suceder lo imaginable. Cuando murieron

pobladores y policías, eso fue difícil para mí y varios, el miedo se apoderó de mi persona, pero ahí estaban ellos, Manuel, Richard, y los demás compañeros que nos dijeron que por nuestros hermanos nuestros debíamos seguir luchando, que no hacemos nada malo” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales H.C.).

“Había que demostrar ánimo, a pesar de que también teníamos miedo, sobre todo de las acusaciones y amenazas que recibimos. No es fácil lidiar con comentarios que dañan la imagen de uno, pero a pesar de todo uno representa a un grupo de personas que confían en ti” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales G.M.).

“Era una mezcla de sentimientos, para demostrar consolidación, internamente todos tenemos que estar unidos, a veces había sus discrepancias, pero ahí está el papel de un líder, que tiene que demostrar serenidad, generar el diálogo entre todos los miembros” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de iniciales R.H.).

“Yo era dirigente nombrado por FDVT, pero también había otros frentes y asociaciones, ahí también caló mi papel, de poder coordinar con ellos, de concretar reuniones, articular nuestros argumentos, acciones y sobre todo apoyarnos. La prensa a veces comentaba que nos llevábamos mal o había problemas por el liderazgo, yo digo que no fue así” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de M.I.).

“Sabíamos que representamos a un grupo social, que defendemos nuestro Valle, por eso es importante estudiar, evaluar, asesorarnos con relación a nuestras acciones. El apoyo de organizaciones externas fue de gran ayuda, nos apoyaron con conocimientos sobre ciertos aspectos legales y de ingeniería” (Entrevista realizada al dirigente social del Valle del Tambo de M.I.).

El papel de liderazgo de estos dirigentes se ha orientado en la capacidad de influir en los agricultores que formaban parte de movilizaciones; la motivación y el entusiasmo respecto a ello son piezas claves para lograr sus objetivos.

Otro aspecto resaltante es el comportamiento del líder, según investigaciones las características de estos se adquieren a lo largo de la vida e interacción con otros

miembros sociales. En el caso de los dirigentes de Tía María se ha visualizado un perfil abocado a acciones premeditadas, organizadas para incidir en la arena política.

Complementando el papel ejercido por los dirigentes sociales, los agricultores han sido un apoyo eficiente que ha permitido gracias a su ímpetu y resistencia lograr posicionar a los dirigentes sociales en diferentes instituciones locales. Gracias al apoyo de los agricultores, su organización y el deseo firme de continuar con sus demandas, todo lo realizado en torno a las protestas y movilizaciones se ha podido sostener en el tiempo.

No obstante, dichas representaciones no han sido exentas de denuncias por parte de otros actores respecto a que los dirigentes habrían recibido dinero para poder ir en contra de las marchas, suspender las movilizaciones y aprobar así la ejecución del proyecto minero. Asimismo, algunos dirigentes han señalado que han sido amenazados, por lo cual en ciertos momentos se han sentido impotentes y con miedo de proceder a ciertas acciones. Ellos consideran que hay intereses económicos muy fuertes en torno al proyecto minero, consideran que los poderosos puedan manipular todo a su conveniencia y por ende ellos tienen que consolidar un buen frente opositor, identificado con la causa que les permita llevar a los poderosos sus demandas y lograr cambios en la configuración de la dinámica del conflicto socio ambiental Tía María.

Resulta importante destacar que bajo el recojo de la evidencia empírica, los entrevistados han dilucidado que un actor clave ha sido el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, pues ha agrupado a líderes sociales y políticos, pobladores (agricultores y comunidad en general). Para los agricultores, si han existido mecanismos por parte de la empresa e incluso el Estado orientados a debilitar el movimiento de defensa del valle del Tambo.

6.3. Política de la empresa en la dinámica del conflicto socioambiental

La postura en contra de los dirigentes sociales y de los agricultores del Valle del Tambo respecto al conflicto Tía María deviene - como se ha mencionado anteriormente- de una serie de factores que ha generado en estos actores una acción colectiva enmarcada en aspectos tales como la identificación, racionalización de intereses e incluso autonomía. Hasta el momento aspectos previsibles que

han influido son los daños al ambiente del valle y a la población aledaña a la zona; asimismo, según lo desarrollado en el capítulo 2, el papel de los dirigentes ha sido notable en el transcurso de desarrollo del conflicto, pues ha impulsado el fortalecimiento de lazos entre los agricultores y ha confortado la permanencia y persistencia de los mismos en las diferentes acciones realizadas. Sumado a ello, basándonos en el recojo de información y al análisis de lo desarrollado en el capítulo 3, específicamente, en la cronología de la participación y las acciones por parte de la empresa, se da cuenta del aspecto interaccional de esta con la población.

De acuerdo con la información recolectada, la interacción de Southern Copper Corporation ha sido insuficiente y carente de empatía, simpatía con los actores sociales involucrados del Valle del Tambo. Cuando nos referimos a una política de la empresa, hacemos énfasis en los principios, acciones, decisiones, involucramiento de esta para alcanzar sus objetivos trazados con relación a una situación o problemática específica. En ese sentido, se coloca énfasis en aspectos comunicacionales, relaciones públicas, manejo de información, solución de problemas, competencia de su equipo de trabajo, evaluación de errores, entre otros. Así pues, la indagación de estos puntos claves permite señalar una actuación incapaz que ha sido desestimada por agricultores y dirigentes sociales, pero que a su vez permite vincular dichos aspectos.

La desestimación de la empresa SPCC sienta sus bases en su historial negativo y en el impacto previsible que puede ocasionar en futuros proyectos. Con enfoque en la teoría racional es previsible vincular una acción con cierto contexto, es decir, si sabes, te cuentan y hay pruebas de que una persona que busca involucrarse en tu vida ha cometido un delito, faltas y peor aún no ha hecho nada para resarcir dicho daño, lo que vas a plantearte es impedir que se involucre. Extrapolando ello al caso Tía María, es lo que lleva a comprender los pensamientos y acciones de los dirigentes y agricultores. Como bien señalan algunos entrevistados:

“Sabemos de su historial, el Estado parece haber olvidado ello, o se hace la vista gorda para no darse cuenta de los daños que ocasionan la empresa”
(Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.M.C.).

“Nosotros hemos tenido problemas desde muchos años atrás, con la contaminación de nuestros cultivos por el polvo de la industria de Ilo, la empresa solo les pagó a los pobladores de dicha zona, a nosotros ni un sol, encima murió un poblador del valle, todo por querer justicia” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.C.).

“SPCC tiene un historial bien manchado, al principio sabía lo de Ilo, pero después cuando hemos investigado hemos encontrado más daños al ambiente, multas, y lo más grave es que no ha hecho nada para compensar el daño, aunque claro está que eso es bien difícil” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.).

Estas ideas dan lugar a comprender que la empresa ha tenido un historial negativo que sí ha influido de manera trascendental en la postura de los actores sociales, pero sobre todo la no indemnización de daños, la falta de compromiso y saber que tienen diversas multas ha creado en dicha población suspicacia de sus acciones presentes y futuras en la negociación para lograr que los pobladores acepten la ejecución del proyecto Tía María. No ha sido gratuita esta posición. Y es que resulta presumible que, si los antecedentes de SPCC hubieran estado acorde a principios básicos de responsabilidad social, la trayectoria de este proyecto enmarcaría otra dirección. La deducción de ello gira en torno a declaraciones de ciertos agricultores.

“Considero que, si otra hubiera sido la empresa que propone el proyecto minero y esta tuviera una buena reputación, la población hubiera aceptado, claro está que viendo los costos sociales, económicos y ambientales” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.M.C.).

“No estoy segura si con otra empresa aceptaremos un proyecto minero acá en el valle, pero quizá hubiera existido una mejor comunicación y otro sería el desenlace” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales de M.I.).

Cabe mencionar que esta deducción también debe ser contrastada con lo mencionado anteriormente respecto a la consigna general de no aceptar ni a corto ni a largo plazo el proyecto minero. No obstante, la respuesta a ello desde nuestro análisis plantea que, si bien hay una serie de factores o aspectos que convergen para dar pie a una postura en contra, hubo caminos -de los cuales no sabremos sus desenlaces - que pudieron abarcar acciones y con ello trayectorias distintas de la dinámica del conflicto Tía María.

Otro aspecto relacionado se enmarca ya no en los antecedentes, historia de la empresa SPCC, sino también en el desenvolvimiento de esta en la dinámica del conflicto. Por un lado, las denuncias procesadas sobre el pago de pobladores de otros distritos o regiones para poder asistir a talleres y audiencias públicas de socialización del proyecto; así como, la negación del ingreso a pobladores del valle del Tambo a las reuniones.

En la investigación de Pinto (2016) sobre las razones de la protesta se hace mención a un estudio de Mar Soler (2013) que recoge testimonios de irregularidades en torno a las audiencias y talleres:

“Las dudas nacen en la población cuando en su primer taller la empresa Southern moviliza toda una ‘portátil’, la mayor cantidad de gente que estuvo en su local era de fuera, no del Valle de Tambo. Y entonces la pregunta es ¿por qué se trae gente de otro sitio si realmente nosotros somos los que debemos escuchar? Allí surge la primera sospecha que tenemos en contra de ese proyecto (...) Lo primero que hicieron fue comprar prensa a través de sus operadores, pagar periodistas, crear divisiones entre la gente, crear una serie de asociaciones de jóvenes, de damas, de agricultores” (como se citó en Pinto, 2016, pp.209)

“Condena la violencia desatada por las fuerzas policiales contra pobladores de la Provincia de Islay en el Estadio de Cocachacra durante la Audiencia del jueves 27 de agosto, que tuvo que ser suspendida al no permitirse que la ciudadanía exprese sus puntos de vista sobre el Proyecto Tía María” (como se citó en Pinto, 2016, p. 209)

“El MEM decidió realizar una audiencia pública en el distrito de Cocachacra el 19 de diciembre de 2013. La audiencia requirió la movilización de cerca de dos mil policías; la presentación del EIA duró apenas 35 minutos. Los dirigentes del Frente de Defensa y de la Junta de Regantes fueron impedidos de ingresar” (como se citó en Pinto, 2016, p.209)

Estas declaraciones se complementan con lo mencionado en párrafos anteriores; se evidencia que estas acusaciones a la empresa en el proceso del conflicto han rectificado los antecedentes de las mismas en otras regiones y con ello la reafirmación de la postura en contra de los actores sociales. Cabe mencionar que, respecto a estas acusaciones, la empresa hizo algunas declaraciones en medios de comunicación que desmentían lo manifestado por los pobladores del valle del Tambo. La acción de solo declarar en medios de comunicación, específicamente, declaraciones o entrevistas en periódicos se repite ante todas las denuncias hechas por sus contrapartes.

Para los agricultores, la poca comunicación de SPCC afianza sus percepciones respecto a esta misma y la débil gestión para establecer relaciones con la población que incentive, motive y persuada su posición en contra del proyecto Tía María. En ese sentido, se debe hacer énfasis -nuevamente- en la teoría de la racionalidad, y con ello las declaraciones con los diferentes agricultores y dirigentes sociales que señalan que el accionar de la empresa justifica las movilizaciones, protestas, huelgas y paros realizados en dicha línea.

De acuerdo con la perspectiva teórica de los movimientos sociales, el comportamiento social deriva de una serie de comportamientos y estrategias intencionales que buscan una demanda de atención y distribución del poder para lograr preeminencia sobre sus antagonistas. Comparar aquello permite dar cuenta que en el caso del conflicto Tía María hay sustento de las actitudes de los agricultores y dirigentes sociales hacia la empresa, sobre todo enfocado en la negación de participación de los mismos en talleres para escuchar, brindar propuestas, entre otras acciones.

Conectado con ello, el desarrollo de la política es débil o se percibe así ante la población del Valle del Tambo, por la cantidad y en la forma en que dichas declaraciones por parte de la empresa respecto al proyecto Tía María han sido manifestadas; estas eran pocas y a cargo siempre de uno o dos representantes.

Se deduce en base a la teoría racional que, para la preservación de sus intereses, dicha empresa no emitía declaraciones o pronunciamientos para no agravar el recelo o mala relación con los agricultores y dirigentes sociales. Un claro ejemplo del manejo de las declaraciones queda enmarcado con lo manifestado por representantes, clasificando a los involucrados en contra del proyecto con “genes terroristas” “antimineros terroristas”. Esto trajo consigo problemas de imagen y sobre todo críticas a su gerencia de relaciones públicas.

Por otro lado, desde un análisis de dichas relaciones, en base a la imagen comunicacional por redes sociales y medios de comunicación; tal como lo señala César Iburguen (2019), la empresa Southern no demostró en redes sociales ni en sus páginas sociales información que permita a externos poder conocer sobre su cultura, valores, responsabilidad social, entre otros. Esto se complementa con declaraciones de dirigentes sociales que argumentan que no ha sido suficiente la realización de talleres por parte de la empresa para demostrar que todo está bien con el proyecto Tía María. Asimismo, señalan que en dichas reuniones establecidas con representantes de esta empresa y con autoridades estatales el malestar por el accionar de SPCC se ha manifestado y se ha hecho énfasis en lo poco ético y moral que ha sido traer de otros lugares a personas para que sean partícipes de reuniones o talleres dirigidos a los pobladores del Tambo.

Y es que parece suceder que la empresa ante las denuncias sólo refuerza en sus declaraciones o entrevistas la importancia del proyecto y los beneficios que traerá a Islay, más no responde las preguntas, cuestiones, debates que especialistas y pobladores le realizan. Asimismo, toda la información proveniente de esta, tales como sus comunicados oficiales en sus páginas digitales, no cuentan con la llegada suficiente. Tal y como señalan algunos agricultores, la dificultad de tener internet o de visitar páginas web es poca y así la empresa haya proyectado buenas cifras o beneficios, esto no ha sido socializado de la mejor manera con ellos. En ese sentido, parece ser evidente que el uso de medios digitales por parte de la empresa si hubiera aprovechado o socializado de otra manera, esto hubiera permitido construir una narrativa distinta por parte de la empresa sobre el impacto de Tía María.

SPCC señala que ha existido y existe un grupo humano opositor al proyecto, los cuales tienen intereses personales y vinculados con la anti minería, y que han sido estos los promotores de noticias falsas y desinformación alrededor de la población del Valle del Tambo. Sin embargo, desde la perspectiva de los dirigentes y agricultores, la empresa en sus pocas manifestaciones y declaraciones no ha demostrado pruebas veraces sobre el verdadero impacto del proyecto. Asimismo, nunca han demostrado con hechos, acciones concretas dicho impacto, y por tal motivo, es que no ha existido una buena relación con ellos y la empresa.

Aparte de cómo se ha declarado, manifestado y realizado las entrevistas, declaraciones por parte de autoridades y representantes de la empresa SPCC, está lo vinculado lo referente sobre qué se ha declarado. Y es que han existido contradicciones por parte de dichos representantes sobre algunos temas tales como el manejo del agua, la desalinización de esta, los estudios de impacto ambiental, las descargas de contaminantes y la dirección de los polvos.

“La gran mayoría de sus miembros son ingenieros, economistas o administradores; no creo que haya sociólogos o trabajadores sociales trabajando, eso explica muchas cosas” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales M.I.).

“Son como fríos ante nuestros reclamos, no hay empatía en sus directivos y representantes, ellos piensan que todo pasará y que solo nos calmamos, eso no va a suceder” (Entrevista realizada al agricultor del Valle del Tambo de iniciales J.G.Z.).

Una entrevista a representantes de la empresa SPCC abordó el manejo y algunas contradicciones existentes por su parte referentes a los temas anteriormente mencionados. Por una parte, respecto a los problemas del primer EIA, ellos señalan que en el segundo estudio corrigieron las observaciones, y que estas no estaban asociadas a problemas ambientales, sino a temas administrativos. No obstante, los informes mostrados por especialistas externos sí demuestran que estas observaciones estaban ligadas a temas ambientales y sumado a ello, en la revisión del segundo estudio se evidenció un aumento de estas observaciones.

En el tema asociado al agua, las preocupaciones han girado sobre el uso de las aguas subterráneas por el proyecto; en dicha entrevista se descartó la opción del uso de dichas aguas y enfatizaron la desalinización de las aguas del mar para el uso

de estas en las operaciones. Pero esto también entró en contradicción, puesto que meses anteriores, los agricultores señalaban que aquello no se había indicado en el estudio de impacto ambiental. Posteriormente, a dicha entrevista surgió la crítica a que el uso del mar y la instalación de una desalinizadora traería consigo problemas a las especies marinas, especialmente a la salmuera. Cuando dicha crítica surgió, nuevamente Oviedo indicó que, de 100 partes captadas, el 60 de estas se devuelve al mar, la salmuera con difusores y así homogeneizar la salinidad. Esto conllevó a que ambientalistas señalan lo perjudicial que sería. Complementado ello, los antecedentes de la empresa en torno al agua no los dejaba bien parados.

En torno a las descargas de agua contaminada o residuos, en el primer estudio de impacto ambiental como el segundo no se especificaba dónde serían estas descargas; en los talleres informativos dicha información solo giraba en torno a que sería en zonas donde no existirían bancos naturales ni especies marinas. En general no especifican la información que solicitaban. De igual manera, sucedió con el tema del polvo, para especialistas debe existir un control de este y de las direcciones, y por ello la necesidad de análisis a profundidad, análisis que la empresa no presentó en los estudios de impactos ambientales donde el tema se aborda de manera genérica.

Se puede discutir la política de la empresa y su interacción o búsqueda de buenas relaciones con los pobladores del Valle del Tambo. Parece evidenciarse que la empresa, pese a denuncias, acusaciones, rumores, no ha manejado muy bien la comunicación tanto en medios digitales, redes sociales, medios de comunicación, los temas en torno al uso del agua, tierra, y la dirección de los contaminantes. Ha existido una serie de contradicciones por parte de la empresa; por un lado, sus documentos señalaban o afirmaban ciertas acciones, mientras que sus declaraciones desmentían ello o planteaban soluciones. Asimismo, el manejo referente a cómo se realizaba ello, su comunicación ha sido poca y débil; poca por la cantidad de entrevistas que realizaban, y las cuales se daban en foros donde

participan dichos representantes, y débil por no conseguía el impacto para el apoyo al proyecto, sino que lograba que estas posiciones, acciones avivaron el fuego del conflicto. Sumado a ello, declaraciones infortunios y no sostenidas por ciertos representantes al expresarse las personas que se movilizaban en contra del proyecto. Todo ello se ha vinculado con lo que se ha mencionado en el primer punto de este capítulo, la consulta racional de los agricultores. La política de la empresa parece haber influido mucho y comprobado las subjetividades por parte del grupo en contra del proyecto.

En definitiva, si Southern Perú hubiera reflejado una cultura de resultados diferentes y asociadas a la responsabilidad ambiental con enfoque en el proceso social, cabría la posibilidad de que los agricultores y dirigentes sociales hubieran respaldado dichas acciones. Sin embargo, no podemos verificar aquello debido al clima que nos han manifestado los agricultores y dirigentes entrevistados. Algo que sí podemos señalar es que la actitud de los pobladores hubiera sido distinta y no confrontacional en varios momentos del conflicto. En las declaraciones de los entrevistados se logra analizar que distintos momentos oportunos para que la empresa sea concisa de sus errores y los evalúe, en otras palabras, existieron ventana de oportunidades para la reorientación del conflicto. Aquello pues, los agricultores señalan que la empresa no demostró un cambio respecto a sus acciones, declaraciones, sino que evidenciaban todo lo contrario respecto a sus valores sociales y de responsabilidad que alegaban en sus páginas, videos y noticias institucionales.

6.4. Involucramiento y apoyo de actores externos a los dirigentes sociales y agricultores

En la teoría de la movilización de recursos, hay una configuración de condiciones que les permite a los individuos hacer uso de una serie de recursos, esta se basa en que la acción colectiva o las actividades que buscan realizar los movimientos sociales o grupos humanos se sostiene en dinámicas y estrategias vinculadas a recursos económicos, sociales o políticos para lograr objetivos. Complementado ello con la teoría de movimiento social, estos establecen una diferenciación entre un nosotros y ellos. En ese sentido, abordamos aspectos relacionados con las alianzas estratégicas por parte de los diferentes grupos

involucrados en un conflicto social.

En el conflicto Tía María, ha sido evidente la resistencia social a la ejecución del proyecto, el análisis de la postura en contra ha permitido dilucidar que un cuarto factor o aspecto que ha influido en esta postura y el mantenimiento de esta, como el papel de los dirigentes sociales, ha sido el involucramiento y apoyo de actores externos a los pobladores del valle del Tambo.

Resulta previsible que existan aliados o redes de apoyo tanto en los movimientos sociales como en las empresas mineras que buscan la implementación de un proyecto. Respecto a estas últimas, se infiere que las empresas mineras deben apoyarse en aliados estratégicos que les permitan tener una incidencia en la población, tales como trabajadores, proveedores, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

En el caso de Tía María ha sido evidente que organizaciones no gubernamentales han encontrado en alianza con los agricultores del valle del Tambo; como se enfatiza en declaraciones de los mismos, hay un apoyo constante en el apoyo de dichas organizaciones. Enfatizan el apoyo de estas ONG- sobre todo RED MUQUI- en la complementariedad de recursos de información, financieros y técnicos que les ha permitido lograr asimetría con SPCC.

Entre las ONGs involucradas destaca la participación de RED MUQUI, CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo, el Colegio de Abogados de Arequipa, etc. En torno a RED MUQUI, esta es una ONG que agrupa más de 29 organizaciones vinculadas a los derechos de las comunidades y poblaciones que se ven afectadas por la actividad minera. En las declaraciones de algunos agricultores, la presencia de RED MUQUI fue trascendental, en ellos encontraron personas en las que podían confiar. Muchos de sus miembros participaron también en algunas protestas. En líneas generales, RED MUQUI, dotó de información técnica especializada a la comunidad, los capacitó para poder tener algunos aspectos centrales de los estudios de impacto ambiental, los apoyó en la constitución de una agenda para poder incidir o realizar campañas públicas, proporcionando acciones en favor del diálogo y orientación en la defensa legal ante la criminalización de la protesta colectiva.

“Sin duda RED MUQUI ha sido un gran aliado, nos ha apoyado mucho en la observación y análisis de los estudios de impacto ambiental, hay cosas que no entendíamos y nos han explicado. Asimismo, han ayudado con la campaña informativa del impacto del proyecto entre nosotros, así como los jóvenes nos han ayudado con afiches, etc., ellos también. En la elaboración de informes y reportes han sido un gran aliado, siempre nos informan cuál sería el segundo paso, los libros que han sido publicados reflejan nuestra realidad y lo que buscamos como población” (Entrevista realizada a un poblador del Valle del Tambo con iniciales N.S.C.).

“Como investigador debo indicar que sí RED MUQUI ha apoyado mucho a los pobladores, yo tenía información que socializar y en gran medida ellos eran los intermediarios. En conjunto hemos planificado la redacción, trabajo de campos de los informes; como pueden observar, los libros tienen el apoyo de la comunidad, y sobre todo también aborda las perspectivas de todas las partes” (Entrevista realizada al ingeniero de iniciales J.A.).

Como se evidencia, ha existido trabajo colaborativo por parte de estas organizaciones hacia la población involucrada en el conflicto Tía María, su participación ha empoderado a estos actores sociales en temas de conocimientos y de visibilización. Este trabajo se ha visto reflejado en la documentación de talleres, libros, artículos y videos sobre la problemática.

Por otro lado, se ha evidenciado el importante rol que han cumplido los medios de comunicación locales - específicamente la radio- en la zona en la dinámica del conflicto y sobre todo en la influencia de la postura de los pobladores. En el Perú, los medios de comunicación son un factor relevante para la visibilización de ciertas narrativas, actores y para la formación de la opinión pública en base a información o desinformación.

En el caso Tía María, como hallazgo, se considera que los medios de comunicación locales, en especial las radios, han contribuido a la postura de los agricultores y dirigentes, sobre todo en el mantenimiento de esta en el tiempo. Aquello pues, en declaraciones de los agricultores y dirigentes, si bien todos

compartían una consigna, al ser diferentes frentes o asociaciones, con responsabilidades distintas en torno a su trabajo, era complicado tener información de manera actual sobre los acontecimientos o acciones que se realizan en las diferentes partes del Valle del Tambo. Para ellos esto les permitió saber qué acciones realizan sus compañeros, en que quedaban las reuniones, cómo se desarrollaban las reglas, conflictos.

Se deduce que estos medios locales sí influyeron, para los pobladores, de manera positiva, pues les permitió una mejor articulación y organización para mantener su postura en contra. Sin embargo, por otro lado, estas noticias, el cómo se reproducen a la población, solo avivó los ánimos de la población.



Conclusiones

El conflicto socioambiental de Tía María representa un asunto controversial para el país respecto a las medidas y permisos en torno a su ejecución. Hasta el momento todo parece estar a favor de los agricultores y pobladores del Valle del Tambo que se oponen a la ejecución de dicho proyecto minero. Sin embargo, la paralización de la ejecución de las actividades extractivas mineras no les brinda la seguridad de la cancelación del proyecto Tía María. Inversionistas y representantes de la empresa Southern Perú continúan en la búsqueda de la bandera verde para empezar dichas actividades. En ese sentido, el conflicto Tía María mantiene en vilo al país tanto por las repercusiones económicas, políticas y sociales que se podrían generar por cualquier movimiento de los actores involucrados, específicamente de las decisiones del Estado Peruano. Por tal motivo, el objetivo de la presente tesis es explicar la postura en contra de los agricultores y dirigentes sociales del Valle del Tambo basadas en la identificación social, agrícola, que contribuye a una movilización de recursos sociales que les permite posicionar sus demandas y cumplir sus objetivos de la defensa del valle.

El análisis a la evolución del conflicto Tía María, las características socioeconómicas y políticas de la zona y las entrevistas realizadas a los actores involucrados evidencian que las acciones en contra por parte de los pobladores y dirigentes sociales se encuentran ligadas a la identificación social agrícola de la zona. Con énfasis en la teoría de la identidad social y en conjunto con la teoría de los movimientos sociales, la investigación demuestra que para dichos actores la agricultura es más que una actividad que les brinda un medio de subsistencia. Para ellos las tierras que cultivan son una conexión entre su pasado, presente y futuro, que no solo gira en torno a ellos, sino también alrededor de sus familias y las personas que habitan el valle. En ese sentido, la identificación social agrícola existente en el Valle del Tambo se enmarca en una lógica de arraigo económico y social.

Por un lado, la historia en común de la llegada o posicionamiento de los agricultores constituye la historia como tal del Valle del Tambo; según lo evidenciado, las familias migraron de otros lugares del país en busca de oportunidades de trabajo, al llegar al valle encontraron una zona que contaba con

los recursos bastos tales como tierras; en ese sentido, vieron a dicho lugar como uno que les iba a proveer tierras para un hogar y sustento económico. Por otro lado, y en línea con lo anteriormente mencionado, se encuentra la característica económica que percibieron de la zona. Tanto los agricultores como los dirigentes sociales señalan que el valle del Tambo les proporcionó a sus abuelos la oportunidad de poder crecer y sostenerse económicamente. Asimismo, que el Valle del Tambo les ha brindado dichas posibilidades de generación en generación; a ellos les ha permitido construir sus casas, educar a sus hijos, poder ir al hospital, entre otras cosas.

Sumado a ello, la tipología de los agricultores brinda hallazgos asociados a la identificación agrícola, pues permite comprender cómo desde las diferencias en torno al uso de la tierra y poder adquisitivo es que convergen sus decisiones para poder defender el valle del Tambo. Como se mencionó en los capítulos anteriormente, existen grupos de agricultores, los propietarios, arrendatarios y los mixtos. En base a sus recursos es que van a ejercer ciertas funciones, muchos de ellos de manera mixta. Por un lado, los arrendatarios jornaleros, al ser el grupo que tiene gran parte y presencia en la producción agrícola del valle, gozan de capital económico como mano de obra y trabajo colectivo en familia que les permite ahorrar costos. Para ellos la renta de la tierra genera cierta interacción y por ende dependencia no solo a la tierra, sino a las instituciones tales como la familia y las JUR. Con estas últimas es donde se afianzan las relaciones con otros agricultores y se comparten acciones en pro de la agricultura. Lo mismo sucede con los agricultores propietarios que centran sus ingresos con el alquiler de sus predios; algunos de estos se han visto condicionados por deudas con el estado debido a campañas agrícolas. No obstante, el alquiler les ha permitido tener sostenibilidad económica, al igual que los demás tipos de agricultores, y es ahí donde se ve el arraigo. Ellos no optan por vender sus tierras, consideran que son la herencia que les dejarán a sus hijos y estos a los suyos.

De esta manera, hay un tejido agrícola fuerte que conlleva a una resistencia que, si bien se basa en la defensa del medio ambiente, se debe más bien por la defensa del recuerdo de la tierra que les brinda sostén económico. Asimismo, un hallazgo es que los diferentes tipos de agricultores se encuentran en contra del

proyecto, pese a tener características de nivel socioeconómico diferentes.

Es así como se revela que la tierra representa para ellos una conexión consus antepasados – esto por las enseñanzas, la historia familiar de la llegada a la zona- y soporte económico que se traduce en una dependencia económica y emocional. Desde una explicación en base a la identidad social, los agricultores y dirigentes sociales del Valle del Tambo se han caracterizado propiamente y han caracterizado a los suyos como parte de un grupo que comparte sentimientos y percepciones sobre lo que significa el valle en sus vidas. Así pues, los individuos cuando se sienten pertenecientes a un determinado grupo generan vínculos en base a emociones. En ese sentido, se explica los grados y niveles de participación de los agricultores en las movilizaciones y cómo los lleva a arriesgar su vida para poder defender una consigna compartida socialmente por ellos. La presente tesis evidencia que con dicha identificación hay una resistencia a las actividades mineras sostenidas en los temores de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, tierras, aire, y afectación a la salud de los pobladores del lugar, lo cual desencadena acciones que consolidan la incidencia del tejido social agrícola. En ese marco se encuentran las acciones de acompañamiento en las diferentes protestas, movilizaciones, paros, huelgas, entre otros. Así como el apoyo y respaldo a los dirigentes sociales ante las denuncias realizadas por la fiscalía.

Con relación a la existente identificación social agrícola en la zona del Valle del Tambo, se afirma que esto generó en los pobladores y dirigentes sociales la búsqueda por la movilización de recursos que les permitió involucrarse en las diferentes acciones de incidencia en hechos y situaciones claves de la evolución del conflicto Tía María. Se demuestra que dichos actores movilizaron recursos de organización y tiempo, muchos de ellos pospusieron actividades ligadas al trabajo agrícola rutinario que hacían para poder asistir a las reuniones, marchas o protestas, invirtiendo así tiempo y dedicación. Asimismo, se evidencia que la organización posibilitó el nacimiento de ciertos liderazgos flexibles, ciertos agricultores destacaron por su forma de convocar, de participar e involucrarse con la consigna, lo cual revela la gestación de diálogo y representación para interponer su demanda principal. Complementando ello, se demuestra la articulación y movilización para lograr hacer visible su consigna; claro ejemplo de ello, las manifestaciones y paros

indefinidos en la carretera Panamericana. De la misma manera, hay una gestación de oportunidades por parte de dichos actores para incidir políticamente; tal es el caso, del envío de cartas, documentos a autoridades e instituciones para la conformación de grupos especializados, comisiones o para la presencia de representantes en las reuniones en la capital. No obstante, respecto a la movilización de recursos económicos, en la presente tesis se concluye la no injerencia de dinero por parte de actores externos. Según lo recopilado, los materiales para banderolas, gigantografías, pancartas, alimentos y movilización recayeron en el dinero que como grupo aportaron o que salió de los bolsillos de los manifestantes. Si bien se señala que hubo injerencia de dinero de las municipalidades, autoridades e incluso de la misma empresa - en acciones de ataque- en base a la triangulación realizada, se evidencia que aquello no tiene sustento en evidencia empírica.

A partir de ello, se demuestra que lo que se generó en el movimiento en contra del proyecto Tía María fue una especie de autonomía colectiva que les permitió colocar una barrera para que no haya influencia de actores externos o de intereses ajenos a la consigna de no aceptación al proyecto minero. Así pues, se refleja que, con sentimientos de identificación con el Valle del Tambo, con percepciones de no querer impactos negativos en las tierras y la gestación de ciertos recursos tanto humanos y económicos, los agricultores y dirigentes sociales lograron que se paralice en el proyecto minero a la actualidad.

Sin embargo, cabe resaltar que la explicación de los conflictos socioambientales, en específico las posturas de los actores involucrados, pueden converger en una serie de factores explicativos; así pues, como hallazgo y complemento de la explicación a la postura en contra, se evidencia que en la identificación social agrícola por parte de los agricultores y dirigentes sociales del Valle del Tambo hay la influencia de una racionalidad de intereses individuales. La tesis concluye que dichos actores han actuado por una racionalidad de intereses centrados en aspectos mayoritariamente económicos. Esto pues, en base a los informes y las propias manifestaciones de los entrevistados, se revela que la agricultura como actividad económica, debido a la producción alta, con enfoque en la exportación tanto regional como nacional, genera altos ingresos a la población, lo

cual explica el comportamiento social ligado a aspectos económicos del individuo; en otras palabras, hay interés por la defensa del valle por la disposición de medios que les permite maximizar su utilidad económica.

Con relación a los actores involucrados, la literatura se ha centrado principalmente en tres: comunidad, empresa y Estado, en este último abordando el nivel regional o local. Sin embargo, no se ha enfocado en demasía, en el análisis de la participación de otros actores sociales, tales como el papel de los dirigentes sociales, las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación local, sobre todo en la influencia de estos en las decisiones, acciones de los pobladores del valle del Tambo. A partir de lo investigado, se confirma que hay actores primarios, secundarios y terciarios, los cuales han influido en torno a sus propias características. En relación con los dirigentes sociales, se halla que estos cumplen un papel fundamental en la movilización de recursos. Como se ha mencionado anteriormente, en medio de la evolución del conflicto y la organización de los actores en contra, surgieron una serie de liderazgos flexibles que asumieron cargos de representación en los frentes de defensa y las JUR. Las figuras representativas en la dinámica del conflicto asumieron directa e indirectamente la responsabilidad de ciertas acciones cometidas en las manifestaciones, protestas. Para los agricultores, sus dirigentes sociales, en las primeras etapas del conflicto, mostraron vocación, humildad, valentía, lo cual lo conllevó a elegirlos y respaldarlos ante las diferentes acusaciones que se presentaban en su contra.

En línea con lo anteriormente mencionado, es que se evidencia que, si bien el papel fue relevante tanto en representación, movilización y sobre todo articulación del movimiento social agrícola del Valle del Tambo, este tuvo un traspié con las acusaciones por coimas realizadas a los representantes de la empresa para paralizar las acciones en contra de la misma. Para los agricultores entrevistados, esto evidenció un vacío que no habían abordado en sus reuniones y organizaciones: la deslealtad o traición a los intereses comunes. No obstante, aquello no se reflejó con los demás dirigentes sociales, el apoyo a ellos continuó y se vio respaldado posteriormente en muchas candidaturas a la alcaldía. Por la parte de los dirigentes sociales, la consideración de defensa al Valle del Tambo radica en su identificación -conexión ancestral - pero sumado a ello, la lealtad a los agricultores, pobladores y

familias que habían depositado su confianza en sus labores y acciones. En ese sentido, se evidencia que el papel de los dirigentes sociales se abocó a aportar sentido, motivación y dinamismo al tejido social. Asimismo, el liderazgo fue comunicativo, existiendo un diálogo bidireccional con constante información de las actividades a las cuales ellos asistían como representantes de la población.

Como se mencionó párrafos anteriores, no hubo injerencia de recursos económicos por parte de actores externos; sin embargo, se constata que sí hubo participación por parte de organizaciones no gubernamentales en la movilización de recursos intelectuales. En otras palabras, se evidencia aportes, especialmente por parte de la RED MUQUI a la población. Estos aportes se basaron en la dotación y

divulgación de información y tecnicidades sobre el proyecto. Así como, apoyo y orientación legal en torno a los asuntos y acusaciones a los dirigentes y agricultores. De la misma manera, apoyo en la producción de conocimientos sobre características de la zona, problemáticas, producción agrícola, aspectos económicos y sociales. Según lo analizado, todo con el objetivo de apoyar la causa común de los pobladores del Valle del Tambo sin intereses maliciosos o en beneficio particular de la organización, si no con énfasis en que la población tanto de Arequipa como del país pueda conocer sobre este proyecto e impactos negativos.

Otro de los hallazgos de esta tesis gira en torno al papel de los medios de comunicación, se evidencia un aporte característico por parte de las radios locales de Arequipa. Aquello pues, estas confluyeron como medio de divulgación respecto a las noticias de las manifestaciones, huelgas y de cómo estas se desarrollaban. Ello generó en la población no solo una dotación de información en tiempo real, sino que permitió que los pobladores, tales como mujeres, niños, ancianos y personas que no se encontraban involucrados en dichas acciones, tuvieran información que les competía. Asimismo, se demuestra que el papel de los medios de comunicación se encuentra ligado a la movilización de recursos que consolidó el tejido social agrícola del valle del Tambo.

Por otra parte, se evidencia que la explicación de la postura en contra de los dirigentes sociales y agricultores basadas en la identificación social y por ende una

búsqueda de movilización de recursos también se ve influenciada por la política de la empresa, la cual aporta sentido a la lógica de racionalidad de intereses y por ende la defensa del valle del Tambo. De los reportes de la Defensoría del Pueblo se constata que la confrontación entre las partes involucradas- población y empresa minera- se ha mantenido y manifestado por medio de sus acciones. La consigna central de los pobladores es que no se ejecute ni a corto ni a largo plazo el proyecto Tía María. Mientras que, la consigna de la empresa es lograr que la población acepte el proyecto. Uno de estos hallazgos apunta a señalar que los antecedentes de las empresas con otras poblaciones y la respuesta eficiente ante problemáticas, demandas y acusaciones de su accionar influye en el mantenimiento de la postura de los agricultores y dirigentes sociales. Asimismo, las acciones emprendidas por la empresa en la dinámica como política reafirmaron los miedos, temores y desconfianza por dichos antecedentes. Se demuestra que la empresa no ha realizado acciones que contradigan rumores y/o evidencien las intenciones que propagan en medios de comunicación, sus informes o notas de prensa, es más, todo se ha demostrado desafiante y distante con la población que dicen buscar ayudar con el proyecto.

Esta investigación demuestra que la posición de los agricultores y dirigentes sociales en el Valle del Tambo es explicada bajo la lógica de una identificación social agrícola basada en la dependencia tanto emocional como económica a las tierras de dicho lugar. Aquello es lo que conlleva a una posición contraria que busca la defensa del valle por los impactos que se generarían a raíz del proyecto minero. A partir de ello, la postura se afianza con la búsqueda de la movilización de recursos humanos que les brinda una autonomía colectiva que sirve de barrera a intereses ajenos. Complementando ello, se demuestra que la lógica también se ve influenciada por la racionalidad de intereses individuales de los agricultores - desde sus propias características- que los posiciona con ciertas inclinaciones a favor de su conveniencia. De ello, se evidencian como hallazgos la participación de actores tales como dirigentes, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación que desde sus cualidades y particularidades intervienen en la influencia y respaldo de la consigna en contra del proyecto minero Tía María. Y sumado a ello, como factor característico en la influencia de dicho interés que consolida o contribuye en el mantenimiento de la postura en contra es la política

de la empresa, que alrededor de toda la dinámica de dicho conflicto se caracterizó por ser distante, por no evaluar errores, por no ser prestos al diálogo ni generar espacios de intercambio y negociación con los demás involucrados.

En base a la evaluación de errores, se constata que la orientación de este conflicto socioambiental hubiera podido ser distinta si tanto la empresa como el Estado peruano se hubieran enfocado en acciones pertinentes y vinculadas a las demandas y necesidades de la población. Las acciones de estos actores han estado enmarcadas en mantener su posición imperante de los beneficios del proyecto, pero no se han enfocado en resolver aspectos vinculados a los antecedentes, historial y prioridades de la comunidad, lo cual ha generado el actual resultado del conflicto y el mantenimiento en vilo sobre dicha problemática.

Durante la recopilación de información y el análisis de esta tesis, puntos centrales como la cronología del conflicto, los actores involucrados, las narrativas en cuestión han brindado ciertos hallazgos diferentes a los encontrados en la literatura. Asimismo, han surgido interrogantes y cuestiones en la comprensión de la postura de dichos dirigentes y agricultores que se deben considerar importantes de evaluar en posteriores investigaciones para brindar respuestas completas sobre el conflicto Tía María. La actuación de un individuo es compleja, entender sus formas de actuar y de interrelacionarse puede devenir de diferentes factores, causas, entre otros.

Referencias bibliográficas

Abitbol, P. y Botero, F. (2006). Teoría de la elección racional: estructura conceptual y evolución reciente. *Colombia International*. 62, 132-145.

Acevedo, A., Burneo, M., Choquehuanca, Z., Palomino, D., Santos, A., Torres, J. y Vilca, P. (2011). "Conflictos mineros por usos de territorio". Estado y la gestión del conflicto, 2006-2011. Lima.

Alvarado, L. (2014). Causas, impactos y lecciones aprendidas sobre los conflictos socio-ambientales: El caso de la minería ilegal e informal en Madre de Dios. CIES.

Aquino, R. (s/f). Tía María: Análisis del conflicto social generado por el proyecto minero. Universidad Católica San Pablo. *Recuperado de* : <https://ucsp.edu.pe/tia-maria-analisis-del-conflicto-social-generado-por-el-proyecto-minero/>

Aragón, J. y Guibert, Y. (2016). Metodología y diseños de investigación en Política Comparada. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Arce, M

(2010). "Algunos apuntes sobre los movimientos y protestas sociales en el Perú". La iniciación de la política: El Perú en perspectiva comparada. Lima: Pontificia Universidad Católica, Fondo Editorial. 273-294.

(2015). La extracción de recursos naturales y la protesta social en el Perú. Lima, Fondo Editorial de la PUCP.

Arce, M. y Bellinger, P. (2007). Low-Intensity Democracy Revisited: The Effects of Economic Liberalization on Political Activity in Latin America. *World Politics*, 60(1), 97-121.

Arellano, J.

(2008). A Thoroughly Modern Resource Curse? The New Natural Resource Policy Agenda and the Mining Revival in Peru. Institute of Development Studies.

(2011). ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. IEP-PUCP-Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Lima.

Arenas, M. (2013). Emporio agrícola. *La Punta*. Recuperado de <http://www.revistalapunta.com/emporio-agricola/>

Arenas, M. (2018). Historia general del Valle del Tambo. Arequipa. Perú. Biblioteca Nacional del Perú. Recuperado de: <https://biblioteca.munimollendo.gob.pe/wp-content/uploads/2021/03/HSITORIA-GEN-ERAL-DEL-VALLE-DE-TAMBO.pdf>

Ashmore, R., Jussim, L., y Wilder, D. (2001). Social Identity, Intergroup Conflict and Conflict Resolution. Rutgers series on self and social identity. 3. New York: Oxford University Press.

Aste, J., De Echave, J. y Glave, T.

(2004). Resolviendo conflictos entre el Estado, las empresas mineras, las comunidades campesinas y los organismos de la sociedad civil: procesos de concertación en zonas mineras en el Perú. Lima: GRADE, ECO.

(2005). Procesos de concertación en zonas mineras en Perú. Resolviendo conflictos entre el estado, las empresas mineras, las comunidades campesinas y los organismos de la sociedad civil. Lima, Cooperación.

Aste, J. (2020). Riesgos y Potencialidades del Valle del Tambo en tiempos de la covid 19 y reactivación económica. RED MUQUI. Recuperado de : <https://muqui.org/wp-content/uploads/2020/09/Tambo-Muqui-22-7.pdf>

Augusto, M., Dargent, E. y Rousseau, S. (2017). Más allá de la capacidad estatal: sociedad civil e implementación de políticas a nivel subnacional en Cusco y San Martín (Perú). *Colombia Internacional*, 90, 99-125.

Azpur, J. y Baca, E. (s/f). Extractivismo y transiciones hacia el postextractivismo en el Perú.

Bances, P. (2020). Gestión de la comunicación económica en el conflicto social minero. Lima: Universidad Ricardo Palma. Recuperado de: <https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/3370/62.%20Bances%20Patricia%2c%202019%20II.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Banks, M. y Mitchell, C. (1994). Resolution of Conflict. A Handbook on the Analytical Problem Solving Approach. Virginia: George Mason University.

Barrantes, R. et al. (2005). Te quiero pero no. Minería, desarrollo y poblaciones locales. Lima: IEP

Bastidas, M. (2009). "Minería, movimientos y mujeres: impactos y respuestas – Los casos de San Mateo de Huanchor, Choropampa y Callao". Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización. Lima: Facultad de Ciencias Sociales. Unidad de Posgrado UNMSM.

Bebbington, A.

(2007). Elementos para una ecología política de los movimientos sociales y el desarrollo territorial en zonas mineras. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Lima: IEP - CEPES.

(2009). Actores y ambientalistas: conflictos socioambientales en Perú. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* (35).

Bebbington, A. y Williams, M. (2008). Water and mining conflicts in Peru. *Mountain Research and Development* 28(3), 190-195.

Becker, G (1976). Enfoque económico del comportamiento humano. Información comercial española. 557.

Bedoya, C. (s/f). Los conflictos socioambientales en el Perú y sus múltiples formas de entenderlos... y actuar en consecuencia. *Revista interdisciplinaria de mediación y resolución de conflictos*. Recuperado de

https://www.prodialogo.org.pe/sites/default/files/actualidad/files/046_001_esp.pdf

Bedoya, C. y Torres, V. (2015). Tía María: Minería y conflicto por el agua, Servindi.

Berrío, A. (2006). La perspectiva de los nuevos movimientos sociales en las obras de Sydney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. *Estudios políticos*. 29. 218-236. Medellín : Instituto de Estudios Políticos. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/164/16429057009.pdf>

Block, F. (2012). Introducción a La Gran Transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, de Karl Polanyi, 21-41.

Bravo, F. (2009). El desempeño del estado y la conflictividad social. *Coyuntura: Análisis Económico y Social de Actualidad*, 5(24), 10-13.

Bridge, G. (2004). Contested Terrain: Mining and the Environment. *Annual Review of Environmental Resources*, 29, 205-259.

Bringel, B. (2011). A busca de uma nova agenda de pesquisa sobre os movimentos sociais e o confronto político: diálogos com Sidney Tarrow. *Política y sociedade*. 10(18). 51-73.

Brown, G. y Stewart, F. (2015). Economic and political causes of conflict: An overview and some policy implications. *Crise Working Paper*. 81. Recuperado de <https://www.semanticscholar.org/paper/Economic-and-Political-Causes-of-Conflict-%3A-An-and-Brown-Stewart/f0830e83ec84a0470ecd8dd4d52040e5dc20adf3>

Brown, R.(1995). *Prejudice in Social Psychology*. Oxford: Blackwell.

Brown, R., y Capozza, D. (2006). *Social Identity. Motivational, emotional and cultural influences*. Nueva York: Psychology Press.

Brunet, I. y Pizzi, A. (2010). La Acción Colectiva desde la Teoría de la Movilización de Recursos. *Sociedad y utopía, Revista de Ciencias Sociales*. 36. 27-38.

Cáceres, Y. (2012). "La gestión de conflictos socioambientales en el ámbito de la actividad minera arequipeña: Estudio de caso proyecto minero Tía María". *Revista de Administración de Negocios*. Arequipa: Universidad Católica San Pablo.

Calderón, F. (2012). Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina. *Revista CEPAL*. 107. 7-30. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de <https://www.cepal.org/es/publicaciones/11546-diez-tesis-conflicto-social-america-latina>

Callata, Y. y Yupanqui, C. (2017). Las mujeres como actor social en el conflicto socio ambiental Tía María. Valle del Tambo 2015-2016. *Tesis para optar el título profesional de licenciatura en Sociología*. Arequipa : UNSA. Recuperado de : <http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5174/SOcaquyf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Camacho, A. et al. (2015). Impactos de la actividad minero-energética en el desarrollo socio-económico y en la diversificación productiva del Perú. *CIES*.

Camino, E. (2015). El agua y el oro. Estudio geopolítico de los conflictos mineros de Conga y Tía María. Arequipa: Texao Editores.

Campos, M., Risco, L., Dyer, Espinoza, K., y Gamboa, L. (2005). Minería : ¿fuente de esperanza o víctima de sí misma? : una aproximación a la licencia social para operar y los conflictos sociales mineros. *IUS ET VERITAS*, 15(31), 334-360.

Canales, C. (2019), Una mirada crítica de la Teoría de la Elección Racional (TER): La imagen de Ser Humano implícita - la Des- historización de la actividad política y su carácter colonizador. *LIMINALES*. Escritos sobre psicología y sociedad. Universidad Central de Chile. Recuperado de <https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/liminales/article/view/373/418>

Candón, J. (2010). Los movimientos sociales ayer y hoy: Una aproximación teórica. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/26973/CANDON_MENA_Los_movimientos_sociales_ayer_y_hoy_Una_aproximacion_teorica_II_Curso_MMSS_UMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cantó, O y Moral, F. (2005). El sí mismo de la teoría de la identidad social. *Revista Redalyc*. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=271020873006>

Cantor, M., Pérez, E. y Carrillo, S. (2018). Redes sociales e identidad social. *Revista de Investigación*. 6(1). Universidad Simón Bolívar. Recuperado de <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/1706>

Casas, C. (2017). Conflictos mineros y acuerdos comunitarios: Identificación de mecanismos de retroalimentación. Universidad del Pacífico.

Castellares, R. y Fouché, M. (2017). Determinantes de los conflictos sociales en zonas de producción minera. Serie de Documento de Trabajo. 5. Lima: Banco Central de Reserva del Perú. Recuperado de <http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2017/documento-de-trabajo-05-2017.pdf>

Castillo, M., Gallardo, M. y Chávez, M. (2011). Valle del Tambo - Islay : Territorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto. RED MUQUI.

Recuperado de https://muqui.org/wp-content/uploads/2019/11/Libro_Valle_de_Tambo-Islay.pdf

Castillo, M. (2018). Los criminalizan por liderar la oposición a Tía María en el Valle de Tambo. *CooperAcción*. Recuperado de [:https://cooperacion.org.pe/los-criminalizan-por-liderar-la-oposicion-a-tia-maria-en-el-valle-de-tambo/](https://cooperacion.org.pe/los-criminalizan-por-liderar-la-oposicion-a-tia-maria-en-el-valle-de-tambo/)

Castillo, K. (2015). Análisis de caso:Conflicto en torno a la instalación del proyecto minero Tía María, en el departamento de Arequipa, Perú. *ProDiálogo*. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Recuperado de [:https://www.academia.edu/23008250/An%C3%A1lisis_de_caso_Conflicto_en_torno_a_la_instalaci%C3%B3n_del_proyecto_minero_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa_en_el_departamento_de_Arequipa_Per%C3%BA](https://www.academia.edu/23008250/An%C3%A1lisis_de_caso_Conflicto_en_torno_a_la_instalaci%C3%B3n_del_proyecto_minero_T%C3%ADa_Mar%C3%ADa_en_el_departamento_de_Arequipa_Per%C3%BA)

Castro, S. (2013). Pobreza, minería y conflictos socioambientales en el Perú. Lima: *INTE-PUCP*. Recuperado de: <http://inte.pucp.edu.pe/publicacion/pobreza-mineria-y-conflictos-socioambientales-en-el-peru/>

Castro, E. (2021). Intervención de actores sociales y conflicto socioambientales de proyecto hidrocarburos en Pichanaki-2015. *Tesis para optar el grado de Licenciatura*. Huancayo : Universidad Nacional del Centro del Perú. Recuperado de: [:https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/7472/T010_20726_033_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/7472/T010_20726_033_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Castro, A. y Salazar, M. (2002). La bomba que hizo explotar Tía María. *La República*.

CIES (2018). La minería peruana y los objetivos de desarrollo sostenible. *Cooperación alemana*. Recuperado de [:https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2019/02/La-mineria-peruana-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf](https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2019/02/La-mineria-peruana-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf)

Cisneros, C. (2015). De Bagua a Tía María. *La República*.

CooperAcción. (2020). Los argumentos técnicos de los agricultores del Valle del Tambo frente al caso Tía María. Recuperado de [:https://cooperacion.org.pe/los-argumentos-tecnicos-de-los-agricultores-del-valle-del-tambo-frente-al-caso-tia-maria/](https://cooperacion.org.pe/los-argumentos-tecnicos-de-los-agricultores-del-valle-del-tambo-frente-al-caso-tia-maria/)

Condori, Z. (2018). Radiografía del valle del Tambo. Monitoreo de la contaminación

en la zona del proyecto Tía María. *El Comercio*. Recuperado de [:https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/03/elcomercio_2018-03-19_p10.pdf](https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2018/03/elcomercio_2018-03-19_p10.pdf)

Congreso de la República. (2007). Programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para gobiernos regionales y locales: análisis de conflictos sociales. Lima: USAID PERÚ -Pro Descentralización.

Cuadros, J. (2010). Impacto de la minería en la vida de hombres y mujeres en el Sur Andino. Una mirada desde el género y la interculturalidad. Los casos Las Bambas y Tintaya. Lima: CooperAcción.

Cuya, C. et al (2018). Análisis de los conflictos sociales que tuvieron como hecho generador el incumplimiento de las obligaciones sociales comprometidas por las empresas que desarrollan actividades de gran y mediana minería con las comunidades y poblaciones de su entorno: Propuesta jurídica alternativa de solución. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima.

Damonte, G.

(2012). Dinámicas rentistas: transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería. *Desarrollo rural y recursos naturales*, 95-122. Lima: GRADE.

(2016). Minería, Estado y comunidades: cambios institucionales en el último ciclo de expansión extractiva en el Perú. Un balance de la investigación. *GRADE*.

Damonte, G. y Castillo. (2010). Presentación: una mirada antropológica a las industrias extractivas en los Andes. *Anthropologica*, (28), 5-19. Lima: PUCP.

Davies, J. (1962). Towards a Theory of a Revolution en *The American Sociological Review*

Della Porta, D, y Diani, M. (s/f.). *The Oxford Handbook of Social Movements*. Oxford: Oxford University Press.

De Echave, J. (2018). Diez años de minería en el Perú 2008-2017. *Cooperación*.

De Echave, J., Diez, A., Huber, L., Revesz, B., Lanata, X. y Tanaka, M. (2009). Minería y conflicto social. *Minería y Sociedad* (5). Lima: CIES-CBC-CIPCA-IEP.

De Echave, J., Hoetmer, R. y Palacios, M. (2009). Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización. *Cooperación*. Lima

Defensoría del Pueblo

(2012). "Violencia en los Conflictos Sociales". Serie de Informes defensoriales N.º 156. Lima.

(2014). Reporte de conflictos sociales N.º 144. Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad. Lima.

(2017). Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.º 176. Adjuntía para la prevención

de conflictos sociales y la gobernabilidad. Lima.

(2019). "Los costos del conflicto social: Una aproximación metodológica a las dimensiones económicas, sociales e institucionales del conflicto social en el Perú". Lima.

(2021). Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.º 211 – septiembre 2021. Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad. Lima

Del Pozo, C. et al. (2012): ¿Minería y bienestar en el Perú?: evaluación de impacto, redistribución del canon minero, elementos para el debate. *CIES*.

Paredes, M. y De la Puente, L. (2014). Protestas y negociaciones socioambientales. El caso de las industrias extractivas. Agenda de investigación en temas socioambientales en el Perú: una aproximación desde las ciencias sociales, 75-106. Lima: PUCP

Diaz, J. et al. (2016). Historia ambiental del Perú. Siglos XVIII y XIX. Lima: Ministerio del Ambiente

Diani, M.

(1992). "The Concept of Social Movement". *Sociological Review*. 40(1).1-25.

(2015). Revisando el concepto de movimiento social. Encrucijadas. *Revista Crítica de Ciencias Sociales*. 9.

Etchezahar, E., Ungarretti, J. y Brussino, S. (2018). La construcción de la identidad social y las relaciones intergrupales. Representaciones sociales, prejuicio y relaciones con los otros: La construcción del conocimiento social y moral. UNIPE Editorial Universitaria. Recuperado de: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/1102>

Elster, J.

(1989). Tuercas y tornillos. Barcelona: Gedisa.

Ferreira, C y Tíncopa, F. (2019). Análisis estratégico del conflicto Tía María. Lima: Biblioteca Nacional del Perú.

Flores, C. (2019). Tía María otra vez en el ojo de la tormenta. *Cooperación*, 240, 2-30.

Folchi, M. (2001). "Conflictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas". *Ecología política*, (22), 79-100.

Franceschi, H. (2006). Conflictos socio ambientales intercapesinos por los recursos naturales. *Revista de Ciencias Sociales*. 1. 37-36. Recuperado de : <https://www.redalyc.org/pdf/153/15311204.pdf>

Gaertner, S., Dovidio, J., Anastasio, P., Bachman, B., y Rust, M. (1993). The common ingroup identity model: Recategorization and the reduction.

Goertz, G. y Mahoney, J. (2012). A Tale of Two Cultures. Qualitative and Quantitative Research in Social Sciences. Princeton: Princeton University Press.

Gouley, C. (2005). Conflictos mineros, interculturalidad y políticas públicas: el caso de Las Bambas, provincias de Cotabambas y Grau, departamento de Apurímac. Lima: CBC-CIES.

Goldthorpe, J. (1977). The integration of sociological research and theory grounds for optimism at the end of the twentieth century. *Rationality and Society*. 9(4).407.

Gohn, M. (1997). *Teorías dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos*. San Pablo: Loyola.

Gonzales, D. (2017). Planteamiento de estrategias para obtener la viabilidad social sostenible del proyecto cuprífero Tía María. *Tesis para optar el grado de Magíster en Regulación, Gestión y Economía Minera*. Lima: PUCP. Recuperado de: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/9146/GONZALE S_VILCA_DARIL_LUIS_PLANTEAMIENTO.pdf?sequence=1

Geertz, C. (1963). *Agriculture Involution. The process of ecological change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.

Gerring, J. y Cojocar, L. (2015). "Case Selection: A Diversity of Methods and Criteria". Draft.

Grompone, R. y Tanaka, M. (2009). Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social. Las protestas sociales en el Perú actual. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

Gurr, T. (1970). *Why Men Rebel?*. Princeton: Princeton University Press

Gutiérrez, P. (2013). Nuestro valle siempre se desarrolló con la agricultura. Entrevista de Paul Maquet. Hoetmer y otros (editores). *Minería y movimientos sociales en el Perú*. 283-291. Lima: PDTG, CooperAcción, ACSUR, Entre Pueblos

Herz, C. (2013). Conflictos socioambientales en los países andinos. Estado del arte de los conflictos socioambientales en Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Alemania: GIZ.

Hogg, M. (1992). *The social psychology of group cohesiveness: From attraction to social identity*. New York: Harvester Wheatsheaf and New York University Press

Huamani, G., Macassi, S., Alegría, J. y Rojas, T. (2012) *Hacia una mejor gestión de los conflictos socio-ambientales en el Perú*. Lima: CIES, ACDI – Canadá.

Ibarra, L. y Morales, C. (2016). Actores sociales en el conflicto minero Tía María en el valle de Tambo – Arequipa 2015. Tesis para optar el grado de licenciatura en sociología. Arequipa : UNSA. Recuperado de <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3647>

Ibarguen, C. (18 de septiembre de 2019). Las seis claves del marketing de reputación para Southern Perú en Tía María. Blog Taipá. Recuperado

de

:<https://cafetaipa.com/2019/09/seis-claves-de-reputacion-para-tia-maria-y-el-sector-minero-perumin-arequipa/>

Irigoyen, M. (2014). Gestión sostenible de los recursos naturales e industrias extractivas en la región Piura. CIES.

Jenkins, J. (1994). La Teoría de la movilización de recursos. Zona abierta 69.

Kuramoto, J. y Glave, M. (2007). La minería peruana: lo que sabemos y lo que aún nos falta saber. Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima : GRADE. Recuperado

de

:<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/grade/20100513021350/InvPolitDesarr-4.pdf>

Laraña, E. y Gusfield, J. (1994). Los nuevos movimientos sociales. De la ideología ala identidad CIS, Madrid,1994. *Revista internacional de Sociología*. Recuperado de:<https://www.proquest.com/openview/3abe3ebdfc5fb1661a07ed16d4f3e7d9/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817790>

Leff, E. (2003). La ecología política en América Latina: un campo en construcción. *Sociedade e Estado*, Brasília, 18 (12), 17-40.

Leyva, A. (2019). Tía María: Los conflictos no se resuelven por la fuerza. *CooperAcción*. Recuperado de : <https://cooperacion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/>

Li, F. (2009). Documenting accountability: environmental impact assessment in a Peruvian mining project. *Political and Legal Anthropology Review*, 32(2), 218-236.

Lira, A., y Malpartida, E. (12 de abril del 2015). Tía María: Los factores detrás del conflicto.

El Comercio. Recuperado de

:<https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-factores-detras-conflicto-informe-351505-noticia/?ref=ecr>

Lust, J. y Denegri, O. (2019). Perú: La continuidad del modelo extractivista de desarrollo en el Perú: una aproximación de sus fundamentos económicos. *Global Business Administration Journal*, 3(2),46-59.

Martínez, G. (2017). Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, Perú. *Tesis para obtener el título de maestría en Desarrollo Territorial Rural*. Quito: FLACSO Ecuador

Martínez-Alier, J. (2004). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revibec: revista iberoamericana de economía ecológica*, 1, 21-30.

Macassi, S. (2016). Roles contributivos vs. roles partisanos en la cobertura de

conflictos socioambientales. Un estudio comparado. UNAM.

Mamani, J. y Nuñez, J. (2016). Análisis del tratamiento periodístico del diario “sinfronteras” a propósito del conflicto social ocasionado por el proyecto minero Tía María del 1 al 30 de abril del 2015. *Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias de la comunicación*. Arequipa : UNSA. Recuperado de <http://190.119.145.154/bitstream/handle/UNSA/2823/CCmaqujg.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

March, J. y Olser. J. (1997). El redescubrimiento de las instituciones. La base organizativa de la política. México D. F.: FCE.

Martínez, J. (2004). Distintas aproximaciones a la elección racional. *Revista Internacional de Sociología*. 62(37). Recuperado de [:https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/23](https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/23)

Martínez, G. (2017). Economía de arraigo en el valle de Tambo: Conflicto y resistencia por el proyecto minero Tía María en Arequipa, Perú. *Tesis para obtener el título de maestría en Desarrollo Territorial Rural*. Ecuador : FLACSO . Recuperado de [: https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12762/16/TFLACSO-2017GMT.pdf](https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12762/16/TFLACSO-2017GMT.pdf)

Martínez, U. (2012). Movimientos sociales y la autocomunicación de masas. Una revisión del movimiento 15-M. *Tesis para optar al título de Licenciatura en Relaciones Internacionales*. El Colegio de San Luis. Recuperado de [: https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/562/1/Movimientos%20sociales%20y%20la%20autocomunicaci%C3%B3n%20de%20masas..pdf](https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/562/1/Movimientos%20sociales%20y%20la%20autocomunicaci%C3%B3n%20de%20masas..pdf)

McAdam, D., Tarrow, S., y. Tilly. C 2001. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, J. y. Zald, M. (1977). “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory”. *American Journal of Sociology*. 82(6). 1212–41.

Melucci, A. (1989). *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. London: Hutchinson.
(1996). *Challenging Codes*. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
(1999). *Acción Colectiva, Vida Cotidiana y Democracia*. México, D.F.: El Colegio de México.

Merino, R. (2015). The politics of extractive governance: Indigenous peoples and

socio environmental conflicts. *Extractive Industries and Society*, 2(1).

Mitchell, C. (2010). *The Structure of International conflict*. Londres: Palgrave Mcmillan.

Monge, C (2012). *Extractivismo, Neoextractivismo y Post Extractivismo. Un Debate Impostergable en América Latina*. Lima.

Montoya, D. (2019). *Estrategia comunicacional para la prevención de escalamiento del conflicto del proyecto "Tía María"*. Lima: Universidad de Lima.

Moreno, B. (2015). Tía María: 6 razones de por qué la minera Southern ha generado desconfianza en Arequipa. *SPDA Actualidad Ambiental*. Recuperado de : <https://www.actualidadambiental.pe/tia-maria-6-razones-de-por-que-la-minera-southern-ha-generado-desconfianza/>

Paredes, P. y Escobari, F. (2018). El rol de la ganadería y la pobreza en el área rural de Puno. *Revista de Investigaciones Altoandinas*. 20(1). 39–60. Recuperado de : <https://doi.org/dx.doi.org/10.18271/ria.2018.329> Journal

Park, R. y Burgess, W. (1921). *Introduction to Science of the Sociology*

Peris, R. y Agut, S. (2007). Evolución conceptual de la Identidad social. El retorno de los procesos emocionales. *Revista Electrónica de Motivación y Emoción*. 10. 26-27. Recuperado de: <http://reme.uji.es/articulos/numero26/article2/article2.pdf>

Pinto, H. (2016) "Proyecto minero Tía María: razones de la protesta". *Investigacionessociales*. Vol. 20.

Puricelli, S. (2005). La teoría de movilización de recursos desnuda en América Latina. *Theomai*. 12. Buenos Aires : Red Internacional de Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo. Recuperado de [:https://www.redalyc.org/pdf/124/12401202.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/124/12401202.pdf)

Pruitt, D. y Rubin, J. (1986). *Social Conflict. Escalation, Stalemate, and Settlement*. New York: McGraw Hill.

Quintanilla, P., y Scott, R. (2013). Teorizando la acción colectiva en los conflictos socioambientales del Perú actual: el caso del conflicto de Tía María (2009-2011). *Revista Andina de Estudios Políticos*. 3(1). 53-69.

Quiñon, A. (2017). ¿El pasado importa? Legados institucionales, sociedad civil y burocracia local para la gestión de conflictos socioambientales en Moquegua (2000-2016). Lima: Repositorio PUCP.

RED MUQUI y Cooperación (2015) . *Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del Proyecto minero Tia Maria en Islay - Arequipa* . Lima: Cooperación.

Robbins, S. (1987). *Comportamiento Organizacional, Conceptos, Controversias y Aplicaciones*. México: Prentice Hall Hispanoamericana.

Rodríguez, V. (2002). *Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la*

complejidad social. Montevideo: Nordan.

Saade, M. (2013). Desarrollo minero y conflictos socio ambientales. Los casos de Colombia, México y Perú. CEPAL. Serie Macroeconomía del Desarrollo (137), 33-41.

Sarsfield, R. (1996) . Teoría de la acción y subjetividad: Algunas reflexiones en torno a las nociones de acción y sujeto. Revista argentina.gob.ar. Recuperado de:https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/RDUUNC_dc8e198c039c733c147bf28c24a7cb

Saturnino, J. (2004). Distintas aproximaciones a la elección racional. Recuperado de:<https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/239/261>

Scandroglio, B., López, J. y San José, S. (2008). La Teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias. *Psicothema*, 20(1), 80-89.

Silva, R. (2017). Mujeres y conflictos eco territoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Lima: DEMUS.

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2015). Actualidad Ambiental. Lima.

Soler, M. (2013). Agua, actividad minera, y cambio climático, un sistema de complejas interacciones y desastrosas consecuencias. Hoetmer y otros (editores). Lima.

Soria, C. (2006). La Defensoría del Pueblo y los derechos ambientales en el Perú.

Soto, J. (13 de setiembre 2019). Arequipa: Las respuestas de Southern a las críticas de Tía María. La República. Recuperado de : <https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/13/las-respuestas-de-southern-a-las-criticas-por-tia-maria/>

Spears, R., Oakes, P., Ellemers, N. y Haslam, S. (1997). The social psychology of stereotyping and group life. Oxford, UK: Blackwell.

Stakeholders. (23 de marzo de 2018). Caso Tía María: ¿Cómo han influido los medios de comunicación? Noticias. Recuperado de : <https://stakeholders.com.pe/noticias-sh/caso-tia-maria-como-han-influido-los-medios-de-comunicacion/-9>

Tajfel, H., Billig, M., Bundy, R.P. y Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behavior. *European Journal of Social Psychology*. 1.144-77

Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behavior. *Social Science Information*. 13. 65-93

Tanaka, M

(1994). Individualismo metodológico, elección racional, movilización de recursos y movimientos sociales : elementos para el análisis. *Debates en*

Sociología. 19.219-246. Recuperado de:
<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/6915/7064>
(2012). "¿Por qué el Estado no responde adecuadamente a los conflictos sociales?
¿Qué hacer al respecto?". *Economía y Sociedad*, (79), 36-43. Lima: CIES.

Tanaka, M. y Huber, L. (2007). Minería y conflicto social. *Economía y Sociedad* (65).7-17.

Tanaka, M., Zárate, P., Huber, L. y Morel, J. (2011). Mapa de conflictividad social en el Perú. Análisis de sus principales causas. Lima: IEP

Tandioy, M. (2001). Nuevo enfoque de gestión socioambiental para la exploración y producción de hidrocarburos en territorios indígenas. Programa Energía, Población y Ambiente.

Tarrow, S.
(1997). El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial
(2011). Power in Movement. New York/Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C.
(1978). From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley.
(1984). "Social Movements and National Politics". State-Making and Social Movements. 297-317. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Touraine, A.
(1977). The self-production of society. Chicago: University of Chicago Press.
(1981). The Voice and the Eye. Cambridge: Cambridge University Press.

Turner, J. (1991). Social Influence. Buckingham: Open University Press.

Turner, J., Hogg, M., Oakes, P., Reicher, S., y Wetherell, M. (1987). Rediscovering the social group: Self Categorization theory. Oxford: Blackwell

Turner, R, y Killian, L. (1987). Collective Behaviour. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Ugarte, M.
(2018). Gestión estatal del conflicto socio-ambiental de "Tía María" en Arequipa: análisis del período 2007-2017. *Tesis para optar al grado de magíster*. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. PUCP.
(2020). Gestión estatal del conflicto socioambiental de Tía María en Perú. *Análisis político*, 33. 99. Bogotá. Recuperado de :
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47052020000200024

Valcarcel, M. (2015). Proyecto Tía María. *Iproga*. Recuperado de
[:https://www.iproga.org.pe/articulos/tiamaria4.html](https://www.iproga.org.pe/articulos/tiamaria4.html)

Vela, M. (17 de julio 2015). Southern: La falta de diálogo se refleja en internet. Blog Taipá. Recuperado de: <https://cafetaipa.com/2015/07/southern-tia-maria-islay-arequipa-falta-dialogo-facebook-internet/>

Vilela, R. (2020). Análisis y evaluación de la viabilidad de los proyectos mineros en el Perú: Caso Tía María 2017. *Tesis para optar el grado de bachiller*. Escuela de posgrado - Unidad de posgrado de la Facultad de Administración. Lima: UNSA.

Wolf, E. (1972). Dynamics of Ownership in the Circum-Alpine Area. Ownership and Political Ecology. *Anthropological Quarterly*, 45, 201-205.

Zald, M. (1992). Looking Backward to Look Forward. Reflections on the Past and the Future of the Resource Mobilization Research Program. New Haven: Yale University Press.

Zald, M. y McCarthy, J. (1980). "Social Movement Industries: Competition and Cooperation Among Movement Organizations". *Research In Social Movements, Conflict and Change*. 3. 1-2

